TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 340/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Puroagua, Municipio Jerécuaro, Guanajuato.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 340/93, que corresponde al expediente administrativo número 3263, de segundo intento de ampliación de ejido solicitada por un grupo de campesinos del poblado denominado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato; dando cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintitrés de septiembre de dos mil tres, en el juicio de amparo directo D.A. 174/2003, promovido por Camerino Martínez Osornio y otros, así como a las resoluciones emitidas por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en los juicios de amparo números 622/2004 y 478/2006, promovidos por Miguel Jiménez Caballero y Placido Castro Maya, respectivamente; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por Resolución Presidencial de veintiséis de enero de mil novecientos treinta y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre del citado año, se concedió al poblado denominado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, por concepto de dotación de tierras, una superficie de 4,152-00-00 (cuatro mil ciento cincuenta y dos hectáreas) de temporal y agostadero, para satisfacer las necesidades agrarias de ciento setenta y dos campesinos capacitados; el citado fallo presidencial se ejecutó mediante acta de posesión y deslinde de treinta y uno de marzo del mismo año.

SEGUNDO. Mediante Resolución Presidencial de quince de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, se negó al poblado de referencia la primera solicitud de ampliación de ejido, por haberse acreditado en el expediente respectivo, que existían unidades de dotación vacantes dentro de los terrenos concedidos en dotación al poblado de referencia.

TERCERO. Consta en autos que mediante resolución presidencial de veintisiete de octubre de mil novecientos sesenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de mil novecientos sesenta y dos, se dividió el ejido de referencia de la siguiente manera:

Al poblado "Puroagua", le correspondió una superficie de 1,766-26-00 (mil setecientos sesenta y seis hectáreas, veintiséis áreas), para cincuenta y cuatro ejidatarios.

A los poblados "Ojo Seco", "Las Pilas", "La Cueva" y "El Agostadero", anexos del ejido "Puroagua", les correspondió una superficie de 2,385-74-00 (dos mil trescientas ochenta y cinco hectáreas, setenta y cuatro áreas), para ochenta ejidatarios.

CUARTO. Por escrito de dieciséis de marzo de mil novecientos sesenta y uno, vecinos del poblado denominado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, solicitó al Gobernador de la propia entidad federativa, ampliación de ejido, señalando como de probable afectación terrenos de la "Exhacienda Puroagua", propiedad de Dolores Gómez de Parada.

QUINTO. La Comisión Agraria Mixta, instauró el expediente respectivo el quince de mayo de mil novecientos sesenta y uno, bajo el número 3263.

Por oficios números 2375, 2376 y 2377, de veinticuatro de mayo de mil novecientos sesenta y uno, el Gobernador del Estado expidió los nombramientos respectivos a los miembros del comité particular ejecutivo, el que quedó integrado por Estanislao Ortega, Lorenzo Guerrero y Juan Olvera Padilla, con el carácter de presidente, secretario y vocal, respectivamente.

La solicitud de referencia, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el seis de julio de mil novecientos sesenta y uno.

SEXTO. Por oficio número 974, de dos de agosto de mil novecientos sesenta y uno, la Comisión Agraria Mixta ordenó a Antonio Escárcega A., realizara una inspección ocular sobre el aprovechamiento de los terrenos dotados al poblado de "Puroagua", de acuerdo con el artículo 232 del entonces vigente Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, correlativo en lo conducente del artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

El citado comisionado, rindió su informe el veinticinco de agosto de mil novecientos sesenta y uno, en el que hizo constar que se comprobó la existencia de algunas parcelas sin cultivar, debido a que la resolución presidencial antes citada dotó al poblado de que se trata, de una superficie para formar ciento setenta y tres parcelas de 8-00-00 (ocho hectáreas) cada una y que al momento de inspeccionarse los citados terrenos, se encontraron trabajando noventa y cinco parcelas.

Posteriormente mediante acta de aprovechamiento de las tierras ejidales, levantada el veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, por el técnico agrario Carlos Guzmán Luna, consta que los terrenos concedidos por dotación al poblado de referencia, se encontraron debidamente aprovechados, destinándose a la siembra de maíz y a la ganadería.

SEPTIMO. Por oficio número 1413, de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y tres, la Comisión Agraria Mixta designó al ingeniero Ricardo Robles Torres, para que elaborara la diligencia censal agraria, así como los trabajos técnicos informativos; el comisionado aludido rindió sus informes relativos el treinta de julio y once de agosto de mil novecientos sesenta y tres, de cuyo contenido se desprenden substancialmente los resultados siguientes:

En el primero de sus informes el comisionado manifestó que el comisariado ejidal del poblado de que se trata, le informó que los solicitantes de la ampliación de ejido, son los aparceros de los terrenos de la "Exhacienda de Puroagua", pero que son ajenos al ejido del mismo nombre, por lo que no quiso colaborar en la realización de la investigación relativa al aprovechamiento de las tierras dotadas, ni para el levantamiento de la diligencia de verificación censal ordenada; por lo que se avocó a hacer el levantamiento del censo de los solicitantes de la ampliación, resultando un total de ciento cuarenta y un habitantes, treinta y cuatro jefes de familia; habiendo resultado un total de cuarenta y dos campesinos capacitados.

En su segundo informe, el comisionado consignó haber investigado ciento cincuenta y dos predios particulares que se localizan dentro del radio de siete kilómetros, todos éstos provenientes de la "Exhacienda de Puroagua", amparados con certificados de inafectabilidad agrícola, los que se encontraron en posesión y usufructo de cada uno de sus propietarios, sin exceder los límites fijados para la pequeña propiedad; por lo tanto, el comisionado concluyó que no existen predios afectables dentro del radio de siete kilómetros.

OCTAVO. La Comisión Agraria Mixta formuló su dictamen el once de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, en el que propuso negar la acción intentada, tanto por la existencia de parcelas vacantes dentro de las tierras dotadas al ejido de que se trata, así como por la inexistencia de predios afectables dentro del radio de siete kilómetros.

NOVENO. El Gobernador del Estado de Guanajuato, pronunció su mandamiento el veintinueve de junio de mil novecientos sesenta y cuatro, confirmando el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el treinta de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.

DECIMO. El Delgado Agrario del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, formuló su informe reglamentario y opinión en el expediente de que se trata, el veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y cinco, en el sentido de que debía confirmarse el mandamiento del Gobernador del Estado.

DECIMO PRIMERO. Por oficio número 156000, de veintidós de abril de mil novecientos sesenta y cinco, la entonces Subsecretaría de Asuntos Agrarios, comisionó al ingeniero Manuel Jáquez Manduján para llevar a cabo trabajos técnicos informativos complementarios, quien rindió su informe el diez de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, en el que confirma los resultados obtenidos por el comisionado ingeniero Ricardo Robles Torres; además relacionó las afectaciones que han sufrido los terrenos que constituían de la "Exhacienda de Puroagua", siendo las siguientes:

Mediante resolución presidencial de veintiséis de enero de mil novecientos treinta y ocho, se dotó al poblado de "Puroagua", con una superficie de 4,152-00-00 (cuatro mil ciento cincuenta y dos hectáreas).

Por resolución presidencial de veintiséis de enero de mil novecientos treinta y nueve, se dotó al poblado "Las Canoas", con una superficie de 2,400-00-00 (dos mil cuatrocientas hectáreas).

Mediante resolución presidencial de diecinueve de agosto de mil novecientos treinta y seis, se dotó de tierras al poblado "Santa Isabel", con una superficie de 568-00-00 (quinientas sesenta y ocho hectáreas).

Por resolución presidencial de diecinueve de abril de mil novecientos veinticinco, se dotó de tierras al poblado "Puroaguita", con una superficie de 512-00-00 (quinientas doce hectáreas). Al mismo poblado se le concedió por concepto de ampliación de ejido una superficie de 144-00-00 (ciento cuarenta y cuatro hectáreas).

Por último, mediante resolución presidencial de nueve de agosto de mil novecientos treinta y seis, se dotó de tierras al poblado "Paso de Ovejas", con una superficie de 1,853-50-00 (mil ochocientos cincuenta y tres hectáreas, cincuenta áreas).

DECIMO SEGUNDO. Por oficio número 4931, de treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y ocho, la entonces Dirección General para la Investigación Agraria comisionó al técnico agrario Jesús Julián Centeno Salazar para realizar una investigación tendiente a demostrar la existencia de acumulación de provecho en favor de una sola persona en los predios denominados "El Hospital", "Potrero del Bordo", "El Caserío", "El Varal", "El Sauz" y "El Potrillo"; el comisionado rindió su informe el veinte de octubre del mismo año, del que se desprende lo siguiente:

1. Que el predio "Potrero del Bordo", se encuentra fraccionado en veintiún lotes a nombre de diversos propietarios, cuyas superficies en diecinueve de sus fracciones fluctúan entre 2-00-00 (dos hectáreas) la menor a 15-00-00 (quince hectáreas) la mayor, los cuales se encuentran sembrados en su totalidad con cultivos de maíz; las dos fracciones restantes, una se compone de 33-16-54 (treinta y tres hectáreas, dieciséis áreas, cincuenta y cuatro centiáreas), que es propiedad de Teresa Gómez de Parada, se encontró sembrada con cultivos de maíz por conducto de aparceros, la otra fracción se constituye por 144-15-00 (ciento cuarenta y cuatro hectáreas, quince áreas), propiedad de la sucesión de Jorge Gómez de Parada, de dicha superficie se asentó que 136-15-00 (ciento treinta y seis hectáreas, quince áreas) fueron donadas por su propietario a favor de la Presidencia Municipal de la localidad para la creación de la zona urbana, en la que se localizaron sesenta casas-habitación, y las 8-00-00 (ocho hectáreas) restantes se encuentran ocupadas por sus propietarios y sembradas con cultivo de maíz.

2. En el predio "El Sauz", se localizaron tres fracciones con 7-12-50 (siete hectáreas, doce áreas, cincuenta centiáreas), 4-57-50 (cuatro hectáreas, cincuenta y siete áreas, cincuenta centiáreas) y 21-90-00 (veintiuna hectáreas, noventa áreas), respectivamente, a nombre de diversos propietarios, sembradas con maíz.

3. El predio "Potrero del Hospital", se encontró dividido en tres fracciones de 1-30-00 (una hectárea, treinta áreas), 2-69-50 (dos hectáreas, sesenta y nueve áreas, cincuenta centiáreas) y 15-05-00 (quince hectáreas, cinco áreas), explotadas con cultivos de maíz, propiedad de Juan Linares, Eusebio Beltrán Ruiz y Javiera Gómez de Parada, respectivamente, esta última explotada por Leopoldo Valencia, Jesús Moreno, María Salud Heredia y Rafael Ortega, de quienes se dijo son aparceros.

4. Predio "El Potrerillo o Predio Número Tres", con superficie de 15-69-50 (quince hectáreas, sesenta y nueve áreas, cincuenta centiáreas), propiedad de Magdalena Orvañanos de Quijano, se encontró explotado con cultivos de maíz por aparceros, que cuentan con contrato de promesa de venta, siendo los siguientes Leopoldo Valencia, Jesús Moreno, Porfirio Barrera, María Salud Heredia, Apolonio Valencia, Isabel Monroy, Alberto Barrera C. y Perfecto Barrera.

5. Predio "El Varal", propiedad de la sucesión de Miguel Gómez de Parada con 324-70-00 (trescientas veinticuatro hectáreas, setenta áreas), de las cuales 228-82-00 (doscientas veintiocho hectáreas, ochenta y dos áreas) son de agostadero cerril y 95-88-00 (noventa y cinco hectáreas, ochenta y ocho áreas) son de temporal y se encuentran en manos de aparceros desde hace veinte años, la superficie de temporal se encuentra sembrada de maíz; cuenta con instalaciones consistentes en doce casas-habitación.

6. Predio "El Caserío", con 192-80-00 (ciento noventa y dos hectáreas, ochenta áreas) de terrenos de temporal y agostadero, propiedad de la sucesión de Dolores Gómez de Parada, con 20-50-00 (veinte hectáreas, cincuenta áreas) de terrenos de temporal, sembradas de maíz y el resto consideradas como zona urbana, se localizaron trescientas casas habitación.

El comisionado concluyó su informe con la opinión que se transcribe:

"...existe una situación tensa en este poblado por la razón de que los campesinos se encuentran en posesión de 272-00-00 Has., de fracciones de los predios 'Potrero El Sauz', 'El Potrerillo' y 'El Hospital', que se encuentran amparados con acta de posesión de fecha dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho efectuada en la plaza de Jerécuaro por el Presidente de la Comisión Agraria y el Comisariado Ejidal en ese entonces y además que muchas de las personas que se dicen ser propietarios no poseen escrituras..."

El propio comisionado anexó a su informe el acta relativa a la inspección ocular de los predios investigados, levantada el dos de octubre de mil novecientos setenta y ocho, en la que constan los resultados que arrojó dicha diligencia.

DECIMO TERCERO. Por oficio número 4271, de trece de junio de mil novecientos setenta y ocho, la Delegación Agraria comisionó al ingeniero Cirenio Torres Rosales, a fin de que practicara nuevos trabajos técnicos informativos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 210, 241 y 286 fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria; el citado profesional rindió su informe el seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve (que obra en autos a fojas 4 a la 38 del legajo número IX), que contiene una investigación exhaustiva del radio de siete kilómetros, describiendo los predios localizados y consignando los nombres de los propietarios y/o poseedores que los explotan, así como su extensión y calidad de las tierras. Este informe concuerda en su parte fundamental con los diversos informes rendidos por otros comisionados.

En cuanto a la situación de los predios señalados como de probable afectación, denominados "El Varal", "El Sauz", "El Caserío", "El Potrerillo", "El Hospital" y "Potrero del Bordo", el comisionado consignó que no existían mojoneras entre los predios, pero que existen linderos naturales como callejones y arroyos, y en algunas partes cercas de piedra que fueron hechas desde los tiempos de la hacienda; también indicó que éstos cuentan con certificado de inafectabilidad expedidos con anterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de ampliación; que tales inmuebles, aun cuando no cuentan con mojoneras, éstos tienen colindancias naturales, tales como arroyos y callejones, y en algunas partes cuentan con cercas de piedra. El comisionado manifestó que la calidad de las tierras de las fincas investigadas es la siguiente:

“El Varal” y “El Sauz”, propiedad de Lorenza Braniff Lascuiráin, con superficie de 520-90-70 (quinientas veinte hectáreas, noventa áreas, setenta centiáreas) de terrenos de temporal con un treinta por ciento de agostadero.

“El Caserío”, que dicho predio se encuentra ocupado por el caserío del poblado “Puroagua”.

“El Potrerillo”, con superficie de 150-96-00 (ciento cincuenta hectáreas, noventa y seis áreas) de temporal, propiedad de Javiera Gómez de Parada.

“El Hospital”, con superficie de 92-13-33 (noventa y dos hectáreas, trece áreas, treinta y tres centiáreas) de temporal, propiedad de Magdalena Orvañanos de Quijano.

“Potrero del Bordo”, propiedad de María Teresa Gómez de Parada, con superficie de 106-40-00 (ciento seis hectáreas, cuarenta áreas) de temporal.

“Potrero del Bordo”, propiedad de Jorge Gómez de Parada, con superficie de 241-13-89 (doscientas cuarenta y una hectáreas, trece áreas, ochenta y nueve centiáreas) de temporal con veinte por ciento de agostadero.

El comisionado anexó a su informe, el acta de inspección ocular correspondiente, levantada el dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y ocho, suscrita por el mismo, así como los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado solicitante, el Delegado Municipal y un representante de la Central Campesina Independiente, acta que consigna los nombres de los campesinos que explotan los predios antes citados.

DECIMO CUARTO. Obra en autos fotocopia simple de la documental que reza: “Acta de posesión y deslinde de la ampliación de ejido al Poblado de Puroagua”, de dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho, que se encuentra en parte ilegible, constando en el margen superior derecho el emblema del “Departamento Agrario”, y en la última de sus tres páginas, al margen izquierdo un sello del “Comisariado Ejidal” de Puroagua, Municipio de Jerécuaro, Guanajuato”, firmada por Alberto M. Gutiérrez, quién se ostentó con el carácter de representante de la Comisión Agraria Mixta, siendo su contenido del tenor que se transcribe:

“En el pueblo de PUROAGUA Mpio. de Jerécuaro, del Estado de Guanajuato...se reunieron en la plaza pública del lugar, los CC. Ingeniero Alberto M. Gutiérrez, Jefe de la Brigada Agraria en la Zona y Representante de la Comisión Agraria Mixta; Francisco Avila, Graciano Mora y Nicasio Avila, como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Comisariado Ejidal del poblado; así como la mayoría de los campesinos con derecho a esta ampliación, con el objeto de proceder a dar cumplimiento al mandamiento gubernamental, respectivo, el que dice en su punto resolutivo SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota en ampliación al mencionado núcleo de población con una superficie total de 272-00-00 DOSCIENTAS SETENTA Y DOS HECTAREAS de tierra,...que se tomarán íntegramente de la Hacienda de Puroagua, de la Sucesión del señor Jorge Parada...se dio principio a la diligencia dando lectura al mandamiento mencionado, y enseguida el ingeniero en unión de los presentes, teniendo a la vista el plano aprobado, se dirigió a identificar la susodicha superficie de 272-00-00 Has., recorriendo en lo posible los terrenos afectados”.

DECIMO QUINTO. Por oficios números 199144, 199145, 198757 y 198973, de seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, la Dirección General de la Tenencia de la Tierra ordenó a los ingenieros Gerardo Ramos España, Jorge Mesa Rivadeneyra, así como al licenciado Jesús Rodríguez Bustillos y a Félix Medina Ayala, la realización de trabajos técnicos informativos en los predios: “Potrero del Hospital”, “Potrero del Bordo”, “Potrero del Varal” y “Potrero del Sauz”, ubicados en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, cuya explotación al parecer la realizaban campesinos a través de contratos de aparcería que celebraron con los propietarios de los predios; los comisionados rindieron su informe el veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y nueve, en el cual indican que efectuaron la inspección ocular y recorrido de los predios denominados “El Bordo”, “El Hospital”, “Potrerillo”, “El Sauz” y “El Varal”, los cuales se encontraron en posesión de sesenta y cinco campesinos que ocupan diversas superficies de terreno de tales inmuebles, con superficies que oscilan entre 1-00-00 (una hectárea) y 8-00-00 (ocho hectáreas); asimismo informaron que en el acta levantada el catorce de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, el propietario Guadalupe Perea Linares manifestó que no presentaba ningún documento ni objeción alguna al trabajo efectuado en virtud de existir en la Dirección General de Tierras y Aguas, un legajo conteniendo la copia de los contratos de aparcería y la demás documentación que presentó, y los campesinos solicitaron la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria, ya que existe el expediente penal número 199/978 del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, así como la acusación contra otros diecisiete campesinos por el delito de despojo, para que le hiciera saber a dicho juzgado que ellos están en posesión de esos predios, conforme al acta de posesión y deslinde del dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho.

DECIMO SEXTO. Por oficio número 199193, de trece de junio de mil novecientos setenta y nueve, la entonces Dirección General de Tierras y Aguas ordenó al ingeniero Roberto Rubio Ayón, levantar un plano que repusiera el de la primera ampliación de ejido del poblado “Puroagua”, que contaba con acta de posesión

y deslinde provisional de dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho; que asimismo debía realizar una inspección ocular para constatar la posesión de los terrenos por parte de los campesinos solicitantes de tierras, que ampara el acta de posesión y deslinde; el comisionado rindió su informe el trece de agosto de mil novecientos setenta y nueve, siendo su contenido del tenor siguiente:

“se hizo la inspección ocular al terreno, indicando los campesinos que hasta la fecha no han tenido problemas para estarlo sembrando, de los ejidos colindantes, nada más el de Santa Isabel mostró sus papeles que ampara a su ejido ya que el Comisariado de Puruoagüita, dijo que no tenía las facultades de firmar la notificación y que no podía prestar los papeles a cualquiera y que le habían prohibido firmar dicha notificación... el Sr. Orvañanos, nunca se presentó a firmar las notificaciones... al terminar dicho levantamiento y después de haber hecho los cálculos respectivos se encontró que tienen un sobrante de 24-64-57.04 has. más de las 272-00-00 Has., que ampara dicha acta. Ya que al tratar de comenzar el levantamiento en base al acta no pudieron darme un punto base para comenzar el trabajo y al tratar de ver un punto en el acta decían que no era ese, y que ellos me indicarían por donde creían que iban sus linderos y basándome en ellos se realizó el trabajo.

Después de haber terminado con dicho trabajo los campesinos me dijeron que por órdenes del Subdirector Gral., Arq. Ramón Sotres Núñez, le dijo que el Técnico que fuera les hiciera el levantamiento de unos terrenos que tienen en posesión desde 1947, y que lo han estado trabajando pacíficamente hasta la fecha, así como los que tienen en el Acta, debido a que eso no iba indicado en mi oficio, hablé con el Arq. Rigoberto Torres, sobre eso y me dijo que hiciera el levantamiento y al primer problema que tuviera le hablara y terminé con el trabajo sin ningún problema, encontrando una superficie de 252-65-57.20 Has., toda estas ubicadas en el Predio `EL VARAL`.

Toda esta superficie que tienen en posesión, se encuentra dentro de los predios 1.) `El Potrerillo`, 2.) `Potrero del Bordo`, 3.) Predio `Patejé` y 4.) Predio `El Varal`.

Los campesinos de dicho poblado solicitan a la Secretaría de la Reforma Agraria, que se les entreguen dichas superficies que tienen en posesión, ya que hasta la fecha no han tenido problema alguno en estarla trabajando desde mil novecientos cuarenta y siete”.

El comisionado anexó a su informe el acta relativa a la inspección ocular efectuada a los predios de que se trata, de treinta de junio de mil novecientos setenta y nueve.

DECIMO SEPTIMO. Por oficio número 5281, de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta, la Delegación Agraria comisionó al ingeniero José Luis Baladrán Anguiano, para que realizara trabajos técnicos informativos complementarios a efecto de determinar el número de campesinos que se encuentran en posesión desde mil novecientos treinta y ocho y mil novecientos cuarenta y siete, de las superficies de 296-64-57 (doscientas noventa y seis hectáreas, sesenta y cuatro áreas, cincuenta y siete centiáreas) y 252-65-57 (doscientas cincuenta y dos hectáreas, sesenta y cinco áreas, cincuenta y siete centiáreas), según el levantamiento topográfico realizado el trece de agosto de mil novecientos setenta y nueve, por el ingeniero Roberto Rubio Ayón; asimismo se le ordenó recabar constancias de posesión respecto de los predios señalados, así como constancias de abandono de los mismos por parte de sus propietarios; el comisionado rindió su informe el veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta, haciendo constar lo siguiente:

“asistiendo únicamente el Presidente del Consejo de Vigilancia, ya que los integrantes del Comisariado se niegan a cooperar, para cualquier intento de ampliación del ejido que nos ocupa. Al día siguiente llevamos a cabo el recorrido del polígono que compone los predios denominados `PATEJE` y `POTRERILLO`, con una superficie de 296-64-57 Has., en seguida se continuó con el siguiente polígono que lo compone el predio denominado `EL VARAL` con una superficie de 252-65-57 Has., según levantamiento topográfico del profesionista Ing. Roberto Rubio Ayón...comprobandose que efectivamente se encuentran en explotación los terrenos de los predios denominados `PATEJE`, `POTRERILLO` y `EL VARAL` todos del Municipio de Jerécuaro, Gto., por las personas que en el acta relativa se levantó... se comprobó la relación de personas que se acompañan al acta, manifestando la mayoría de los solicitantes que ellos han sido los promoventes del expediente relativo a la ampliación de ejido del poblado en cuestión, asimismo se encontró en los expedientes que obran en la Sala Estatal del Cuerpo Consultivo Agrario, planificación de las superficies a que me ordenan investigar, es por eso que no llevé a cabo el levantamiento topográfico, ya que al realizar el recorrido de los terrenos, se comprobó que la localización de dicha superficie está debidamente ubicada”.

En el acta de inspección ocular de los predios investigados, elaborada el nueve de junio de mil novecientos ochenta, se hace constar que los terrenos recorridos se encuentran en posesión y explotación de cincuenta y un campesinos, cuyos nombres son los siguientes:

1. Martín Vega Vega. **2.** Agustín Guerrero Barrera. **3.** Gabriel Castro Ruiz. **4.** Alberto Barrera Pichardo. **5.** Rafael Castro Rodríguez. **6.** Román Barrera Dámaso. **7.** Francisco Barrera M. **8.** Antonio Barrera Dámaso. **9.** Abraham Martínez R. **10.** Ismael Martínez Rodríguez. **11.** Abel Barrera Pichardo. **12.** José Castro Rodríguez. **13.** Simeón Aguilar Palacio. **14.** Demetrio Olvera Padilla. **15.** María Belén Barrera, **16.** Donato Barrera Onofre,

17. Pablo Olvera Castro, 18. Valente Granados Noguéz. 19. Antonio Barrera Martínez. 20. Manuel Arreola Tovar. 21. Ma. Esther Arreola Rosales. 22. Ma. Cirila Onofre Garnica. 23. Cipriano Arreola Rosales. 24. Manuel Arreola Rosales. 25. Gabino Rodríguez Aguilar. 26. Gabino Beltrán Padilla. 27. Juan Garnica Elizondo. 28. Rubén Mondragón Noguéz. 29. Gonzalo Noguéz Noguéz. 30. Nicasio Noguéz. 31. Francisco Rodríguez Hernández. 32. Juan Barrera Onofre. 33. Guadalupe Barrera Orrala. 34. Abel Barrera Galindo. 35. Raúl Barrera Galindo. 36. Sabino Barrera Dámaso. 37. José Aguilar Rosales. 38. Emiliano Barrera Montoya. 39. Juan Peña Olvera. 40. Felipe Barrera Onofre. 41. Eusebio Pozos Martínez. 42. Marcelino Barrera Palomar. 43. Ignacio Valencia Ledezma. 44. Apolonio Valencia Castro. 45. Petronilo Martínez Alcantar. 46. Ma. del Carmen Peña Olvera. 47. Perfecto Tovar Arreola. 48. Francisco Piña García. 49. Ignacio Orrala Garnica. 50. Eustacio Mendoza G. y 51. Gorgonio Nicasio.

DECIMO OCTAVO. Por acuerdo de cuatro de agosto de mil novecientos ochenta, el Cuerpo Consultivo Agrario solicitó a la Dirección General de Tenencia de la Tierra, que por conducto de la Subdirección de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria, con fundamento en los artículos 418 y 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria, iniciara el procedimiento tendiente a dejar sin efectos jurídicos los acuerdos de inafectabilidad, que protegen a los predios investigados, así como la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola que los protegen, siendo los siguientes:

Números 97593, 91507, 97594 y 107731, respectivamente, expedidos a favor de Javiera Gómez de Parada, José Ramírez Ortiz, Miguel Gómez de Parada y Magdalena Orvañanos de Quijano, según acuerdos presidenciales de veintitrés de abril, trece de febrero y siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre, veintinueve de octubre y trece de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, y catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, que amparan la fracción del lote número III, fracción II, fracción del lote I y fracción III todas de la "Exhacienda de Puroagua", ubicadas en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con superficies de 150-96-66 (ciento cincuenta hectáreas, noventa y seis áreas, sesenta y seis centiáreas), 157-36-00 (ciento cincuenta y siete hectáreas, treinta y seis áreas), 324-70-00 (trescientas veinticuatro hectáreas, setenta áreas) y 92-63-33 (noventa y dos hectáreas, sesenta y tres áreas, treinta y tres centiáreas) de terrenos de agostadero y temporal, actual propiedad de Javiera Gómez de Parada; Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández; Guadalupe Perea Linares y Magdalena Orvañanos de Quijano; lo anterior por haberse considerado que los predios señalados, se dejaron de explotar por más de dos años consecutivos por parte de sus propietarios, de acuerdo con los diversos trabajos técnicos informativos realizados.

DECIMO NOVENO. Por el motivo antes indicado, la Dirección General de Tenencia de la Tierra, por conducto de la Dirección de Inafectabilidad Agrícola Ganadera y Agropecuaria, instauró el procedimiento de nulidad de los acuerdos de inafectabilidad que protegen a los predios señalados, así como la cancelación de los certificados respectivos; ordenándose la notificación correspondiente a los propietarios, mediante los oficios y edictos que corren agregados a fojas 40 a la 78 y 168 a la 171 del legajo número XIV del expediente de que se trata.

Consta en autos que al procedimiento referido, comparecieron los diversos propietarios Luis y Magdalena Orvañanos, Lorenza Braniff y Rosa del Carmen de León Mendoza, respectivamente, mediante escrito de diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y uno, ofreciendo pruebas y formulando sus alegatos respectivos, tendientes a desvirtuar la causal de afectación que se le atribuyó a sus predios rústicos.

VIGESIMO. Por oficios números 417716 y 2392, de tres y veintidós de julio de mil novecientos ochenta y uno, la Dirección General de Tenencia de la Tierra comisionó a Alberto Noyola Vázquez e ingeniero Juan Manuel Castillo Segura, a fin de investigar la capacidad agraria del núcleo promovente, de conformidad con los artículos 200 y 202 de la Ley Federal de Reforma Agraria; quienes rindieron su informe el veintinueve de julio del mismo año, consignando en el acta relativa a la investigación censal de los solicitantes de tierras, de veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y uno, la existencia de un total de cuarenta y cinco campesinos capacitados, que se encontraban en posesión y usufructo de las tierras solicitadas en ampliación.

VIGESIMO PRIMERO. Por su parte el Cuerpo Consultivo Agrario formuló su dictamen el veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y dos, en sentido positivo, en el que propuso dejar parcialmente sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad que protegen a los predios ante señalados, así como la cancelación de los certificados de Inafectabilidad agrícola números 97593, 91507, 97594 y 107731, respectivamente, expedidos a favor de la extinta Javiera Gómez de Parada, José Ramírez Ortiz, Miguel Gómez de Parada y Magdalena Orvañanos de Quijano; por consiguiente, propuso se dotara al poblado que nos ocupa, en la vía de ampliación de ejido, con una superficie de 701-22-68 (setecientas una hectáreas, veintidós áreas, sesenta y ocho centiáreas), provenientes de la fracción del lote número III, fracción II, fracción del lote I y la fracción III de la "Exhacienda de Puroagua".

VIGESIMO SEGUNDO. Mediante oficio número 5629, de veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y tres, el Delegado Agrario en el Estado, comisionó a los ingenieros Bernardo Araiza González y Cirenio Torres Rosales, para que realizaran el levantamiento topográfico de los predios señalados como afectables en el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario de veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y dos; los comisionados rindieron su informe el once de agosto de mil novecientos ochenta y tres, en el que expresaron substancialmente lo siguiente:

“FRACCION DEL LOTE No. 3 DE LA EX-HDA. DE PUROAGUA, PROP. SUC. JAVIERA GOMEZ DE PARADA: Temporal con 10% de agostadero . . . 132-64-87 Has.

FRACC. DE LA EX-HDA. DE PUROAGUA, PROP. LORENZA BRANIFF LASCURAIN DE GOMEZ DE PARADA, ROBERTO RIVERA PADILLA, JORGE HERNANDEZ MUÑOZ, SALVADOR HERNANDEZ MUÑOZ, ROSA DEL CARMEN DE LEON MENDOZA DE ORVAÑANOS y TEODORO GARCIA HERNANDEZ.

Temporal con 10% de agostadero . . . 155-37-36 Has.

FRACC. DEL LOTE No. 1 DE LA EX-HDA. DE PUROAGUA, PROP. J. GUADALUPE PEREA LINARES.

Temporal con 10% de agostadero . . . 321-74-50 Has.

FRACC. DEL LOTE No. 3 DE LA EX-HDA. DE PUROAGUA, PROP. MAGDALENA ORVAÑANOS DE QUIJANO.

Temporal con 10% de agostadero . . . 51-86-23 Has.

TOTAL CUATRO AFECTACIONES 661-62-96 Has.

Como puede apreciarse hay diferencias en superficie entre lo que ordena proyectar el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario y la superficie real de los predios que se proponen para afectar, siendo la diferencia mayor de la “FRACCION DE LOTE NUM. 3 DE LA EX-HDA. DE PUROAGUA”, propiedad de MAGDALENA ORVAÑANOS DE QUIJANO, como también la calidad de los terrenos en los cuatro predios citados son todos de temporal con un 10% de agostadero”.

VIGESIMO TERCERO. Consta en autos el acuerdo suscrito el dos de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, por el Secretario de la Reforma Agraria, mediante el cual resolvió dejar parcialmente sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícola, así como la cancelación de los certificados de inafectabilidad correspondientes que amparan y protegen a los diversos predios señalados como de probable afectación en la acción agraria que nos ocupa, por considerarse que éstos dejaron de cultivarse, por un período mayor de dos años consecutivos, sin causa justificada; siendo los siguientes:

1. Acuerdo Presidencial de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del once de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, en cuyo cumplimiento se expidió el certificado de inafectabilidad agrícola número 97593 en favor de Javiera Gómez de Parada, que ampara la fracción del lote número III de la “Exhacienda de Puroagua”, con superficie de 150-96-66 (ciento cincuenta hectáreas, noventa y seis áreas, sesenta y seis centiáreas), actual propiedad de la sucesión de Javiera Gómez de Parada.

2. Acuerdo Presidencial de trece de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, en cuyo cumplimiento se expidió el certificado de inafectabilidad número 91507, en favor de José Ramírez Ortiz, que ampara la fracción II de la “Exhacienda de Puroagua”, con superficie de 157-36-00 (ciento cincuenta y siete hectáreas, treinta y seis áreas), actual propiedad de Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández.

3. Acuerdo Presidencial de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, en cuyo cumplimiento se expidió el certificado de inafectabilidad agrícola número 97594, en favor de Miguel Gómez de Parada, que ampara la fracción del Lote I de la “Exhacienda de Puroagua”, con superficie de 324-70-00 (trescientas veinticuatro hectáreas, setenta áreas), actual propiedad de Guadalupe Perea Linares.

4. Acuerdo Presidencial de siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, en cuyo cumplimiento se expidió el certificado de inafectabilidad número 107731, en favor de Magdalena Orvañanos de Quijano, que ampara la fracción III de la “Exhacienda de Puroagua”, con superficie de 92-63-33 (noventa y dos hectáreas, sesenta y tres áreas, treinta y tres centiáreas).

VIGESIMO CUARTO. Posteriormente, el Cuerpo Consultivo Agrario formuló nuevo dictamen el cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, en el que modificó su diverso dictamen de veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y dos, únicamente por lo que se refiere a la superficie propuesta como afectable, ya que conforme a los trabajos realizados por los ingenieros Bernardo Araiza González y Silverio

Torres Rosales, y de su informe rendido el once de agosto de mil novecientos ochenta y tres, se desprende que la superficie real propuesta para su afectación, resultó ser de 661-62-96 (seiscientos sesenta y una hectáreas, sesenta y dos áreas, noventa y seis centiáreas) de temporal y agostadero, por lo que estimó que dicha superficie es la que debía tomarse como base para la acción agraria intentada.

VIGESIMO QUINTO. Con los elementos anteriores, el Cuerpo Consultivo Agrario formuló nuevo dictamen el quince de noviembre de mil novecientos noventa, en el que propuso dejar sin efectos jurídicos en forma parcial los acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícola, que protegen a los predios propuestos como afectables, así como la cancelación parcial de los certificados de inafectabilidad que emanaron de éstos, que amparan las diversas fracciones de terreno; en tales condiciones, propuso se dotara al núcleo solicitante de tierras, por concepto de ampliación de ejido, con una superficie de 661-62-96 (seiscientos sesenta y una hectáreas, sesenta y dos áreas, noventa y seis centiáreas) de diversas calidades, que se tomarían de la "Exhacienda de Puroagua", para beneficiar a cuarenta y cinco campesinos capacitados; en dicho dictamen se dejaron sin efectos jurídicos los diversos dictámenes de veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y dos y cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, así como los planos proyecto de localización autorizados anteriormente; luego, por considerar debidamente integrado el expediente relativo al procedimiento de ampliación de ejido del poblado que nos ocupa, lo remitió a este Tribunal Superior para su resolución definitiva.

VIGESIMO SEXTO. Por auto de veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado ante este Organismo Jurisdiccional el expediente de ampliación de ejido de referencia, el que se registró con el número 340/93; en el proveído de mérito, se ordenó notificar a los interesados en términos de ley y se comunicó a la Procuraduría Agraria, para los efectos legales a que hubiera lugar.

VIGESIMO SEPTIMO. El Tribunal Superior Agrario pronunció sentencia en el juicio agrario que nos ocupa, el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en el sentido de negar la acción intentada, por no existir predios susceptibles de afectación dentro del radio de siete kilómetros del poblado solicitante, denominado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato.

VIGESIMO OCTAVO. Inconforme con la sentencia anterior, el comité particular ejecutivo del núcleo solicitante de tierras, por escrito de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, promovió demanda de garantías de la que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número D.A. 2495/94, y seguidos los trámites de ley, se pronunció ejecutoria el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cinco, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el poblado quejoso, para los efectos que se especifican en la parte considerativa de la ejecutoria de mérito, que se transcribe en la parte que interesa:

"Ahora bien, una de las pruebas que obra en el expediente agrario, tendiente a justificar la posesión de dicho núcleo campesino sobre las señaladas tierras, lo es el acta de posesión y deslinde de fecha dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho, que es visible en los legajos V, X y XIV, en las fojas, respectivamente mil seiscientos trece a mil seiscientos dieciséis, dieciocho a veinte y diecinueve a veintiuno, de cuyo contenido se advierte que fue levantada con intervención del Ingeniero Alberto M. Gutiérrez, Jefe de la Brigada Agraria en la Zona y Representante de la Comisión Agraria Mixta, Francisco Avila, Graciano Mora y Nicasio Avila, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal de Puroagua, Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, así como con 'la mayoría de campesinos con derecho a esa ampliación', y que en cumplimiento a mandamiento gubernamental, se les dio posesión provisional de 272-00-00 hectáreas de tierra con motivo de ampliación ejidal, procediendo al referido profesionista a identificar y deslindar esa superficie.

A dicha documental, la responsable no le concedió valor probatorio alguno, pero no tomó en consideración que por tratarse de una prueba esencial para el conocimiento de los hechos, debió recabar de manera oficiosa el original o copias certificadas de dicha acta, conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley Agraria en vigor, que dispone: 'Artículo 187.- Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones.

Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder, para que comparezcan como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos'.

Sin que sea óbice para lo antes señalado, lo también aducido por la responsable, para negarle valor probatorio a la reseñada acta de posesión y deslinde de dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho, en el sentido de que es incongruente su contenido, porque la dotación ejidal del poblado en cuestión, fue hecha por la resolución presidencial de veintiséis de enero de mil novecientos treinta y ocho, ejecutada el treinta y uno de marzo del mismo año, y la primera solicitud de ampliación de ejido culminó con resolución

presidencial negativa del quince de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, sin que se emitiera mandamiento alguno; pues aun cuando ello fuera así, de todas maneras existiría una prueba de la posesión del núcleo campesino, sobre parte de las tierras litigiosas; con independencia de si el citado funcionario agrario, quien les entregó las tierras, actuó de manera correcta o no, pues en esa determinación no contó con injerencia el núcleo campesino.

Por otra parte, una vez recabada la documental citada, y llegado el momento de dictar nueva sentencia, deberá el tribunal responsable tomar en cuenta: 1.- El informe de actualización censal, visible de la foja dieciocho a la treinta y tres del legajo III del expediente agrario, realizado por Juan Manuel Castillo Segura y Alberto Noyola Vázquez, de fecha veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y uno, del que se advierte que se localizaron a cuarenta y cinco campesinos capacitados; esto, para efectos de determinar la capacidad individual y colectiva del grupo promovente. 2.- Si dichos solicitantes son los mismos que se encuentran en posesión de los terrenos de los cuales solicitan su ampliación, con base en los trabajos técnicos informativos complementarios llevados a cabo por José Luis Balandrán Anguiano, de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta, que es visible de la foja cuatro a la veinte del legajo XIII del expediente agrario; si los mencionados solicitantes suscribieron contrato de aparcería con los propietarios de los terrenos en cuestión basándose para ello en los convenios existentes en el expediente agrario que son visibles en los legajos XIV y XVI, fojas de la trescientos treinta y seis a la trescientos noventa y dos, y dos mil trescientos quince a dos mil cuatrocientos siete, así como de la dos mil cuatrocientos dieciséis a la dos mil cuatrocientos veintiuno, respectivamente. 3.- El acuerdo de fecha dos de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, emitido por el Secretario de la Reforma Agraria en que canceló parcialmente los certificados de inafectabilidad agrícola números 97593, 91507, 97594, 107731, que protegían contra posibles afectaciones agrarias a los predios denominados: 'FRACCION DEL LOTE 3 DE LA EX HACIENDA DE PUROAGUA', 'FRACCION 2 DE LA EX HACIENDA DE PUROAGUA', 'FRACCION DEL LOTE 1 DE LA EX HACIENDA DE PUROAGUA' y 'FRACCION 3 DE LA EX HACIENDA DE PUROAGUA', ubicados en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, expedidos a favor, respectivamente, de Javiera Gómez de Parada, José Ramírez Ortiz, Miguel Gómez de Parada y Magdalena Orvañanos, en virtud de que dichas fracciones de tierra dejaron de cultivarse por un período mayor de dos años consecutivos sin causa justificada, como se advierte del dictamen del Cuerpo Consultivo de fecha siete de enero de mil novecientos noventa y tres, y del acuerdo mencionado, que son visibles, respectivamente, en el legajo dos y en un folder del expediente agrario; 4.- Que en autos del juicio agrario, legajo XIV, sólo obran copias fotostáticas de algunas constancias de la causa penal, no averiguación previa, número 199/978, formada con motivo de la consignación de la indagatoria 192/978 ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Acámbaro, Guanajuato; que la sentencia dictada en primera instancia en dicho proceso, fue de carácter absolutorio por incomprobación del tipo delictual de despojo, resolución que fue confirmada en segunda instancia; que la diversa averiguación previa 81/981, no existe, sino lo que obra en las fojas de la cuarenta y seis, a la cincuenta del legajo III, del expediente agrario, son copias certificadas de actuaciones llevadas en el proceso penal 81/981, instruido en el citado Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de Acámbaro, Guanajuato, en contra de Jorge González Huerta y Otros, por los delitos de despojo y daños, en el que se advierte la diligencia de posesión, en la que el titular del órgano jurisdiccional mencionado, restituyó a los ofendidos en esa causa, la mayoría de los cuales son solicitantes de la ampliación ejidal en cita, en la posesión de tierras ubicadas en las fracciones segunda y quinta de la Ex-Hacienda de Puroagua, Jerécuaro, Guanajuato; 5.- Que los trabajos informativos complementarios de Roberto Rubio Ayón, visibles en el legajo VIII, practicados en el año de mil novecientos setenta y nueve, además de los que asentó se señaló que las tierras amparadas por el acta de posesión y deslinde de fecha dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho, con una extensión de 272-00-00 hectáreas, más un excedente de 24-64-57.04 hectáreas, eran ocupadas por el núcleo campesino, quien también se encontraba en posesión de la diversa extensión de 252-65-57.20 hectáreas; y que, en los trabajos realizados por José Luis Balandrán Anguiano en el año de mil novecientos ochenta, visible en el legajo XIII, se realizó una inspección ocular en los terrenos solicitados en ampliación por los campesinos, en la que hizo alusión de los nombres de las personas que se encuentran en posesión de dichos terrenos, los cuales son en su mayoría solicitantes de la ampliación, conforme a la actualización censal de fecha veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y uno, realizado por Juan Manuel Castillo Segura y Alberto Noyola Vázquez.

En virtud de lo antes expuesto, la sentencia reclamada resulta violatoria de la garantía de legalidad consignada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, lo que amerita otorgar a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el Tribunal responsable deje insubsistente la resolución reclamada, recabe el original de la aludida prueba documental, consistente en el acta de posesión y deslinde de dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho, y, hecho lo anterior, emita nueva resolución conforme a derecho proceda; pero, siguiendo los lineamientos marcados en esta ejecutoria.

En las relacionadas condiciones, al resultar violatoria de garantías la sentencia reclamada, lo que procede es otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto indicado".

VIGESIMO NOVENO. En cumplimiento a la citada ejecutoria este Tribunal Superior, mediante acuerdo de quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dejó insubsistente la sentencia reclamada a fin de reponer el procedimiento del juicio agrario de que se trata, conforme a los lineamientos que se precisan en dicha ejecutoria.

TRIGESIMO. Este órgano jurisdiccional dictó nueva sentencia el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, conforme a los lineamientos de la ejecutoria antes referida, cuyos puntos resolutive son del tenor siguiente:

“PRIMERO. Ha lugar a dejar parcialmente sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de veintitrés de abril, trece de febrero, veintitrés de abril y siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre, veintinueve de octubre y trece de noviembre del mismo año, y catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, por los cuales se expidieron los certificados de inafectabilidad agrícola números 97593, 91507, 97594 y 107731.

SEGUNDO. Es procedente la ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado ‘Puroagua’, Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato.

TERCERO. Es de dotarse por concepto de ampliación de ejido al poblado de referencia, con una superficie de 661-62-96 (seiscientas sesenta y una hectáreas, sesenta y dos áreas, noventa y seis centiáreas) de terrenos de temporal y agostadero, que se tomarán de la siguiente manera: 132-64-87 (ciento treinta y dos hectáreas, sesenta y cuatro áreas, ochenta y siete centiáreas) correspondientes a la fracción del lote número III de la ‘Ex-hacienda de Puroagua’, propiedad de Javiera Gómez de Parada; 155-37-36 (ciento cincuenta y cinco hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y seis centiáreas) correspondientes a la fracción II de la ‘Ex-hacienda de Puroagua’, propiedad de Lorenza Braniff Lascurain de Gómez de Parada, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández; 321-74-50 (trescientas veintiuna hectáreas, setenta y cuatro áreas, cincuenta centiáreas) correspondientes a la fracción del lote número I de la ‘Ex-hacienda de Puroagua’, propiedad de Guadalupe Perea Linares y 51-86-23 (cincuenta y una hectáreas, ochenta y seis áreas, veintitrés centiáreas) correspondientes a la fracción del lote número III de la ‘Ex-hacienda de Puroagua’, propiedad de Magdalena Orvañanos de Quijano, ubicadas en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato; afectables con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria interpretado en sentido contrario; entregándole en propiedad dicha superficie al poblado solicitante, conforme al plano proyecto que obra en autos, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres para constituir los derechos agrarios correspondientes de los cuarenta y cinco campesinos beneficiados, relacionados en el considerando tercero de la presente sentencia; en cuanto a la determinación del destino de estas tierras y su organización económica y social, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

CUARTO. Se revoca el mandamiento negativo del Gobernador del Estado de Guanajuato del veintinueve de junio de mil novecientos sesenta y cuatro...”.

TRIGESIMO PRIMERO. Inconformes con la sentencia anterior, por escrito presentado el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Superior, Magdalena Orvañanos de Quijano, por su propio derecho, Jaime Arrangoiz Orvañanos, en representación de Guadalupe Orvañanos de Arrangoiz, María del Socorro Gómez de Parada Braniff de Espíndola, como heredera de Lorenza Braniff de Gómez de Parada y como apoderada general de Lorenza Gómez de Parada Braniff de Prevoisin y Miguel Gómez de Parada Braniff; Rosa del Carmen de León Mendoza de Orvañanos, Jorge Hernández Muñoz y Roberto Rivera Padilla, promovieron juicio de amparo que se tramitó bajo el número D.A.1945/99, del cual conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y que se resolvió por resolución de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en los términos siguientes:

“UNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MAGDALENA ORVAÑANOS DE QUIJANO, por su propio derecho, JAIME ARRANGOIZ, TAMBIENORVAÑANOS, en representación de GUADALUPE ORVAÑANOS DE ARRANGOIZ, MARIA DEL SOCORRO GOMEZ DE PARADA BRANIFF DE ESPINDOLA, como heredera de LORENZA BRANIFF DE GOMEZ DE PARADA y como apoderada general de LORENZA GOMEZ DE PARADA BRANIFF DE PREVOISIN y MIGUEL GOMEZ DE PARADA BRANIFF; ROSA DEL CARMEN DE LEON MENDOZA DE ORVAÑANOS, JORGE HERNANDEZ MUÑOZ Y ROBERTO RIVERA PADILLA, contra la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario, el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el expediente agrario número 340/93, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución”.

La protección de la justicia federal se concedió para los efectos que se precisan en el considerando sexto de la ejecutoria de mérito, que se transcribe en la parte que aquí interesa:

“SEXTO.- Los conceptos de violación hechos valer, son parcialmente fundados.

(...)

Por lo tanto, es de concluirse que los argumentos vertidos por la parte quejosa y que van dirigidos a demostrar la ilegalidad del acta de posesión, de fecha dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho, son ineficaces dado que, a dicha actuación no se le da valor probatorio pleno respecto de la ampliación del ejido solicitante, sino sólo respecto a la posesión de los predios afectables.

En cambio, son parcialmente fundados y suficientes para otorgar al amparo solicitado, los argumentos que se hacen consistir en que se violó la garantía de audiencia en perjuicio de la parte quejosa, dado que los trabajos censales realizados no se les pusieron a la vista y que para la práctica de la inspección ocular realizada por el comisionado ROBERTO RUBIO AYON, así como de los Trabajos Técnicos complementarios realizados por el ingeniero JOSE LUIS BALANDRAN ANGUIANO, no se les notificó en forma personal la realización de tales diligencias.

Lo anterior es así dado que, como lo preveía el artículo 288, de la Ley Federal de Reforma Agraria, la Comisión Agraria Mixta tenía la obligación de poner a la vista de los solicitantes y propietarios, los trabajos censales, para que en el término de diez días formularan sus objeciones a las pruebas documentales correspondientes, y en caso de que procedieran dichas objeciones rectificaría los datos objetados dentro de los diez días siguientes.

Cabe precisar que en el caso los censos levantados se realizaron el seis de julio de mil novecientos sesenta y uno y el veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y uno.

Ahora bien, como se desprende del oficio número 6004 del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización del doce de agosto de mil novecientos sesenta y tres, los propietarios a través de Margarita Orbañanos (sic) de Robles Gil, exhibieron cédula de notificación girada por la Comisión Agraria Mixta, relacionada con los trabajos realizados en términos del artículo 233 del Código Agrario, exhibiendo documentos y alegatos a los que la citada Comisión estableció que serían tomados en cuenta al hacerse el estudio respectivo de dichos expedientes (fojas 73 y 74 del legajo L-XI).

En cambio, respecto al segundo de los censos señalados es de precisarse que no existe constancia en los legajos que integran el trámite del procedimiento agrario, de la que se desprenda que se cumplió con lo dispuesto en el artículo 288 invocado.

Por otra parte, como se advierte de los legajos VIII y XIII del expediente 25/21627, en los cuales se contienen las diligencias relativas a la inspección ocular y los trabajos técnicos complementarios realizados por Roberto Rubio Ayón y José Luis Balandrán Anguiano, respectivamente, en ninguno de ellos se aprecia que se haya realizado acto alguno encaminado a cumplir con la garantía de audiencia, es decir, acto alguno dirigido a informar a los pequeños propietarios, que se realizarían dichas diligencias.

No es óbice a lo anterior, el que, del legajo número VIII, que contiene el informe de los actos realizados por el ingeniero ROBERTO RUBIO AYON comisionado para el levantamiento del Plano que reponga el de la primera ampliación con Acta de Posesión y Deslinde, se desprenda la leyenda que: ‘El Sr. ORVAÑANOS, nunca se presentó a firmar las notificaciones’, (FOJA 938) y que exista una notificación al C. Luis Orvañanos Gómez de Parada, dado que, como ya se señaló no se observa acto alguno que tienda a cumplir con la misma.

Cabe también señalar, que del legajo XIII, tampoco se observa la realización de acto alguno tendente a hacer del conocimiento de los pequeños propietarios las diligencias a realizar por el Ingeniero José Luis Balandrán Anguiano, sin que pueda suplir dicho acto jurídico la constancia que obra a fojas dieciséis del legajo en cita, en la que se menciona que María Dolores Gómez de Parada, Jorge Gómez Parada y María Teresa Gómez Parada, están desavecindados del poblado Puroagua desde hace más de dos años, ni tampoco lo haga la constancia que en el propio legajo obra a fojas dieciocho, y en la que se asienta que María Dolores Gómez de Parada, Jorge Gómez Parada y María Teresa Gómez Parada, abandonaron desde hace más de 2 años los predios que en el mismo se indican, dado que de ser así, se hubiesen agotado los medios leales que la legislación contempla para cumplir con las notificaciones respectivas.

Por lo anterior, es que al no estar demostrado que se notificó a los propietarios afectados la realización de las diligencias aludidas, se les privó del derecho de intervenir y hacer las manifestaciones que estimaran procedentes, con clara violación a lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, razón por la cual procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte las órdenes necesarias para poner a la vista de los quejosos las diligencias censales y reponer el acta de inspección y los trabajos técnicos multicitados, que dieron origen a las actas de dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho, nueve y doce de junio de mil novecientos ochenta, previa notificación a los interesados de la realización de los mismos, hecho lo cual, dicte la resolución que en derecho corresponda”.

TRIGESIMO SEGUNDO. Por otra parte, de autos se conoce que mediante escrito de doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Miguel Caballero Jiménez también promovió demanda de amparo en contra de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, el veinticuatro de marzo del año en cita, dentro del juicio agrario 340/93, quien señaló como acto reclamado, que no se le privará de la posesión que detenta respecto del predio de su propiedad, que argumenta, adquirió, de su causante Guadalupe Perea Linares, identificado como fracción del lote I de la "Exhacienda de Puroagua", con superficie de 324-70-00 (trescientas veinticuatro hectáreas, setenta áreas), que se encuentra amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 97594, expedido en favor de Miguel Gómez de Parada.

Del mencionado juicio de garantías conoció el propio Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número D.A.1935/99, resolviéndose mediante ejecutoria de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sobreseyendo el juicio de amparo, expresándose en la parte considerativa de dicha ejecutoria, que éste resultaba improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVI y último párrafo, de la Ley de Amparo, por actualizarse en la especie, la causal de improcedencia establecida en el numeral indicado, ya que la sentencia reclamada había cesado de producir efectos jurídicos, puesto que en el diverso juicio de amparo número D.A. 1945/99, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, en sesión del mismo día, para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada, y se dictara una nueva sentencia conforme a los lineamientos establecidos en dicha ejecutoria.

TRIGESIMO TERCERO. Para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo D.A.-1945/99, por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil, este Tribunal Superior dejó insubsistente parcialmente su sentencia pronunciada el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, únicamente por lo que respecta a los predios que defienden los quejosos; por diverso acuerdo de veintisiete de enero de dos mil, se ordenó agregar al expediente, el oficio número 62, y la copia certificada de la ejecutoria de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que sobreseyó en el juicio de amparo número D.A. 1935/99, promovido por Miguel Caballero Jiménez, en contra de la sentencia de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, emitida por este órgano jurisdiccional en el juicio agrario 340/93, para los efectos legales a que hubiera lugar.

TRIGESIMO CUARTO. Por acuerdo para mejor proveer, de dieciocho de mayo de dos mil, se ordenó girar despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, previa notificación personal a los actuales propietarios de las diversas fracciones de terreno, que corresponden a los lotes números I, II y III de la "Exhacienda de Puroagua", ubicados en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, que fueron señalados como de probable afectación, siendo los siguientes: Magdalena Orvañanos de Quijano, por su propio derecho, Jaime Arrangoiz Orvañanos, en representación de Guadalupe Orvañanos de Arrangoiz, María del Socorro Gómez de Parada Braniff de Espíndola, como heredera de Lorenza Braniff de Gómez de Parada y como apoderada general de Lorenza Gómez de Parada Braniff de Prevoisin y Miguel Gómez de Parada Braniff; Rosa del Carmen de León Mendoza de Orvañanos, Jorge Hernández Muñoz, Roberto Rivera Padilla, causahabientes de los bienes de la extinta Lorenza Braniff de Gómez de Parada, a Miguel Caballero Jiménez, causahabiente de Guadalupe Perea Linares; así como a los solicitantes de tierras por conducto de su Comité Particular Ejecutivo, se les pusieran a la vista, los trabajos relativos a la diligencia censal y verificación de capacidad en materia agraria, efectuados los primeros por el comisionado Ricardo Gómez Torres, de acuerdo a su informe de treinta de julio y once de agosto de mil novecientos sesenta y tres, que obran en autos a fojas 52, 63 y siguientes y 125, del legajo XI y los segundos realizados por los comisionados ingeniero Juan Manuel Castillo y licenciado Alberto Noyola Vázquez, según consta en su informe de veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y uno, que obran agregados en autos a fojas 18 y siguientes, del legajo número III; lo anterior, para que dentro del plazo de diez días contados a partir de que surtiera efectos la notificación respectiva, formularan sus objeciones en relación con tales diligencias y trabajos, y ofrecieran las pruebas documentales correspondientes, para que fueran tomados en cuenta al momento de resolverse el fondo del asunto.

En el mismo proveído, también se solicitó al Tribunal Unitario Agrario referido, para que comisionara a la Brigada de Ejecución de Resoluciones. Adscrita en ese Tribunal, y se avocara a la realización de los trabajos técnicos informativos a que se refiere el artículo 286, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los predios propiedad de las personas referidas en el punto anterior, provenientes de las diversas fracciones correspondientes a los lotes I, II y III de la "Exhacienda de Puroagua", ubicada en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato; en la inteligencia de que tales trabajos previamente a su desahogo, deberían ser notificados personalmente a los propietarios aludidos, así como al Comité Particular Ejecutivo del poblado solicitante de tierras, por conducto de sus representantes debidamente autorizados, a fin de que para que estuvieran en aptitud de concurrir a su desahogo en el caso de estimarlo conveniente, para deducir sus posibles derechos, a fin de no dejarlos inauditos en el procedimiento del juicio agrario de que se trata.

Para los efectos precisados, se les concedió a los propietarios, un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de que surtiera efectos la notificación respectiva, para que ofrecieran pruebas y formularan alegatos que a su derecho conviniera. Para facilitar el desahogo de tales diligencias, en el acuerdo de mérito, se ordenó remitir los autos del expediente del juicio agrario que nos ocupa, y se pusieran a la vista de los interesados, específicamente por lo que se refiere a los trabajos censales.

TRIGESIMO QUINTO. Por auto de trece de octubre de dos mil, se tuvieron por recibidas las constancias relativas a las diligencias y trabajos derivados del acuerdo para mejor proveer de dieciocho de mayo del mismo año, remitidas por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, así como dieciséis legajos que integran el expediente administrativo relativo al juicio agrario que nos ocupa; en el proveído de merito, se acordó que dicha documentación sería analizada para determinar si se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo para mejor proveer señalado.

En cuanto a las diligencias y trabajos ordenados, obran anexas al despacho recibido, las notificaciones dirigidas a los propietarios de los predios por investigar, de ocho y nueve de junio, así como del cinco de septiembre de dos mil, la primera y la tercera que se verificó con el autorizado por Magdalena Orvañanos de Quijano y otros, y la segunda que se realizó por instructivo dirigido a Miguel Caballero Jiménez, el acta relativa a la inspección ocular de siete de Septiembre del mismo año, que se verificó en los predios investigados, así como el plano informativo levantado en papel milimétrico, en el que se identifican y describen las superficies de que constan las fracciones I, II y III de la "Exhacienda de Puroagua", que defienden los quejosos, así como las carteras de campo, cuadro de construcción, etcétera.

También obran anexos al despacho, el escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil, por Magdalena Orvañanos de Quijano, por su propio derecho, Jaime Arrangoiz Orvañanos, en representación de Guadalupe Orvañanos de Arrangoiz, María del Socorro Gómez de Parada Braniff de Espíndola, como heredera de Lorenza Braniff de Gómez de Parada, y como apoderada general de Lorenza Gómez de Parada Braniff de Prevoisin, Miguel Gómez de Parada Braniff; Rosa del Carmen de León Mendoza de Orvañanos, Jorge Hernández Muñoz, Roberto Rivera Padilla, causahabiente de los bienes de la extinta Lorenza Braniff de Gómez de Parada, mediante el cual aportan pruebas y formulan sus alegatos, acordándose respecto de tales pruebas, que no había lugar a su admisión, ya que no fueron exhibidas por los oferentes.

TRIGESIMO SEXTO. Este Organismo Jurisdiccional emitió nueva sentencia en el juicio agrario de que se trata, el seis de marzo de dos mil uno, en cumplimiento a la ejecutoria emitida el seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio de amparo D.A.1945/99, conforme a los puntos resolutiveos que se transcriben:

"PRIMERO. Ha lugar a dejar parcialmente sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de veintitrés de abril, trece de febrero, y siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre y veintinueve de octubre del mismo año, y catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, por los cuales se expidieron los certificados de inafectabilidad agrícola números 97593, 91507 y 107731. Asimismo ha lugar a dejar sin efectos jurídicos el acuerdo presidencial de inafectabilidad expedido el veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre del mismo año, por el cual se expidió el certificado de inafectabilidad agrícola número 97594, a favor de Miguel Gómez de Parada; así como la cancelación de los certificados referidos, en los términos precisados en el considerando octavo de la presente sentencia.

SEGUNDO. Es procedente la ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato.

TERCERO. Es de dotarse por concepto de ampliación de ejido al poblado referido en el punto anterior, con una superficie de 600-56-39 (seiscientas hectáreas, cincuenta y seis áreas, treinta y nueve centiáreas) de terrenos de temporal y agostadero, que se tomarán de las fracciones de terreno provenientes de la "Exhacienda de Puroagua", ubicada en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, en la forma siguiente: del lote III, propiedad de Javiera Gómez de Parada, una superficie de 129-79-00 (ciento veintinueve hectáreas, setenta y nueve áreas); del lote de la fracción II de la "Exhacienda de Puroagua", 94-51-16 (noventa y cuatro hectáreas, cincuenta y una áreas, dieciséis centiáreas), propiedad actual de Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández; de la fracción del lote I, propiedad de Guadalupe Perea Linares, una superficie de 324-70-00 (trescientas veinticuatro hectáreas, setenta áreas); de la fracción III, una superficie de 51-56-23 (cincuenta y una hectáreas, cincuenta y seis áreas, veintitrés centiáreas), propiedad de Magdalena Orvañanos de Quijano; que resultan afectables con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria interpretado en sentido contrario, en correlación con el artículo 418, fracción II de la Ley Federal de Reforma Agraria. La anterior superficie deberá localizarse de conformidad con el plano que al efecto se elabore y pasara en propiedad del poblado beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres para constituir los derechos agrarios correspondientes de los cuarenta y cinco campesinos beneficiados, relacionados en el considerando cuarto de la presente sentencia; en cuanto a la determinación del destino de estas tierras organización económica y social, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria..."

TRIGESIMO SEPTIMO. Contra la sentencia anterior, Magdalena Orvañanos de Quijano, por su propio derecho; Jaime Arrangoiz Orvañanos, en representación de Guadalupe Orvañanos de Arrangoiz; María del Socorro Gómez de Parada Braniff de Espíndola, como heredera de Lorenza Braniff de Gómez de Parada y como apoderada general de Lorenza Gómez de Parada Braniff de Prevoisin y de Miguel Gómez de Parada Braniff; Rosa del Carmen de León Mendoza de Orvañanos; Jorge Hernández Muñoz; Roberto Rivera Padilla, causahabientes de los bienes de los bienes de la extinta Lorenza Braniff de Gómez de Parada y Miguel Caballero Jiménez, causahabiente de Guadalupe Perea Linares, respectivamente, promovieron demanda este Organo Jurisdiccional de garantías, mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil uno, ante la Oficialía de partes de este Tribunal Superior.

De este juicio de amparo, conoció el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo con el número D.A.-1181/2001, que fue resuelto por ejecutoria de trece de noviembre de dos mil dos, en los términos siguientes:

En su primer punto resolutivo se sobreseyó el citado juicio de amparo, por lo que respecta a los diversos quejosos Miguel Caballero Jiménez, como causahabiente de Guadalupe Linares; María del Socorro Gómez de Parada Braniff de Espíndola, como heredera de Lorenza Braniff de Gómez de Parada, y como apoderada general de Lorenza Gómez de Parada Braniff de Prevoisin y de Miguel Gómez de Parada Braniff.

En cuanto a los restantes quejosos, en el punto resolutivo segundo, se les negó la Protección Constitucional a Magdalena Orvañanos de Quijano, por su propio derecho, Jaime Arrangoiz Orvañanos, en representación de Guadalupe Orvañanos de Arrangoiz; Rosa del Carmen de León Mendoza de Orvañanos, Jorge Hernández Muñoz y Roberto Rivera Padilla, en su carácter de causahabiente de los bienes de la extinta Lorenza Braniff de Gómez de Parada.

Respecto a los primeros cabe señalar que el tribunal de amparo les sobreseyó el juicio de garantías, por considerar que éstos carecen de legitimación procesal activa para acudir al juicio de amparo.

Respecto de los restantes quejosos, a quienes se les negó la protección constitucional, se determinó que los conceptos de violación que hicieron valer, no desvirtuaron la legalidad de la sentencia reclamada, razón por la que se les negó el amparo y protección de la Justicia Federal, negativa que también se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señaladas como responsables.

TRIGESIMO OCTAVO. Por otra parte, de autos se desprende que mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil tres, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, Camerino Martínez Osorio y otros, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Superior, de seis de marzo de dos mil uno, dentro del juicio agrario número 340/93, que corresponde a la acción de ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado denominado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato.

Los impetrantes del juicio de garantías, en sus conceptos de violación se duelen substancialmente que la sentencia reclamada les conculca sus garantías constitucionales, argumentando que no obstante que siempre han estado en posesión de terrenos de la "La exhacienda de Puroagua", que fueron afectados por la sentencia impugnada a favor del poblado de que se trata, en la acción de ampliación de ejido; que fueron censados durante la substanciación del procedimiento agrario aludido, como lo acreditan con la copia al carbón que exhibe del informe rendido por el comisionado Roberto Hernández Luna, el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, pero que sin embargo, no fueron considerados, ni reconocidos como beneficiados en el fallo reclamado.

De la demanda de amparo conoció el mismo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número D.A.-174/2003, que se resolvió por ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil tres, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por los quejosos para el efecto de que este Tribunal Superior dejara insubsistente la sentencia reclamada y, con plenitud de jurisdicción se ocupara de analizar el acta de siete de septiembre de dos mil, levantada con motivo de los trabajos técnicos informativo e inspección ocular realizados por el actuario ejecutor y el perito topógrafo y, en caso de existir el informe de comisión rendido por el comisionado agrario Roberto Hernández Luna, fechado el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, también fuera valorado conforme a derecho.

Por lo que se refiere a los efectos y alcances de la protección Constitucional concedida a los quejosos, para una mejor ilustración, se transcribe en lo conducente el Considerando Séptimo de la ejecutoria que nos ocupa, siendo del tenor siguiente:

"Por lo que hace al argumento sintetizado con el número 1, en el que se alega que en la sentencia combatida se omitió considerar y valorar todas las constancias que existen en el procedimiento agrario de que se trata, en específico la consistente en el Informe de Comisión de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos suscrito por Comisionado Agrario Roberto Hernández Luna, es fundado pero inoperante.

En efecto, tal documental no fue valorada en la sentencia combatida, tan es así que, la responsable se pronunció respecto de diversas documentales, entre las que no se incluyó el informe aludido.

Sin embargo, del análisis exhaustivo del expediente del juicio agrario que nos ocupa, se desprende que tal documental no se encuentra agregada al mismo, motivo por el cual el tribunal responsable no estuvo en aptitud de valorarla, por lo que ante tal circunstancia no se puede afirmar que existió violación a la garantía de seguridad jurídica a que se refiere la parte quejosa, de ahí la inoperancia del argumento hecho valer.

Ahora bien, se presume la existencia de dicha documental toda vez que la parte quejosa la exhibió -en copia al carbón con firma autógrafa-, junto con su escrito inicial de demanda, y como se trata de un oficio mediante el cual un Comisionado Agrario rinde informe de comisión relativo a la ampliación del ejido, el cual, en su caso, puede afectar de manera considerable el sentido del fallo que se dicte con motivo de dicha ampliación del ejido, este órgano resolutor justifica la posible relación que se haga de él en la sentencia definitiva y la investigación por parte de la responsable del paradero del original de tal documental.

De este modo se ordena a la autoridad responsable que en la medida de su (sic) facultades proceda a la localización del paradero del original del Informe de Comisión suscrito por el Comisionado Agrario Ingeniero Roberto Hernández Luna de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, y en su caso de existir, se agregue a los autos del juicio agrario y se valore en el momento procesal oportuno.

En esas condiciones procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Camerino Martínez Osornio, Javier Castro Peñaloza, Lorenzo Guerrero, Porfirio Barrera Hernández, Fortino Nava Castro, Jacobo Barrera Pichardo, Luis Aguilar García, Maximino Aguilar García, Tomás Aguilar García, Jovita Castro Heredia, Eduardo Castro Caballero, Ricardo Jiménez Ortega, Silvestre Martínez León, Refugio Castro Peñaloza, Lorenzo Castro Meléndez, Carlos Jiménez Ortega y Alberto Zurita Ruíz, para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario, deje insubsistente la sentencia reclamada y, con plenitud de jurisdicción se ocupe de analizar el Acta de siete de septiembre de dos mil, levantada con motivo de los trabajos técnicos informativos e inspección ocular realizados por el Actuario Ejecutor y el Perito Topógrafo y, en caso de existir el Informe de Comisión rendido por el Comisionado Agrario Roberto Hernández Luna el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, también sea valorado conforme a derecho.

En las relatadas condiciones resulta innecesario el estudio de los demás argumentos hechos valer por la parte quejosa debido a que en nada variaría el sentido de la presente ejecutoria...”.

Por el motivo anterior, mediante resolución de nueve de octubre de dos mil tres, este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dejó insubsistente la sentencia definitiva de seis de marzo de dos mil uno, recaída en el expediente del juicio agrario número 340/93.

TRIGESIMO NOVENO. De conformidad con los lineamientos establecidos en la ejecutoria que se indica, mediante acuerdo para mejor proveer de uno de diciembre de dos mil tres, este Tribunal Superior ordenó girar oficio a la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, adscrita a la Secretaría de la Reforma Agraria, así como al Registro Agrario Nacional, órgano descentralizado de la citada Dependencia, para que se avocaran a la búsqueda y remisión del original, o en su caso, copia certificada del informe rendido por el comisionado Roberto Hernández Luna, de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, quien al parecer fue comisionado por la entonces Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Guanajuato, mediante oficio número 4919, de dos de octubre del mismo año, para investigar los nombres de los campesinos que se encontraban en posesión de terrenos de la Ex-Hacienda de Puroagua, dentro del expediente administrativo 3263, relativo a la ampliación de ejido solicitada por campesinos del poblado denominado “Puroagua”, Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, y verificar su capacidad agraria; lo anterior, con independencia de los campesinos que ya se encontraban censados, ya que tal documental no se encontraba glosada en autos, de la que se dice en la ejecutoria de mérito, fue exhibida en copia al carbón por los quejosos en el juicio de amparo antes citado; de ahí que se presumiera la existencia del original por parte del tribunal de amparo; luego entonces, resultaba necesario la búsqueda y localización de dicha documental, para estar en aptitud de poder determinar su valor probatorio y alcances, en relación con el juicio agrario que nos ocupa.

Por oficio número SJR/051/2004, de dos de febrero de dos mil cuatro, el Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, remitió copia certificada del informe de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, rendido por el ingeniero Roberto Hernández Luna, de cuyo contenido se desprende que éste relacionó a un total de treinta y ocho personas, de las que expresó acreditaron su capacidad en materia agraria, quien además señaló, que éstas son vecinas y originarias del poblado de “Puroagua”, pero que por problemas con el grupo solicitante de tierras, no habían sido tomadas en consideración en las diligencias censales que se habían efectuado en dicho poblado; también expresó que estas personas se encontraban en posesión de varias fracciones del predio de la exhacienda de “Puroagua”, formulando su opinión en el sentido de que éstas debían ser tomados en cuenta al resolverse el expediente de ampliación de ejido, siendo sus nombres los siguientes:

1. Porfirio Barrera Hernández. 2. J. Jesús Castro Maya. 3. Fortino Nava Castro. 4. Roberto Castro Ledezma. 5. Tomás Aguilar García. 6. Luis Aguilar García. 7. Maximino Aguilar García. 8. Manuel Castro Garduño. 9. Jovita Castro Heredia. 10. Eduardo Castro Caballero. 11. Emma Castro Peñaloza. 12. Refugio Castro Peñaloza. 13. Carmen Barrera de Pichardo. 14. Margarita Hernández Delgado. 15. Javier Castro Peñaloza. 16. Magdalena Castro Peñaloza. 17. Inés Almaraz Morales. 18. Eduardo Castro Almaraz. 19. Silvestre Martínez León. 20. Camerino Martínez Osornio. 21. Magdaleno Martínez Osornio. 22. Teodora Martínez Osornio. 23. Marcelino Martínez Osornio. 24. Carlota Martínez Osornio. 25. Cándida Martínez Osornio. 26. Francisco Martínez Osornio. 27. Florencio García Aguilar. 28. Lorenzo Castro Meléndez. 29. Auxilio Castro Meléndez. 30. Carlos Jiménez Ortega. 31. José Jiménez Ortega. 32. Ricardo Jiménez Ortega. 33. Roberto Rivera Padilla. 34. Alberto Zurita Ruiz. 35. Luis Rodríguez González. 36. Abel Garnica Guerrero. 37. Paula Olvera Castro. 38. María Guadalupe Hernández Camacho.

CUADRAGESIMO. Conforme a los antecedentes del caso, este Organismo Jurisdiccional efectuó el análisis y valoración de las constancias aludidas, de las que concluyó que de éstas no se despreñían elementos de prueba suficientes para tener por demostrado que las treinta y ocho personas que relacionó el citado comisionado en su informe de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, reunían los requisitos previstos por el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para ser considerados con capacidad en materia agraria, dentro del expediente relativo a la ampliación de ejido del poblado "Puroagua", ya que no obraba en autos la documental relativa a la diligencia censal, con la que se probara la afirmación del comisionado, en el sentido de que las personas relacionadas en su informe, reunían los requisitos previstos por el precepto legal invocado; lo anterior, con independencia de los campesinos que ya se encontraban censados en la diligencia efectuada el veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y uno, en la que resultaron un total de cuarenta y cinco campesinos que acreditaron su capacidad tanto individual como colectiva en términos de lo dispuesto por los artículos 197 fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

En ese orden de ideas, al no existir en autos elementos de prueba idóneos para resolver a verdad sabida el juicio agrario en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 189 en correlación con el artículo 186 de la Ley Agraria, este Tribunal Superior, para estar en posibilidad de poder determinar si las treinta y ocho personas que alegan tener capacidad individual dentro del juicio agrario que nos ocupa, y puedan ser considerados como beneficiados en la acción de ampliación de ejido gestionada por un grupo de campesinos del poblado de que se trata, ordenó la diligencia relativa a la verificación censal, tendiente a comprobar si éstos reúnen los requisitos exigibles por el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por el motivo anterior, mediante acuerdo de quince de abril de dos mil cuatro, se ordenó girar despacho al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con sede en la ciudad de Guanajuato, Estado de Guanajuato, para que comisionara al actuario adscrito a ese Tribunal, y procediera a convocar a una asamblea general extraordinaria de solicitantes de tierras dentro del expediente del juicio agrario 340/93, del poblado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con la finalidad de desahogar la diligencia de verificación censal, tendiente a investigar si los solicitantes de tierras antes relacionados, en un número de treinta y ocho reúnen los requisitos de capacidad individual en materia agraria, previstos por el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, la que debía notificárseles previamente a su celebración por conducto de su representante común, así como al resto de los solicitante de tierras que aparecen censados en la diligencia efectuada el veintiocho de julio de dos mil uno, por conducto de su comité particular ejecutivo, para que concurrieran a la celebración de la citada asamblea, en la fecha que fuera señalada para su realización.

Por otra parte, también se ordenó el desahogo de la prueba testimonial, con la finalidad de verificar si los solicitantes de tierras, que quedaron sujetos a la diligencia de verificación censal, se encontraban en posesión de algunas fracciones de terreno, que forman parte de los predios señalados como de posible afectación, para la acción agraria que nos ocupa; por esa razón, se facultó al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, para que en auxilio de las labores de este Tribunal, proveyera lo necesario para la preparación y desahogo de dicha probanza.

En el segundo punto resolutivo del acuerdo de mérito, se solicitó al Tribunal Unitario Agrario, que una vez desahogadas las diligencias y trabajos señalados, se remitieran a este Tribunal Superior, para estar en aptitud de formular el proyecto de sentencia respectivo.

CUADRAGESIMO PRIMERO. Consta en autos que al estarse desahogando las diligencias y pruebas referidas, por escrito presentado el treinta de julio de dos mil cuatro, ante la Oficina de correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Miguel Caballero Jiménez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra la sentencia emitida el seis de marzo de dos mil uno por este Tribunal Superior, dentro de los autos del juicio agrario 340/93 de su índice, así como el acuerdo para mejor proveer de quince de abril de dos mil cuatro, en el que se ordenó el desahogo de la diligencia censal de los solicitantes de tierras, así como de la prueba testimonial, por no habersele dado intervención durante su substanciación.

De autos se conoce que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, por oficio número 1123/2004, de nueve de agosto de dos mil cuatro, remitió a este Tribunal las constancias relativas del acuerdo para mejor proveer de quince de abril de dos mil cuatro, que se ordenaron en cumplimiento de la ejecutoria emitida el veintitrés de septiembre de dos mil tres, dentro del juicio de amparo directo D.A.-174/2003, que se tuvieron por recibidas mediante proveído de trece de agosto del mismo año.

En relación con lo anterior, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil cuatro, se ordenó decretar la suspensión del dictado de la sentencia en el juicio agrario que nos ocupa, hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo referido, que se radicó con el número 622/2004, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato.

El juicio de amparo referido, se resolvió el ocho de febrero de dos mil cinco, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Miguel Caballero Jiménez, en los términos y para los efectos precisados en el considerando sexto de la ejecutoria de amparo, que se transcribe en la parte que interesa:

“...Para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta resolución, EL MAGISTRADO PONENTE O INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, una vez que cause ejecutoria (sic) esta resolución adicione un párrafo al acuerdo de fecha quince de abril de dos mil cuatro, en el sentido de que se gire Despacho al Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en la ciudad de Guanajuato, Estado de Guanajuato, para que además ordene notificar personalmente al quejoso MIGUEL CABALLERO JIMENEZ dicho proveído, para el efecto de que si lo estima pertinente, comparezca a la Asamblea General Extraordinaria a la que serán convocados los solicitantes de tierras dentro del expediente del Juicio Agrario 340/93 del Poblado denominado “Puroagua”, Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, en la cual se investigará si las personas que se relacionan en el punto cuarto del capítulo de Antecedentes de dicho acuerdo, reúnen los requisitos de capacidad individual en materia agraria previstas en el artículo 200 de la Ley de la Federal de Reforma Agraria (sic); y para el caso de haberse celebrado ya dicha asamblea, se deje insubsistente la misma y se vuelva a convocar a otra a la cual deberá ser citado personalmente el quejoso, a quien además deberá dársele la oportunidad de repreguntar a aquellos testigos que se presenten y que vayan a declara en relación al inmueble de su propiedad, pudiendo inclusive ofrecer pruebas y formular alegatos, todo lo cual para que sea tomando en consideración tanto en el proyecto de sentencia, como en la sentencia misma que se dicte en su oportunidad el Tribunal Superior Agrario, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal...Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución, reclamados al MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, CAPITAL, por no reclamar los vicios propios en la ejecución del acto reclamado consistente en el auto de fecha quince de abril de dos mil cuatro; y en consecuencia, será esta autoridad la que deberá dar cumplimiento al Despacho que el Magistrado Ponente o Instructor le girará, debidamente adicionado, en los términos indicados en el párrafo que antecede.”

Tal resolución causó ejecutoria el diecisiete de mayo de dos mil cinco, al decretarse el sobreseimiento del recurso de revisión número 121/2005, que fue promovido por el quejoso Miguel Caballero Jiménez, en el juicio de amparo 622/2004.

Conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, este Tribunal Superior, por acuerdo de quince de junio de dos mil cinco, dejó insubsistentes las diligencias desahogadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en la ciudad y Estado de Guanajuato, relativas a la investigación de la capacidad agraria de los solicitantes de tierras en el juicio agrario número 340/93, en cumplimiento del acuerdo para mejor proveer dictado por esta Magistratura de instrucción, el quince de abril de dos mil cuatro; lo anterior, al quedar suficientemente probado en autos, que tales diligencias, se desahogaron previamente, cuando se encontraba substanciando el juicio de amparo antes citado, hecho que se acredita con las constancias relativas, que se remitieron a este Organismo Jurisdiccional por oficio de nueve de octubre de dos mil cuatro, por conducto del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11.

En el segundo punto resolutivo del acuerdo referido, se ordenó la reposición de tales diligencias, conforme a lo ordenado en el acuerdo para mejor proveer de quince de abril de dos mil cuatro, dándole intervención en su desahogo, al quejoso Miguel Caballero Jiménez, propietario de una fracción del predio señalado como afectable, proveniente del lote 3, fracción I, de la antigua hacienda de “Puroagua”, Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con superficie de 21-48-99 (veintiuna hectáreas, cuarenta y ocho áreas, noventa y nueve centiáreas), a quien se le concedió el plazo de cuarenta y cinco días naturales, con fundamento en el artículo 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para que ofreciera pruebas y formulara alegatos.

Consta en autos que la reposición de tales diligencias, estuvo a cargo de la Brigada de Ejecución de Resoluciones, adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, las que una vez substanciadas fueron remitidas por oficio número 368/2006, de fecha trece de marzo de dos mil seis, así como las pruebas desahogadas, que derivan del acuerdo para mejor proveer de quince de abril de dos mil cuatro; tales constancias se tuvieron por recibidas por auto de diecisiete del mismo mes y año, en el que se acordó que serían analizadas para determinar si se dio estricto cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo para mejor proveer referido, así como en los diversos de quince de junio de dos mil cinco y dieciocho de enero de dos mil seis, respectivamente.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. No obstante lo anterior, no se debe perder de vista que al estarse substanciando las pruebas y diligencias antes citadas, ofrecidas por las partes en el juicio agrario 340/93, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, el once de mayo de dos mil seis, Plácido Castro Maya demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, quien señaló como actos reclamados entre otros, la sentencia emitida por este Tribunal Superior el seis de marzo de dos mil uno, así como los actos de ejecución.

Conforme a los antecedentes expuestos, mediante acuerdo de este Tribunal Superior, de dieciséis de junio de dos mil seis, se ordenó suspender el dictado de la sentencia en el juicio agrario 340/93, hasta en tanto se resolviera la demanda de amparo aludida.

Del juicio de amparo conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, bajo el número 478/2006, que se resolvió el nueve de abril de dos mil ocho, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Plácido Castro Maya, para los efectos que se precisan en el considerando quinto del citado fallo, que se transcribe en la parte que interesa para mayor ilustración:

“QUINTO. Son fundados los conceptos de violación por la parte quejosa, por lo que es procedente concederle el Amparo y Protección Constitucional que solicita.

Se llega a la conclusión que antecede, por lo siguiente:

En el juicio agrario 340/1993 del índice del Tribunal Superior Agrario, mediante sentencia de dieciséis de junio de dos mil seis, se determinó dotar a campesinos del ejido del Poblado de Puroagua, del Municipio de Jerécuaro, con una superficie de 600-56-39 (seiscientas hectáreas, cincuenta y seis áreas, treinta y nueve centiáreas), de terrenos de temporal y agostadero, que se tomarán, entre otras, de la siguiente fracción:

‘...del lote de la fracción II de la exhacienda de Puroagua; 94-51-16 (noventa y cuatro hectáreas, cincuenta y una áreas, dieciséis centiáreas), propiedad actual de Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández...’

De lo anterior se advierte que en el juicio de origen, se ordenó dotar a campesinos del ejido del poblado Puroagua, del Municipio de Jerécuaro, con terrenos (entre otros) del lote de la fracción II de la exhacienda de Puroagua, propiedad de Lorenza Braniff y otros.

Por otra parte, el quejoso presentó en este juicio los siguientes documentos:

Certificado de Inafectabilidad Agrícola expedido el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, (inscrito el mismo año en el Registro Agrario Nacional), a favor de Plácido Castro Maya con relación al predio denominado Potrero del Sáuz, ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, con una superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas.

Contrato de compraventa con fecha veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y tres, celebrado por Lorenza Braniff de Gómez de Parada como vendedora por conducto de su apoderado Luis Orvañanos Gómez de Parada y Plácido Castro Maya como comprador, respecto de un terreno de ‘la fracción dos de la exhacienda de Puroagua, Estado de Guanajuato, del Municipio de Jerécuaro, amparados por el certificado de Inafectabilidad No. 91507, con una extensión superficie de 6.02.50 has., los linderos siguientes, al Norte con Prisciliano Barrera, al Sur con Gregorio Jiménez, al Oriente con Agustín García y al Poniente con Lorenza Braniff.’

Acta de defunción ocurrida el seis de mayo de mil novecientos noventa y tres, de Lorenza Braniff Lascurain viuda de Miguel Gómez de Parada Buch, con folio 55088, expedida por el Registro Civil del Distrito Federal.

De tales documentos, así como de las testimoniales desahogadas en la etapa de pruebas de la audiencia constitucional, se advierte que:

1.- Plácido Castro Maya adquirió el predio denominado Potrero del Sáuz, ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, con superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas, por compraventa que llevó a cabo con la vendedora Lorenza Braniff.

2.- Dicho predio está amprado por el certificado de inafectabilidad agrícola expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria en mil novecientos noventa y uno y registrado ese mismo año en el Registro Agrario Nacional.

3.- Que los derechos de propiedad y posesión respecto al predio mencionado son anteriores al juicio agrario 340/1993.

En este orden de ideas, está acreditado que en el juicio agrario mencionado se ordenó afectar para dotar a un grupo de campesinos del poblado tercero perjudicado, un predio del que Plácido Castro Maya adquirió con anterioridad a dicho juicio, una fracción.

Ahora bien, aduce el quejoso que se transgredió en su perjuicio la garantía de audiencia, en virtud de que nunca ha sido llamado al juicio agrario 340/1993 del índice del Tribunal Superior Agrario.

Asiste razón al solicitante del amparo, por lo siguiente:

El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“14...

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’

Además, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de audiencia, consagrada en el precepto antes transcrito obliga a las autoridades antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y, que de no cumplirse con ellas se infringirá la referida garantía, cuya finalidad es evitar que el particular queda en estado de indefensión. El criterio citado se encuentra en la siguiente jurisprudencia, consultable en la página ciento treinta y tres, del tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:

‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- (se transcribe)

En esas condiciones, la ausencia de cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, resulta violatorio de la garantía de audiencia, lo cual genera una violación manifiesta de la ley que propicia indefensión.

De acuerdo a lo expuesto, la autoridad responsable no demostró que el ahora quejoso fue escuchado en defensa de sus derechos en el juicio agrario 340/1993, con relación al predio denominado Potrero del Saúz, ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, con una superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas, lo cual evidencia vulneración a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del demandante constitucional.

En este orden de ideas, lo procedente es CONCEDERLE EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, no prive al quejoso en el juicio agrario 340/1993, sin haber sido previamente oído y vencido en dicho juicio, del predio Potrero del Saúz, ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, con una superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas.”

La sentencia referida causó ejecutoria, el veintinueve de abril de dos mil ocho.

CUADRAGESIMO TERCERO. Por acuerdo emitido por el pleno de este Organismo Jurisdiccional, el veintisiete de mayo de dos mil ocho, se determinó no hacer pronunciamiento alguno respecto a la sentencia reclamada de seis de marzo de dos mil uno, en virtud de que mediante diverso acuerdo plenario suscrito el nueve de octubre de dos mil tres, se dejó insubsistente la sentencia referida en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo D.A.-174/2003, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que concedió la protección constitucional a Camerino Martínez Osornio y coagraviados.

En cumplimiento a la resolución de amparo, por acuerdo de once de julio de dos mil ocho, se ordenó emplazar al juicio agrario que nos ocupa 340/93, al quejoso Plácido Castro Maya, a fin de que compareciera a deducir sus derechos, ofreciera pruebas y formulara alegatos, concediéndole con fundamento en el artículo 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la notificación de este proveído.

Consta en autos, que mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil ocho, se tuvo por recibido el oficio número 008378, de veinte de octubre de dos mil ocho, suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos de este Tribunal Superior Agrario, con el que remite un escrito y anexos presentados en esa oficina por Plácido Castro Maya, el diecisiete del mismo mes y año, ofreciendo pruebas y formulando alegatos, en torno al predio de su propiedad que defiende, y objetando las diversas diligencias y trabajos que se han ordenado durante la substanciación del juicio agrario 340/93; en el acuerdo de mérito se hizo de su conocimiento, que las diversas diligencias y trabajos que obraban en autos, no le paraban perjuicio alguno, toda vez que todos estos quedaron insubsistentes con motivo del amparo concedido a los diversos quejosos en los amparos D.A.-174/2003 y 622/2004, así como el promovido por éste, con el número 478/2006, respectivamente.

En cuanto a sus pruebas aportadas, se le admitieron diversas documentales, la inspección ocular sobre los terrenos dotados al poblado solicitante, prevista por el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, a fin de que se comprobara si tales terrenos se encuentran explotados en su totalidad; también se le admitió la diligencia relativa a la verificación censal de los campesinos solicitantes de tierras, que exige el artículo 200 del ordenamiento legal invocado, así como la inspección ocular del predio que defiende como de su propiedad, denominado "Patejé", ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con superficie de 6-00-00 (seis hectáreas), a fin de acreditar que se encuentra en explotación y que no rebasa los límites de la pequeña propiedad.

CUADRAGESIMO CUARTO. Conforme a los actos procesales precisados, este Organismo Jurisdiccional, en estricto cumplimiento de las diversas ejecutorias emitidas en el juicio de amparo directo D.A.-174/2003, de veintitrés de septiembre de dos mil tres, así como en los juicios de amparo indirecto 622/2004, de ocho de febrero de dos mil cinco, y 478/2006, de nueve de abril de dos mil ocho, respectivamente, la primera, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, las subsecuentes, que fueron emitidas por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, este Organismo Jurisdiccional, mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil nueve, resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. Se deja insubsistente la diligencia de verificación censal llevada a cabo el primero de marzo de dos mil seis, por conducto de la brigada de ejecución de resoluciones adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con sede en la Ciudad y Estado de Guanajuato, relativa a la Asamblea General Extraordinaria de solicitantes de tierras, celebrada en el poblado denominado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, de la citada entidad federativa, dentro del juicio agrario número 340/93, relativo a la ampliación de ejido gestionada por un grupo de campesinos del poblado señalado.

SEGUNDO. Gírese atento despacho al Tribunal Unitario Agrario de Distrito 11, con sede en la Ciudad y Estado de Guanajuato, para el efecto de que comisione a la brigada de ejecución de resoluciones de su adscripción, para que reponga tales diligencias, en los términos y para los efectos precisados en los acuerdos para mejor proveer de quince de abril de dos mil cuatro y quince de junio de dos mil cinco, respectivamente; en la inteligencia de que la Asamblea General Extraordinaria de solicitantes de tierras, deberá realizarse con intervención de todos los solicitantes de tierras que se relacionan en el considerando tercero del presente acuerdo, y desahogarse conforme a las formalidades y requisitos exigibles por los artículos 29, 31, 32, 33 y 35, en correlación con los artículos 287 fracción I y 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes el presente acuerdo, con copia íntegra del mismo en los términos siguientes: a Plácido Castro Maya, en el domicilio procesal que señaló sito en la calle de Alfonso Reyes número 57, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal; a las partes restantes, por conducto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, a Miguel Caballero Jiménez, en el predio de su propiedad identificado como lote 3 de la fracción I de la antigua hacienda de "Puroagua", y a los dos grupos de solicitantes de tierras, por conducto de su Comité Particular Ejecutivo y su representante común, respectivamente, con domicilio conocido en el poblado de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato.

CUARTO. Para dar debido cumplimiento a los trabajos y diligencias sujetas a reposición, remítase copia simple de los acuerdos para mejor proveer, de quince de abril de dos mil cuatro y quince de junio de dos mil cinco, que sirvan de apoyo y una mayor ilustración para su desahogo.

QUINTO. Se previene a las partes en el presente juicio agrario, para que dentro de los diez días posteriores al en que surta efecto la notificación de presente proveído, designen domicilio procesal en la Ciudad y Estado de Guanajuato, para el efecto de que se les notifique en tiempo y forma el día y hora en que tendrán verificativo la diligencia censal, así como la prueba de inspección ocular, ordenadas en los términos precisados en el considerando tercero de este acuerdo. En el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones personales, se practicarán en los estrados del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, en términos del artículo 173 de la Ley Agraria, aplicado por analogía.

SEXTO. Una vez realizadas las diligencias y trabajos señalados, deberán ponerse a la vista de los interesados, por un término de diez días posteriores al en que rinda su informe correspondiente la brigada de ejecución de resoluciones adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11; transcurrido dicho término, éstos deberán ser remitidos a este Tribunal Superior Agrario, para estar en aptitud de emitir la sentencia definitiva dentro del juicio agrario de que se trata.

SEPTIMO. Con copia íntegra certificada del presente acuerdo, notifíquese por oficio al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sobre el cumplimiento que se está dando a la ejecutoria pronunciada el veintitrés de septiembre de dos mil tres, en el juicio de amparo directo D.A.174/2003.

En los mismos términos, notifíquese al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, para acreditar el cumplimiento que se está dando a sus resoluciones emitidas el ocho de febrero de dos mil cinco y nueve de abril de dos mil ocho, en los juicios de amparo indirecto números 622/2004 y 478/2006, respectivamente.”

Sobre el particular, cabe mencionar que las diligencias y trabajos que se indican en párrafos precedentes, como son la diligencia censal de los solicitantes de tierras, la inspección ocular de los predios propiedad de los amparistas Miguel Caballero Jiménez y Plácido Castro Maya, una vez que fueron realizados, se remitieron a este Tribunal Superior, por conducto del Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, por oficio número 2372/09, de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, las que se tuvieron por recibidas mediante proveído de veintiuno de octubre del citado año, acordándose que estos serían analizados, para verificar si estos se desahogaron conforme a las instrucciones contenidas en los acuerdos que ordenaron su desahogo; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., fracción VIII del 9o. y fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO. La presente sentencia se dicta en cumplimiento de la ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo D.A.-174/2003, así como a las dictadas en los juicios de amparo 622/2004, y 478/2006, respectivamente, por el Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Guanajuato.

Al respecto, el artículo 76 de la Ley de Amparo, dispone que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Por su parte el artículo 80 del mismo ordenamiento legal, establece que la sentencia que concede el amparo, tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis que sustentan el Poder Judicial de la Federación en este tema, que son del rubro y texto siguientes:

“EJECUTORIAS DE AMPARO. DEBEN ACATARSE FIELMENTE POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, REITERÁNDOSE LO AHI DETERMINADO PARA RESTABLECER LA GARANTÍA VULNERADA. De acuerdo con lo que estatuye el artículo 80 de la Ley de Amparo, la concesión de la protección federal conlleva efectos restitutorios implícitos, de ahí que deba observarse su alcance pleno para restablecer el goce de las garantías individuales vulneradas. Por tanto, la responsable tiene el deber de apearse a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, exteriorizando en el nuevo fallo los términos y alcances de la protección federal, para considerar correcto su cumplimiento; así, evitará incurrir en desacato o en la repetición del acto reclamado.

No. Registro: 197,777; Tesis aislada; Materia(s): Común

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VI, Septiembre de 1997; Tesis: II.2o.C.T.28 K; Página: 677.

“SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN Y FUERZA DE LAS. La majestad de la verdad legal, establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que dicha verdad legal no puede alterarse en forma alguna, ni a pretexto de aplicación de nuevas leyes, porque esa verdad legal tiene el carácter de incontrovertible, y no puede alterarse, ni limitarse en sus efectos por sentencias o procedimiento de ninguna especie, ni por leyes posteriores, cuya virtud no alcanza a cambiar los asuntos juzgados ejecutoriamente, a no ser que se pretendiera desnaturalizar la finalidad de los fallos del más Alto Tribunal de la República olvidándose que el interés social estriba precisamente en su más puntual cumplimiento, a tal grado que no pueden obstaculizarlo nuevas leyes, ni entorpecerlo resoluciones judiciales comunes, excusas, ni aun reclamaciones de terceros que hayan adquirido de buena fe, aunque aleguen que se lesionan con la ejecución del fallo protector, sus derechos; en otras palabras, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto y, por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir lo resuelto en el amparo, sino que todas aquéllas que intervengan en el acto reclamado, deben allanar, dentro de sus funciones, ya se dijo, los obstáculos que se presenten al cumplimiento de dichas ejecutorias.

No. Registro: 242,268; Tesis aislada; Materia(s): Común

Séptima Época; Instancia: Tercera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 22 Cuarta Parte; Tesis: Página: 75.

TERCERO. Antes de entrar a resolver el fondo del juicio agrario que nos ocupa, es conveniente establecer cuales son las consecuencias legales y alcances de la protección Constitucional concedida a los diversos quejosos en los juicios de amparo que se relacionan en el apartado anterior, los que aquí se precisan para una mayor ilustración.

En ese tenor, en la ejecutoria recaída en el juicio de amparo directo número D.A.- 174/2003, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Camerino Martínez Osornio y otros, que promovieron en su calidad de solicitantes de tierras de la acción agraria que nos ocupa, quienes en sus conceptos de violación señalaron, que aún cuando fueron censados y encontrarse en posesión de diversas fracciones de terreno, provenientes de los predios señalados como de probable afectación, no fueron considerados en la relación de beneficiados, con capacidad para recibir tierras en la sentencia reclamada, de seis de marzo de dos mil uno, en el juicio agrario 340/93.

Dicha medida proteccionista, se otorgó para los efectos que se expresan en la parte considerativa de la ejecutoria de merito, que transcribe en la parte que interesa:

“En esas condiciones procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Camerino Martínez Osornio, Javier Castro Peñaloza, Lorenzo Guerrero, Porfirio Barrera Hernández, Fortino Nava Castro, Jacobo Barrera Pichardo, Luis Aguilar García, Maximino Aguilar García, Tomás Aguilar García, Jovita Castro Heredia, Eduardo Castro Caballero, Ricardo Jiménez Ortega, Silvestre Martínez León, Refugio Castro Peñaloza, Lorenzo Castro Meléndez, Carlos Jiménez Ortega y Alberto Zurita Ruíz, para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario, deje insubsistente la sentencia reclamada y, con plenitud de jurisdicción se ocupe de analizar el Acta de siete de septiembre de dos mil, levantada con motivo de los trabajos técnicos informativos e inspección ocular realizados por el Actuario Ejecutor y el Perito Topógrafo y, en caso de existir el Informe de Comisión rendido por el Comisionado Agrario Roberto Hernández Luna el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, también sea valorado conforme a derecho.

Tomando en consideración los efectos del amparo concedido, que han quedado transcritos, este Organismo Jurisdiccional ordenó recabar las constancias que ahí se destacan, y posteriormente ordenó el desahogo de la diligencia censal de los campesinos solicitantes de tierras, a fin de comprobar se los quejosos reunían los requisitos previstos por el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Consta en autos que al estarse realizando tales diligencias y trabajos, Miguel Jiménez Caballero, en su carácter de propietario particular, por escrito de treinta de julio de dos mil cuatro, en su calidad de tercero extraño en el juicio agrario de que se trata, promovió el juicio de amparo número 622/2004, del cual conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, que se resolvió el ocho de febrero de dos mil cinco, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso, para los efectos que expresan en el considerando sexto de la ejecutoria de amparo, que se transcribe a manera de ilustración en la parte conducente:

“...una vez que cause ejecutoria esta resolución, EL MAGISTRADO PONENTE O INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, adicione un párrafo al acuerdo de fecha quince de abril de dos mil cuatro, en el sentido de que se gire Despacho al Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en la ciudad de Guanajuato, Estado de Guanajuato, para que además ordene notificar personalmente al quejoso MIGUEL CABALLERO JIMENEZ dicho proveído, para el efecto de que si lo estima pertinente, comparezca a la Asamblea General Extraordinaria a la que serán convocados los solicitantes de tierras dentro del expediente del Juicio Agrario 340/93 del Poblado denominado “Puroagua”, Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, en la cual se investigará si las personas que se relacionan en el punto cuarto del capítulo de Antecedentes de dicho acuerdo, reúnen los requisitos de capacidad individual en materia agraria previstas en el artículo 200 de la Ley de la Federal de Reforma Agraria; y para el caso de haberse celebrado ya dicha asamblea, se deje insubsistente la misma y se vuelva a convocar a otra a la cual deberá ser citado personalmente el quejoso, a quien además deberá dársele la oportunidad de repreguntar a aquellos testigos que se presenten y que vayan a declarar en relación al inmueble de su propiedad, pudiendo inclusive ofrecer pruebas y formular alegatos, todo lo cual para que sea tomando en consideración tanto en el proyecto de sentencia, como en la sentencia misma que se dicte en su oportunidad el Tribunal Superior Agrario, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal...Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución, reclamados al MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, CAPITAL, por no reclamar los vicios propios en la ejecución del acto reclamado consistente en el auto de fecha quince de abril de dos mil cuatro; y en consecuencia, será esta autoridad la que deberá dar cumplimiento al Despacho que el Magistrado Ponente o Instructor le girará, debidamente adicionado, en los términos indicados en el párrafo que antecede.”

En ese tenor, tomando en consideración los lineamientos que se desprenden de la sentencia de amparo, este Tribunal Superior, por acuerdo de quince de junio de dos mil cinco, dejó insubsistentes las diligencias desahogadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en la Ciudad y Estado de Guanajuato,

relativas a la investigación de la capacidad agraria de los solicitantes de tierras en el juicio agrario número 340/93, deducidas del acuerdo para mejor proveer de quince de abril de dos mil cuatro; lo anterior, al quedar acreditado en autos, que tales diligencias quedaron desahogadas antes de la fecha en que se resolvió el juicio de amparo 622/2004, ya que las constancias relacionadas fueron remitidas a este Organismo Jurisdiccional, mediante oficio de nueve de octubre de dos mil cuatro, por conducto del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11.

Luego, en el segundo punto resolutivo del acuerdo para mejor proveer aludido, se ordenó la reposición del procedimiento conforme a lo ordenado en el diverso acuerdo para mejor proveer de quince de abril de dos mil cuatro, para que se le diera intervención al quejoso en el amparo en mención Miguel Caballero Jiménez, quien se ostentó con el carácter de propietario de una fracción del predio propuesto como afectable, proveniente del lote 3, fracción I, de la antigua hacienda de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con superficie de 21-48-99 (veintiuna hectáreas, cuarenta y ocho áreas, noventa y nueve centiáreas), a quien se le concedió un plazo de cuarenta y cinco días naturales, con fundamento en el artículo 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para que ofreciera pruebas y formulara alegatos.

La reposición de tales diligencias, corrió a cargo de la Brigada de Ejecución de Resoluciones, adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, las que una vez que fueron substanciadas, se remitieron a este Organismo Jurisdiccional por oficio número 368/2006, de trece de marzo de dos mil seis, así como las pruebas desahogadas, que se deducen del acuerdo para mejor proveer de quince de abril de dos mil cuatro; de tales constancias se acordó que serían analizadas para determinar si se cumplió con lo ordenado en el acuerdo aludido, así como a los diversos de quince de junio de dos mil cinco y dieciocho de enero de dos mil seis, respectivamente.

También así, de autos se conoce que al estarse realizando tales diligencias y trabajos, Plácido Castro Maya, en su carácter de propietario particular de una fracción de terreno, proveniente de uno de los predios afectados en el juicio agrario 340/93, por la sentencia de seis de marzo de dos mil uno, promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló como acto reclamado, precisamente la sentencia aludida. De esta demanda de garantías conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, bajo el número 478/2006, que se resolvió el nueve de abril de dos mil ocho, concediendo la protección Constitucional solicitada por el quejoso, para los efectos que se contienen en el considerando quinto de dicho fallo, que son del tenor que se transcribe:

"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, por lo que es procedente concederle el Amparo y Protección Constitucional que solicita.

Se llega a la conclusión que antecede, por lo siguiente:

En el juicio agrario 340/1993 del índice del Tribunal Superior Agrario, mediante sentencia de dieciséis de junio de dos mil seis, se determinó dotar a campesinos del ejido del Poblado de Puroagua, del Municipio de Jerécuaro, con una superficie de 600-56-39 (seiscientas hectáreas, cincuenta y seis áreas, treinta y nueve centiáreas), de terrenos de temporal y agostadero, que se tomarán, entre otras, de la siguiente fracción:

'...del lote de la fracción II de la exhacienda de Puroagua; 94-51-16 (noventa y cuatro hectáreas, cincuenta y una áreas, dieciséis centiáreas), propiedad actual de Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández...'

De lo anterior se advierte que en el juicio de origen, se ordenó dotar a campesinos del ejido del poblado Puroagua, del Municipio de Jerécuaro, con terrenos (entre otros) del lote de la fracción II de la exhacienda de Puroagua, propiedad de Lorenza Braniff y otros.

(...)

De tales documentos, así como de las testimoniales desahogadas en la etapa de pruebas de la audiencia constitucional, se advierte que:

1.- Plácido Castro Maya adquirió el predio denominado Potrero del Sáuz, ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, con superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas, por compraventa que llevó a cabo con la vendedora Lorenza Braniff.

2.- Dicho predio está amparado por el certificado de inafectabilidad agrícola expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria en mil novecientos noventa y uno y registrado ese mismo año en el Registro Agrario Nacional.

3.- Que los derechos de propiedad y posesión respecto al predio mencionado son anteriores al juicio agrario 340/1993.

En este orden de ideas, está acreditado que en el juicio agrario mencionado se ordenó afectar para dotar a un grupo de campesinos del poblado tercero perjudicado, un predio del que Plácido Castro Maya adquirió con anterioridad a dicho juicio, una fracción.

Ahora bien, aduce el quejoso que se transgredió en su perjuicio la garantía de audiencia, en virtud de que nunca ha sido llamado al juicio agrario 340/1993 del índice del Tribunal Superior Agrario.

(...)

En esas condiciones, la ausencia de cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, resulta violatorio de la garantía de audiencia, lo cual genera una violación manifiesta de la ley que propicia indefensión.

De acuerdo a lo expuesto, la autoridad responsable no demostró que el ahora quejoso fue escuchado en defensa de sus derechos en el juicio agrario 340/1993, con relación al predio denominado Potrero del Sáuz, ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, con una superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas, lo cual evidencia vulneración a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del demandante constitucional.

En este orden de ideas, lo procedente es CONCEDERLE EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, no prive al quejoso en el juicio agrario 340/1993, sin haber sido previamente oído y vencido en dicho juicio, del predio Potrero del Sáuz, ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, con una superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas."

La sentencia antes citada, causó ejecutoria mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil ocho.

Sobre el particular, cabe señalar que este Organismo Jurisdiccional, no hizo pronunciamiento alguno en cuanto a los alcances del amparo y protección de la Justicia de la Unión concedidas a los quejosos Miguel Caballero Jiménez y Plácido Castro Maya, en los juicios de amparo números 622/2004 y 478/2006, respectivamente, en torno a la insubsistencia de la sentencia impugnada en esta vía, de seis de marzo de dos mil uno; lo anterior, tomando en consideración que dicho fallo, mediante acuerdo plenario de nueve de octubre de dos mil tres, se dejó insubsistente, en estricto cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo D.A.- 174/2003, promovido por Camerino Martínez Osornio y otros.

CUARTO. En el juicio agrario que nos ocupa, se respetaron las garantías de audiencia y legalidad previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales; que el procedimiento seguido en el trámite del expediente se ajustó a lo establecido por los artículos 272, 273, 275, 286, 287, 291, 292 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, entre otros, aplicable conforme a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 Constitucional, que se alude en el considerando Primero del presente fallo.

QUINTO. Una vez hechas las aclaraciones del presente asunto, se procede al estudio de los requisitos de procedibilidad de la acción agraria que nos ocupa relativa a la segunda solicitud de ampliación de ejido, puesta en ejercicio por un grupo de campesinos del poblado denominado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato.

En cuanto al primero de estos, que corresponde al requisito de procedibilidad, exigible por el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, consistente en demostrar si los terrenos de cultivo y de uso común concedidos en dotación al poblado de que se trata, los tiene en explotación, a ese respecto, del análisis de las constancias de autos, se conoce lo siguiente:

Por principio, resulta oportuno señalar, que de autos se desprende que originalmente en la sentencia emitida el seis de marzo de dos mil uno, se determinó, de acuerdo con el contenido del acta circunstanciada elaborada el veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, por el comisionado Carlos Guzmán Luna, relativa a la investigación de las tierras concedidas por dotación al núcleo de población solicitante, se determinó que estas se observaron explotadas en su totalidad.

Ahora bien, no se pierde de vista que la sentencia referida, se dejó insubsistente con motivo de la protección constitucional concedida al quejoso Camerino Martínez Osornio y otros, en la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo número D.A.-174/2003, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil tres.

Del mismo modo, con el amparo y protección de la Justicia Federal concedidos a los quejosos Miguel Caballero Jiménez y Plácido Castro Maya, en los juicios de amparo indirectos números 622/2004 y 478/2006, respectivamente, cuyos efectos se traducen en dejar insubsistentes los trabajos técnicos informativos y las diligencias relativas a la verificación de los solicitantes de tierras, desahogadas durante la substanciación del procedimiento del juicio agrario que nos ocupa, que se realizaron con antelación a la tramitación y emisión de las resoluciones de los juicios de amparo señalados, para el efecto de que se les respetara la garantía de

audiencia a los quejosos, se les diera intervención en el juicio agrario 340/93, así como en el desahogo de tales diligencias y trabajos; se les otorgara también la oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos de su intención.

A ese respecto, los citados quejosos ofrecieron entre otras probanzas, la inspección ocular de los predios de su propiedad, tendientes a demostrar que estos no rebasan los límites de la pequeña propiedad, que los tienen en posesión y en explotación; la inspección ocular de los terrenos concedidos en dotación al poblado solicitante, para acreditar que estos inmuebles no se encuentran explotados en su totalidad, con lo cual se transgrede el contenido del artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, también ofrecieron la diligencia censal de los solicitantes de tierras, con la finalidad de probar que estos no reúnen los requisitos exigibles por el artículo 200 del ordenamiento legal invocado.

En ese orden de ideas, mediante acuerdo para mejor proveer de veintinueve de enero de dos mil nueve, se ordenó girar despacho al Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, para que en auxilio de las labores de este órgano Jurisdiccional, comisionara a la Brigada de Ejecución de Resoluciones (integrada por un actuario y un ingeniero topógrafo), adscrita al citado tribunal, para que se avocara a la realización de las diligencias y trabajos que se indican, así como al desahogo de las pruebas admitidas.

Por oficio número 2372/72, de catorce de octubre de dos mil nueve, el Secretario de Acuerdos del tribunal requerido, remitió las constancias relativas, deducidas de acuerdo de merito y de los diversos despachos DA/42/09, DA/01/09 y DA/06/09 que se generaron en el juicio número 340/93.

En cuanto al requisito de procedencia que hace exigible el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, resulta oportuno señalar el resultado que arrojó la diligencia relativa a la investigación de los terrenos que le fueron concedidos en dotación al poblado de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato.

Al respecto consta en autos a fojas 2395-2399, del tomo IV del cuaderno de actuaciones del juicio agrario que nos ocupa, el acta relativa a la inspección ocular levantada por los integrantes de la Brigada de Ejecución de Resoluciones adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con residencia en la Ciudad y Estado de Guanajuato, que se integra por un actuario y un ingeniero topógrafo, ofrecida como prueba por Plácido Castro Maya, con la finalidad de demostrar que los solicitantes de tierras no reúnen el requisito de procedencia previsto por el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y que por consiguiente debe negarse la acción intentada; el acta circunstanciada respectiva se levantó el nueve de junio del dos mil nueve, destacando de su contenido lo siguiente:

"El suscrito actuario executor adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Décimo primero con sede en la ciudad de Guanajuato, capital. Hace constar y da fe que me constituí física y legalmente en compañía del ingeniero topógrafo adscrito a este mismo Tribunal Unitario Agrario. En la superficie dotada al ejido de Puroagua, para el efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil ocho, dictado por el Tribunal Superior Agrario y al acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Décimo Primero, para el efecto de llevar a cabo inspección ocular que deriva del contenido del artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, consistente en la investigación de los terrenos concedidos al poblado de que se trata por concepto de dotación de tierras a fin de comprobar si tales terrenos se encuentran explotados en su totalidad, lo anterior por ser un requisito de procedibilidad que requiere comprobación previa para la prosecución de la acción agraria intentada, todo esto con fundamento en las atribuciones y facultades que me confiere la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y la Ley Agraria en vigor. Estando presentes los CC. Plácido Castro Maya (quien se identifica con credencial de elector folio: 15423982, expedida por el Instituto Federal Electoral), C. Camerino Martínez Osornio (representante común de solicitantes), se identifica con credencial de elector folio 15439158, expedida por el Instituto Federal Electoral, y el Lic. Gonzalo Jaime Rosales (autorizado legal del C. Camerino Martínez Osorio, quien se identifica con credencial de elector folio: 14822336, expedida por el Instituto Federal Electoral.

Acto seguido, se procede al desahogo de la inspección judicial solicitada por el C. Plácido Castro Maya, consistente en la investigación de los terrenos concedidos al poblado de Puroagua, por concepto de dotación de tierras; a fin de comprobar si tales terrenos se encuentran explotados en su totalidad.

El suscrito actuario da fe y hace constar que me constituí física y legalmente en el potrero denominado San Jorge, de la dotación del ejido de Puroagua, el cual se localiza en la parte Sur de la zona urbana (del poblado de Puroagua). Iniciando el caminamiento en el potrero antes descrito y pasando por Rancho del Padre, presa Del Monte, rancho La Cueva, Rancho Seco, Rancho El Agostadero, Cerro de Puente Pelón, Valar de Pequeñas Amarillas, Pueblo Viejo y Rancho el Chilarillo.

En dicho recorrido se observó lo siguiente:

La dotación del poblado Puroagua, tiene una superficie de 4-152 se dice 4,152-00-00 hectáreas de acuerdo al plano definitivo de dicho ejido que recorrimos de las cuales 2,150-00-00 hectáreas aproximadamente son de agostadero y/o cerril, apreciándose en su interior nopal, pirúl, casahuate, huizache, eucalipto, encino y pino y se observaron animales como lo son (caballos, burros, reses y borregos) en un número menor. Se anexa croquis de localización.

Y de tierras desmontadas se observaron aproximadamente 2,000-00-00 hectáreas de temporal, de las cuales un 35% aproximadamente se encontraron sembradas de maíz en su mayoría (95%), y 5% sembradas de nopal y agave; un 15% aproximadamente de terreno desmontado con señales de surcos (sin sembrar) y un 50% aproximadamente de terreno desmontado completamente baldío (sin sembrar; se aprecian así mismo diez bordos para abrevaderos.

Observándose algunas mojoneras en los vértices que señale el plano y algunas cercas de piedra, postes de fierro y alambre de púas, y sólo por el lado Poniente si esta delimitado con una cerca de piedra, de aproximadamente un metro de altura (de los animales observados se apreciaron: 50 caballos, 50 reses, 100 borregos y 20 burros...”

No habiendo más que tratar, se da por concluida la presente diligencia de inspección ocular, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día nueve de julio de dos mil nueve.”

Firmaron el acta quienes estuvieron presentes e intervinieron durante su desahogo.

A la precitada probanza, se le otorga valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia agraria, toda vez dicha diligencia fue desahogada por funcionario público en ejercicio de sus funciones, con motivo de una orden emitida por una autoridad jurisdiccional, como lo es este Tribunal Superior, para tener por ciertos los datos ahí asentados.

En ese tenor, de acuerdo con el contenido de la citada documental pública, la misma genera valor convictivo para determinar que los terrenos que le fueron dotados al poblado denominado “Puroagua”, Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, se encuentran debidamente explotados, actualizándose en la especie el supuesto previsto por el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

En efecto, del análisis efectuado al texto contenido en esa documental pública, se advierte y se conoce que la Brigada de Ejecución de resoluciones adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, comisionada para el desahogo de la inspección ocular respecto de tales terrenos, se constituyó en el poblado en mención para iniciar el recorrido de los mismos, desprendiéndose el resultado siguiente:

Que los terrenos dotados al poblado Puroagua, cuentan con una superficie de 4,152-00-00 (cuatro mil ciento cincuenta y dos) hectáreas de acuerdo con el plano definitivo del ejido señalado, que en su recorrido se observó que una extensión aproximada de 2,150-00-00 (dos mil ciento cincuenta) hectáreas, son de agostadero y/o cerril, de conformidad al cálculo elaborado por el ingeniero topógrafo, apreciándose en su interior la existencia de nopal, pirúl, casahuate, huizache, eucalipto, encino y pino.

Que también se observaron diversas cabezas de ganado, a saber: 50 (cincuenta) caballos, 50 (cincuenta) reses, 100 (cien) borregos y 20 (veinte) burros.

Que continuando con el recorrido de los terrenos, se observó otra superficie aproximada de 2,000-00-00 (dos mil hectáreas) de temporal, de las que en un 35% (treinta y cinco por ciento) aproximadamente, se encontraron sembradas de maíz en su mayoría y un 5% (cinco por ciento) sembradas de nopal y agave; se observó otro 15% (quince por ciento) de los terrenos, desmontado con señales de surcos (sin sembrar); finalmente se observó la superficie restante de la dotación de tierras desmontada, sin sembrar, dentro de la que se contabilizaron diez bordos de agua, para abrevaderos; También se informa que durante el recorrido de los terrenos, se localizaron algunas mojoneras en los vértices que señala el plano definitivo del ejido, así como algunas cercas de piedra, alambre de púas con postes de fierro, y sólo por el lado Poniente se encontró delimitado con una cerca de piedra, con un metro de altura aproximadamente.

En ese orden de ideas, y tomando en consideración que la mayor parte de la superficie dotada al poblado de que se trata, se conforma con terrenos de agostadero y de tipo cerril, y en menor proporción de temporal, dicha probanza conduce a concluir que los terrenos ejidales se encuentran debidamente explotados, tomando en consideración la calidad de las tierras, el uso a que se destinan de acuerdo con su vocación, como bien quedó acreditado, como lo es la explotación ganadera, tan es así que durante su recorrido se observaron diversas cantidades de ganado mayor y menor, como son 50 (cincuenta) reses y 20 (veinte) borregos, 50 (cincuenta) cabezas de caballo y 20 (veinte) de asnar.

En este orden de ideas, tales elementos probatorios, permiten tener por acreditado el requisito que hace exigible el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para la procedencia de la solicitud de tierras formulada por un grupo de campesinos del poblado que nos ocupa.

SEXTO. Precisado lo anterior, se procede al estudio de los requisitos de capacidad tanto individual como colectiva de los solicitantes de tierras en materia agraria, previstos por los artículos 197, fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria; al respecto, conviene traer a colación y destacar algunos antecedentes del caso.

En ese tenor, consta en autos el informe rendido el veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y uno, por los comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria, Juan Manuel Castillo Segura y Alberto Noyola Vázquez, quienes informaron sobre la existencia de un total de cuarenta y cinco campesinos con derecho a recibir tierras, según se desprende del informe de merito, así como del acta relativa a la asamblea general de solicitantes de tierras, celebrada el veintiocho del mismo mes y año (que obran en autos a fojas de la 18 a la 33, del legajo III), constancias que se valoraron de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pruebas estas que una vez justipreciadas permitieron tener por demostrado la existencia de un total de cuarenta y cinco campesinos que demostraron su capacidad individual y colectiva en materia agraria, siendo sus nombres los siguientes:

1. Martín Vega Vega. 2. Agustín Guerrero Barrera. 3. Gabriel Castro Ruiz. 4. Alberto Barrera Pichardo. 5. Rafael Castro Rodríguez. 6. Román Barrera Dámaso. 7. Francisco Barrera Martínez. 8. Antonio Barrera Dámaso. 9. Abraham Martínez Rodríguez. 10. Ismael Martínez Rodríguez. 11. Abel Barrera Pichardo. 12. José Castro Rodríguez. 13. Simeón Aguilar Palacios. 14. Demetrio Olvera Padilla. 15. María Belém Barrera Onofre. 16. Donato Barrera Onofre. 17. Valente Granados Noguéz. 18. Antonio Barrera Martínez. 19. Manuel Arreola Tovar. 20. María Esther Arreola Rosales. 21. María Cirila Onofre Garnica. 22. Cipriano Arreola Rosales. 23. Manuel Arreola Rosales. 24. Gabino Rodríguez Aguilar. 25. Gabino Beltrán Padilla. 26. Juan Garnica Elizondo. 27. Rubén Mondragón Noguéz. 28. Gonzalo Noguéz Noguéz. 29. Francisco Rodríguez Hernández. 30. Juan Barrera Onofre. 31. Guadalupe Barrera Orrala. 32. Abel Barrera Galindo. 33. Raúl Barrera Galindo. 34. Sabino Barrera Dámaso. 35. José Aguilar Rosales. 36. Emiliano Barrera Montoya. 37. Juan Peña Olvera. 38. Felipe Barrera Onofre. 39. Eusebio Pozos Martínez. 40. Marcelino Barrera Palomar. 41. Ignacio Valencia Ledezma. 42. Apolonio Valencia Castro. 43. Petronilo Martínez Alcantar. 44. Bonifacio Aguilar Morales. 45. Perfecto Tovar Arreola.

No obstante lo anterior, es oportuno mencionar que Camerino Martínez Osornio y un grupo de personas que se ostentaron con el carácter de solicitantes de tierras, promovieron demanda de garantías en contra de la sentencia emitida el seis de marzo de dos mil uno, en la que no se les reconoció esa calidad dentro del juicio agrario número 340/93, y no incluirlos como beneficiados en la sentencia impugnada.

El citado juicio de amparo se radicó ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número 174/2003, habiéndose resuelto mediante ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil tres, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Camerino Martínez Osornio, Javier Castro Peñaloza, Lorenzo Guerrero, Porfirio Barrera Hernández, Fortino Nava Castro, Jacobo Barrera Pichardo, Luis Aguilar García, Maximino Aguilar García, Tomás Aguilar García, Jovita Castro Heredia, Eduardo Castro Caballero, Ricardo Jiménez Ortega, Silvestre Martínez León, Refugio Castro Peñaloza, Lorenzo Castro Meléndez, Carlos Jiménez Ortega y Alberto Zurita Ruiz, para el efecto de que este Tribunal Superior, es su carácter de autoridad responsable, dejara insubsistente la sentencia reclamada y, con plenitud de jurisdicción se ocupara de analizar el acta de siete de septiembre de dos mil, levantada con motivo de los trabajos técnicos informativos e inspección ocular realizados por el Actuario Ejecutor y el Perito Topógrafo y, en caso de existir el Informe de Comisión rendido por el Comisionado Agrario Roberto Hernández Luna el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, también fuera valorado conforme a derecho; lo anterior, para estar en posibilidad de analizar si los mencionados quejosos reunían los requisitos de capacidad individual y colectiva en materia agraria, previstos por los artículos 197, fracción II, y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Consta en autos que en estricto cumplimiento a la ejecutoria, este Organismo Jurisdiccional se avocó al estudio y valoración de las documentales aludidas, siendo que de su contenido y análisis no se desprendía ningún elemento de prueba favorable a los quejosos, tendiente a la acreditación de los requisitos de capacidad individual en materia agraria, que hace exigible el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para la procedencia de la acción agraria intentada, relativa a la ampliación de ejido.

Por el motivo anterior, con la finalidad de contar con los medios de prueba idóneos, tendientes a verificar si los quejosos en el juicio de amparo 174/2003, reúnen el requisito previsto en el numeral antes invocado, este Tribunal Superior ordenó la realización de una asamblea general de los solicitantes de tierra, concretamente para verificar si los citados quejosos, satisfacían los requerimientos establecidos por el numeral 200 antes invocado, y de encontrarse en este supuesto, pudieran ser considerados con capacitados agraria para recibir tierras, por concepto de ampliación de ejido.

En relación con este tema, no se soslaya el hecho de que al estarse realizando la referida diligencia, relativa a la verificación censal de los solicitantes de tierras, quejosos en el juicio de garantías señalado, Miguel Caballero Jiménez, con el carácter de propietario de un lote de terreno, proveniente los uno de los predios propuestos como afectables, por escrito de treinta de julio de dos mil cuatro, y en su calidad de tercero extraño en el juicio agrario 340/93, promovió el juicio de amparo indirecto 622/2004, del que conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, resolviéndose el ocho de febrero de dos mil cinco, concediéndose la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que una vez que causara ejecutoria dicha resolución, el Magistrado ponente instructor del Tribunal Superior, adicionara un párrafo a su acuerdo de fecha quince de abril de dos mil cuatro, para que girara despacho al Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en la Ciudad y Estado de Guanajuato, para que además ordenara notificar personalmente al quejoso Miguel Caballero Jiménez dicho proveído, a fin de que si lo estimara pertinente, compareciera a la Asamblea General Extraordinaria a la que serían convocados los solicitantes de tierras dentro del expediente del Juicio Agrario 340/93 del Poblado denominado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, en la que se investigaría si las personas que se relacionan en el punto cuarto del capítulo de Antecedentes del acuerdo referido, reúnen los requisitos de capacidad individual en materia agraria previstas en el artículo 200 de la Ley de la Federal de Reforma Agraria; y para el caso de haberse celebrado ya dicha asamblea, se dejara insubsistente tal diligencia, a fin de que se volviera a convocar a otra a la cual fuera citado personalmente el quejoso, a quien además debía dársele la oportunidad de repreguntar a aquellos testigos que se presentaran y que fueran a declarar en relación al inmueble de su propiedad, pudiendo inclusive ofrecer pruebas y formular alegatos, todo lo cual para que fuera tomando en consideración tanto en el proyecto de sentencia, como en la sentencia misma que dicte en su oportunidad el Tribunal Superior Agrario, concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución, reclamados al Tribunal Unitario Agrario, con sede en la ciudad y Estado de Guanajuato,

Tomando en consideración los lineamientos que se desprenden de la ejecutoria de amparo, este Tribunal Superior, por acuerdo de quince de junio de dos mil cinco, dejó insubsistentes las diligencias desahogadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, que corresponden a la investigación de la capacidad agraria de los solicitantes de tierras en el juicio agrario número 340/93, quejosos en juicio de amparo 174/2003; lo anterior, al quedar evidenciado en autos, que tales diligencias se desahogaron con fecha anterior a la emisión de la resolución recaída en el juicio de amparo 622/2004, que se comenta, ya que las constancias relativas fueron remitidas a este Organismo Jurisdiccional, por oficio de nueve de octubre de dos mil cuatro, por conducto del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11.

Por lo anterior, en el punto resolutivo segundo del acuerdo para mejor proveer aludido, se ordenó la reposición de tales diligencias, conforme a lo ordenado en el diverso acuerdo para mejor proveer de quince de abril de dos mil cuatro, para que se le diera notificación al citado quejoso Miguel Caballero Jiménez, y se le diera intervención para su desahogo, quien se ostentó con el carácter de tercero extraño en el juicio agrario que nos ocupa, número 340/93, y como propietario de una fracción del predio propuesto como afectable, proveniente del lote 3, fracción I, de la antigua hacienda de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con superficie de 21-48-99 (veintiuna hectáreas, cuarenta y ocho áreas, noventa y nueve centiáreas), a quien se le concedió un plazo de cuarenta y cinco días naturales, con fundamento en el artículo 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para que ofreciera pruebas y formulara alegatos.

La reposición de tales diligencias, estuvo a cargo de la Brigada de Ejecución de Resoluciones, adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, las que una vez que fueron realizadas, se remitieron a este Organismo Jurisdiccional por oficio número 368/2006, de trece de marzo de dos mil seis, de las que se acordó, serían analizadas en su oportunidad para determinar si se encontraban ajustadas a lo ordenado en el acuerdo de origen.

De autos se desprende que al estarse reponiendo tales diligencias, Plácido Castro Maya, en su carácter de tercero extraño en el juicio agrario 340/93, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la sentencia dictada el seis de marzo de dos mil uno. De dicha demanda conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, bajo el número 478/2006, que se resolvió el nueve de abril de dos mil ocho, concediendo la protección Constitucional solicitada por el quejoso, para el efecto de que una vez que causara ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, no prive al quejoso en el juicio agrario 340/1993, sin haber sido previamente oído y vencido en dicho juicio, respecto del predio denominado "Potrero del Sáuz", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con una superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas.

Lo anterior por considerar que el quejoso Plácido Castro Maya adquirió el predio denominado "Potrero del Saúz, ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, con superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas, por compraventa que hizo a la vendedora Lorenza Braniff; que dicho predio está amparado por el certificado de inafectabilidad agrícola expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria en mil novecientos noventa y uno, y registrado ese mismo año en el Registro Agrario Nacional; que los derechos de

propiedad y posesión respecto al predio mencionado son anteriores al juicio agrario 340/1993; que también está acreditado que en el juicio agrario mencionado se ordenó afectar para dotar a un grupo de campesinos del poblado tercero perjudicado, un predio del que Plácido Castro Maya adquirió con anterioridad a dicho juicio, una fracción.

Que de acuerdo a lo expuesto, la autoridad responsable no demostró que el ahora quejoso fue escuchado en defensa de sus derechos en el juicio agrario 340/1993, con relación al predio denominado Potrero del Saúz, ubicado en el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, con una superficie total de seis hectáreas, cero áreas, cero centiáreas, lo cual evidencia vulneración a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del demandante constitucional.

La sentencia antes citada, causó ejecutoria por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil ocho.

Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil nueve, se dejó insubsistente la diligencia censal llevada a cabo el primero de marzo de dos mil seis. En el segundo punto del referido acuerdo, se ordenó la reposición de tales diligencias en las que se les dieran intervención a los quejosos en los diversos juicios de amparo.

De tal suerte que para dar debido cumplimiento a la ejecutoria emitida el veintitrés de septiembre de dos mil tres, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo D.A. 174/2003, así como a la resolución recaída en los juicios de amparo indirectos 622/2004, y 478/2006, este Organismo Jurisdiccional, ordenó la reposición de tales diligencias, a fin de que se les diera intervención en su realización a los diversos quejosos en los juicios de amparo aludidos, restituyéndolos de esta manera en el goce de la garantía individual violada, dentro del juicio agrario 340/93.

Por oficio número 2372/09, de catorce de octubre de dos mil nueve, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, remitió a este Organismo Jurisdiccional, las constancias correspondientes que derivaron de los despachos números DA/42/08, DA/01/09 y DA/06/09, relativas a las cédulas de notificación dirigidas a los diversos quejosos Camerino Martínez Osornio y otros, Miguel Caballero Jiménez y Plácido Castro Maya, respectivamente, en los juicios de amparo señalados en el párrafo que antecede, así como las convocatorias y el acta relativa de la asamblea general de solicitantes de tierras, celebrada el diez de julio de dos mil nueve, con el objeto de verificar si los peticionarios de tierras reúnen los requisitos de procedencia de la acción de ampliación de ejido, previstos por los artículos 197, fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Precisado lo anterior, se procede entrar al análisis y valoración de tales constancias, en términos de lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley Agraria, en correlación con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia agraria, de las que, en su orden, se desprende substancialmente lo siguiente:

Que por principio se lanzó una primera convocatoria con fecha diecinueve de junio de dos mil nueve, dirigida tanto a los solicitantes de tierras de la acción agraria de primera ampliación de ejido, así como a los propietarios Miguel Caballero Jiménez y Plácido Castro Maya, para que concurrieran a la asamblea general de solicitantes de tierras, con la finalidad de levantar el censo general agrario, para verificar si los peticionarios reúnen los requisitos de capacidad en materia agraria que prevén los artículos 197 fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, señalándose el tres de julio de dos mil nueve para su celebración, constando en autos el acta circunstanciada respectiva, levantada en la fecha que se indica, por conducto del actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, licenciado José Alfredo Yáñez Sánchez, en la que expresa que no fue posible llevar a cabo la diligencia de mérito, toda vez que no se reunió la mitad más uno de los solicitantes de tierras convocados, que fue del orden de 85 personas, que aparecen relacionadas en el acuerdo para mejor proveer de veintinueve de enero de dos mil nueve, que obra en autos, asentando en su razón, que al pasar lista de asistencia de ese número de personas, se percató que únicamente asistieron a esa diligencia, 22 (veintidós) solicitantes; por el motivo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de Reforma Agraria, procedió a lanzar una segunda convocatoria, señalando las once horas del tres de julio del año en cita, para que tuviera verificativo la citada diligencia.

En ese orden de ideas, consta en autos el original del acta circunstanciada relativa a la asamblea general de solicitantes de tierras, efectuada el diez de julio de dos mil nueve (foja 2422, legajo IV), de cuyo contenido se conoce que nuevamente fueron convocados los 85 (ochenta y cinco) solicitantes de tierras, para verificar si estos reúnen los requisitos exigibles por los artículos 197, fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Del acta circunstanciada respectiva, se desprende que el actuario procedió al levantamiento del censo general agropecuario, tendiente a verificar la capacidad individual y colectiva de los solicitantes de la ampliación de ejido, desprendiéndose del contenido de los formatos utilizados para el desahogo de tal diligencia, que al acto comparecieron 54 (cincuenta y cuatro) campesinos solicitantes de tierras, quienes manifestaron ser mayores de edad, de nacionalidad mexicana, su estado civil, el tiempo de residencia

en el poblado de "Puroagua", quienes también expresaron tener como ocupación habitual las labores del campo, en su mayoría expresaron tener en posesión diversas superficies de terreno que forman parte de los predios señalados como de probable afectación, algunos en su carácter de aparceros y otros en virtud de una entrega provisional que les hizo el Gobierno del Estado, según manifestaron, así como ser propietarios de un número mínimo de semovientes como son ganado bobino, caballar, asnar, lanar, porcino y aves de corral; siendo que los peticionarios firmaron de conformidad para constancia, siendo sus nombres los siguientes:

1. Porfirio Barrera Hernández, **2.** Fortino Nava Castro, **3.** Roberto Castro Ledezma, **4.** Tomás Aguilar García, **5.** Luis Aguilar García, **6.** Maximino Aguilar García, **7.** Manuel Castro Garduño, **8.** Jovita Castro Heredia, **9.** Refugio Castro Peñaloza, **10.** Carmen Barrera de Pichardo, **11.** Margarita Hernández Delgado, **12.** Javier Castro Peñaloza, **13.** Magdalena Castro Peñaloza, **14.** Inés Álvarez Morales, **15.** Eduardo Castro Álvarez, **16.** Silvestre Martínez León, **17.** Camerino Martínez Osornio, **18.** Teodora Martínez Osornio, **19.** Marcelina Martínez Osornio, **20.** Carlota Martínez Osornio, **21.** Francisco Martínez Osornio, **22.** Lorenzo Castro Meléndez, **23.** Carlos Jiménez Ortega, **24.** José Jiménez Ortega, **25.** Ricardo Jiménez Ortega, **26.** Roberto Rivera Padilla, **27.** Abel Garnica Guerrero, **28.** María Guadalupe Hernández Camacho, **29.** Agustín Guerrero Barrera, **30.** Gabriel Castro Ruiz, **31.** Alberto Barrera Pichardo, **32.** Rafael Castro Rodríguez, **33.** Román Barrera Dámaso, **34.** Francisco Barrera Martínez, **35.** Antonio Barrera Dámaso, **36.** Abraham Martínez Rodríguez, **37.** Abel Barrera Pichardo, **38.** María Belén Barrera Onofre, **39.** Donato Barrera Onofre, **40.** María Esther Arreola Rosales, **41.** María Cirila Onofre Garnica, **42.** Cipriano Arreola Rosales, **43.** Manuel Arreola Rosales, **44.** Gonzalo Noguez, **45.** J. Guadalupe Barrera, **46.** Raúl Barrera Galindo, **47.** Sabino Barrera Dámaso, **48.** José Aguilar Rosales, **49.** Emiliano Barrera Montoya, **50.** Eusebio Pozos Martínez, **51.** Marcelino Barrera Palomar, **52.** Ignacio Valencia Ledezma, **53.** Apolonio Valencia Castro, y **54.** Jacobo Barrera Pichardo.

Cabe destacar que en el rubro de observaciones que se contiene en el formato del censo general agrario levantado, se consigna que algunos de los campesinos censados manifestaron que fueron aparceros de las fracciones de terreno que detentan en posesión, tal es el caso de los campesinos que se relacionan con los números: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 y 54, respectivamente, y los relacionados con los números 2 y 7, se indica que son propietarios, sin que en ningún caso hayan aportado las pruebas idóneas para acreditar los hechos que refieren.

Así mismo, en el reverso de la última hoja censal, consta la observación formulada por Camerino Martínez Osornio, quien aparece como solicitante de tierras, censado con el número 18 en la relación censal levantada, quien refiere que sólo para el efecto de que conste en autos, que los campesinos censados con los números 5,6,7,8, 11,15,16,20,21, 22, 23, 28,31,33,34,36, 40, 41 y 42 respectivamente, que la posesión que manifiestan tener sobre diversas fracciones de terreno, deriva de un contrato de aparcería que celebraron en años anteriores, con los propietarios de tales predios, que son los señalados como posiblemente afectables, así como de terceras personas, firmando para constancia el actuario.

Por otra parte, el actuario comisionado para efectuar la diligencia de que se trata, en la misma fecha de su realización, es decir, el diez de julio de dos mil diez, levanto su razón actuarial en la que hace constar que algunos de los campesinos solicitantes de tierras, que aparecen relacionados en el acuerdo para mejor proveer de este Tribunal Superior de veintinueve de enero de dos mil nueve, que debían ser considerados en el desahogo del censo agrario, ya fallecieron, según información proporcionada por algunos de los campesinos que participaron en dicha diligencia censal, proporcionando los nombres de aquellos, siendo los siguientes: **1.** J. Jesús Castro Maya, **2.** Eduardo Castro Caballero, **3.** Magdaleno Martínez Osorio, **4.** Cándida Martínez Osorio, **5.** Florencio García Aguilar, **6.** Auxilio Castro Meléndez, **7.** Alberto Zurita Ruiz, **8.** Paula Olvera Castro, **9.** Lorenzo Guerrero, **10.** Ismael Martínez Rodríguez, **11.** José Castro Rodríguez, **12.** Simeón Aguilar Palacios, **13.** Demetrio Olvera Padilla, **14.** Antonio Barrera Martínez, **15.** Manuel Arreola Tovar, **16.** Gabino Beltrán Padilla, **17.** Francisco Rodríguez Hernández, **18.** Juan Peña Olvera, **19.** Felipe Barrera Onofre, **20.** Petronilo Martínez Alcántara y **21.** Perfecto Tovar Arreola.

Lo anterior, informa, porque al pasar lista de asistencia de los peticionarios de tierras, los campesinos que asistieron al acto, le manifestaron que aquellos habían fallecido; también expresa que se apersonaron algunos familiares de las personas fallecidas, para que se les reconozca el derecho que tenían estas como solicitantes de tierras.

Tampoco se soslaya el hecho de que al desahogarse la diligencia censal, algunas de las personas censadas que intervinieron en esa diligencia manifestaron ser propietarias de las fracciones de terreno que señalaron tener en posesión, tal es el caso de los relacionados con los números y nombres siguientes: **2.** Fortino Nava Castro, **7.** Manuel Castro Garduño y Carmen Barrera de Pichardo; ante tales circunstancias, dichas personas no pueden formar parte de los campesinos con capacidad en materia agraria, por no reunir los requisitos previstos por los artículos 197, fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria. La determinación anterior también les resulta aplicables a los campesinos que se enlistan con los números y nombres siguientes: **24.** José Jiménez, **26.** Roberto Rivera, **27.** Abel Garnica y **35.** Antonio Barrera, ya que como se expondrá en la parte final del considerando séptimo, al entrar al estudio y valoración de los trabajos técnicos informativos respecto de los predios señalados como de probable afectación, se demostrará que estos últimos, aparecen como propietarios de diversas fracciones de terreno, provenientes de aquellos.

En este orden de ideas, a tales constancias se concede valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia agraria, en correlación con los artículos 32, 35, 286. Fracción I, 287 Y 288 de Ley Federal de Reforma Agraria, que resultan aplicables en lo conducente, para tener por demostrados los requisitos de capacidad individual y colectiva de los solicitantes de tierra en materia agraria, en términos de lo dispuesto por los artículos 197, fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Lo anterior, en virtud de que quedó probado en autos la existencia de un total de 47(cuarenta y siete) campesinos con derecho a recibir tierras, que tienen como ocupación habitual las labores del campo y/o el trabajo de la tierra; inclusive, señalaron en su mayoría, que tienen en posesión diversas fracciones de terreno, que forman parte de los predios propuestos como afectables para la acción de ampliación de ejido que nos ocupa en el juicio agrario 340/93, algunos por haberla adquirido mediante contratos de aparcería, lo cual no demostraron con las pruebas conducentes, y otros, en virtud de un acto de autoridad, al ejecutarse provisionalmente un mandamiento de autoridad en el año de 1938, hecho que será motivo de un pronunciamiento posterior.

Siendo importante destacar que la anterior consideración, no constituye un obstáculo legal para establecer, que el propietario Plácido Castro Maya, con la finalidad de poder desvirtuar la capacidad individual y colectiva de los solicitantes de tierras, aportó entre otros medios de prueba en original, diversos contratos privados de aparcería, celebrados el diez de octubre de mil novecientos cuarenta, entre los propietarios de diversas fracciones de terreno provenientes de la hacienda de "Puroagua", ubicada en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, que se identifican como Señores Gómez de Parada Hermanos, y varias personas que se dicen campesinos, en su carácter de aparceros, cuyos nombres son los siguientes:

1. Alberto Barrera, 2. Román Barrera, 3. Francisco Barrera, 4. Antonio Barrera, 5. Donato Barrera, 6. Gabino Beltrán, 7. Juan Barrera, 8. Juan Olvera, 9. Marcelino Barrera, 10. Dionisio Castro, 11. Alejo Castro, 12. Donato Onofre y 13. Juan Castro.

Siendo objeto del contrato de aparcería, diversas fracciones de terreno, cuyas superficies oscilan entre 2-98-00 (dos hectáreas, noventa y ocho áreas) la menor y 3-60-00 (tres hectáreas, sesenta áreas), la mayor; en el texto de los documentos de merito, se precisa que la duración del contrato es por un año a partir de la fecha que se indica, es decir, por el ciclo agrícola mil novecientos cuarenta - mil novecientos cuarenta y uno.

Sin que conste en autos algún medio de prueba que se relacione con el hecho que se pretende demostrar, que permita tener por acreditado: si se cumplió con el objeto del contrato, es decir, si se otorgó la posesión de los inmuebles a los aparceros señalados, si tales contratos se dieron por terminados al cumplirse el plazo pactado en tales operaciones contractuales, o en su caso, si éstos fueron prorrogados anualmente; tampoco se conoce si los propietarios realizaron algún trámite de carácter legal tendiente a recuperar el dominio y la posesión de esos terrenos, en el caso de que los contratos se haya perfeccionado, o hayan controvertido ante la autoridad judicial competente la posesión derivada de esos contratos; todo lo cual impide emitir un pronunciamiento en torno a la validez y alcances legales de tales documentales.

El mismo propietario Plácido Castro Maya exhibió en original cuatro contratos privados de aparcería, celebrados el uno de marzo de mil novecientos veintidós, el primero de estos; los dos siguientes el uno de marzo de mil novecientos veinticinco, y el último el uno de marzo de mil novecientos veintiséis, entre José Valencia, Felipe Barrera, y Francisco Barragán, en su carácter de aparceros, y como propietaria, se expresa a la testamentaria de la familia Gómez de Parada; sin señalar cual es la superficie objeto del contrato, ni la identidad del predio donde se ubican tales fracciones de terreno.

No obstante lo anterior, de tales documentos se infiere que existen seis nombres y el primer apellido que coinciden con el de igual número de personas que aparecen relacionadas en el censo general agropecuario levantado el diez de julio de dos mil nueve, que constan con los números: 31, 33, 34, 35, 39 y 51, respectivamente; los que sin embargo no se puede corroborar si se trata de las mismas personas, puesto que como ya se dijo, en los contratos de que se trata únicamente aparece el nombre y primer apellido de los aparceros contratantes, mientras que en la diligencia censal se expresaron el nombre y ambos apellidos de los solicitantes de tierras, todo lo cual hace imposible corroborar si el nombre de los contratantes corresponde al de las personas censadas.

Además, tomando en consideración el año en que llevaron a cabo tales contratos, en relación con la edad que manifestaron tener las personas censadas en el momento en que se desahogó la audiencia relativa, cuyos nombres y primer apellido coincide con el de los contratantes, quienes en el orden que se indica, indicaron tener la edad de 58, 62, 88, 65, 88 y 57, respectivamente; de ahí que de un simple cálculo aritmético, se puede concluir que los campesinos que aparecen relacionados en el censo con los números 31, 33, 35 y 51, aún no habían nacido en el año en que fueron celebrados los contratos de aparcería antes referidos; en cuanto a los listados con los números 34 y 39 en el censo agrario, tenían la edad de 18 años, sin embargo, como ya quedo expuesto, no existe medio de prueba alguno que permita establecer sin lugar a dudas que se trate de las mismas personas censadas y las que intervinieron en las operaciones contractuales que se indica.

No obstante la conclusión alcanzada en el párrafo precedente, en el caso que nos ocupa, resulta ilustrativo señalar que los artículos 202 y 293 de la Ley Federal de Reforma Agraria disponen lo siguiente:

“Artículo 202.- Los peones o trabajadores de las haciendas tienen derecho a concurrir entre los capacitados a que se refiere el artículo 200. Para el efecto serán incluidos en los censos que se levanten con motivo de los expedientes agrarios que se inicien a petición de ellos mismos, o en los correspondientes a solicitudes de núcleos de población, cuando el lugar en que residan quede dentro del radio de afectación del poblado solicitante; en este caso las autoridades agrarias procederán de oficio. También tienen derecho al acomodo en las superficies excedentes de las tierras estatuidas o dotadas a un núcleo de población y a obtener gratuitamente una unidad de dotación en los centros de población que constituyan las instituciones federales y locales, expresamente autorizadas por la Federación para el efecto.

Artículo 220.- Para fijar el monto de la dotación en tierras de cultivo o cultivables, se calculará la extensión que debe afectarse, tomando en cuenta no sólo el número de los peticionarios que iniciaron el expediente respectivo, sino el de los que en el momento de realizarse la dotación, tengan derecho a recibir una unidad de la misma.

(...)”

Luego, de la interpretación gramatical de los preceptos legales antes transcritos, conducen a establecer que aún cuando llegara a demostrarse que alguno de los campesinos solicitantes de tierras haya tenido el carácter de aparcerero, dicha calidad de manera alguna constituye un obstáculo legal que les impidiera a tales campesinos, ser parte integrante de los solicitantes de tierras, concretamente en cuanto a la acción agraria de ampliación de ejido que nos ocupa.

Finalmente, no se omite manifestar que el mismo propietario también aportó al sumario, diversos documentos privados en original y fotocopia simple, con la misma finalidad de desvirtuar los requisitos de capacidad agraria de los solicitantes de tierra, consistentes en diversas relaciones de nombres de personas quienes de quienes se expresa en el texto, son jornaleros de la hacienda de “Puroagua”, Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato; en esos documentos también consta la relación de diversas cifras, al parecer, cantidades de dinero, ya que no contienen el signo de pesos, al parecer cubiertas a esos campesinos, hecho que no queda demostrado con esa probanza; no obstante, se advierte que los nombres de las personas ahí enlistadas, no se relacionan con los nombres de los solicitantes de tierras; de ahí que se estime que tal probanza no se encuentra relacionada con los hechos que se pretenden demostrar.

De tal suerte que en el presente caso, ha quedado demostrado que la diligencia censal llevada a cabo el diez de julio de dos mil nueve, arrojó como resultado la existencia de un total de 47(cuarenta y siete) campesinos con capacidad en materia agraria, para recibir tierras, cuyos nombres son los siguientes:

1. Porfirio Barrera Hernández, 2. Roberto Castro Ledezma, 3. Tomás Aguilar García, 4. Luis Aguilar García, 5. Maximino Aguilar García, 6. Jovita Castro Heredia, 7. Refugio Castro Peñaloza, 8. Margarita Hernández Delgado, 9. Javier Castro Peñaloza, 10. Magdalena Castro Peñaloza, 11. Inés Alvarez Morales, 12. Eduardo Castro Alvarez, 13. Silvestre Martínez León, 14. Camerino Martínez Osornio, 15. Teodora Martínez Osornio. 16. Marcelina Martínez Osornio, 17. Carlota Martínez Osornio, 18. Francisco Martínez Osornio, 19. Lorenzo Castro Meléndez, 20. Carlos Jiménez Ortega, 21. Ricardo Jiménez Ortega, 22. María Guadalupe Hernández Camacho, 23. Agustín Guerrero Barrera, 24. Gabriel Castro Ruiz, 25. Alberto Barrera Pichardo. 26. Rafael Castro Rodríguez, 27. Román Barrera Dámaso, 28. Francisco Barrera Martínez, 29. 30. Abraham Martínez Rodríguez, 31. Abel Barrera Pichardo, 32. María Belén Barrera Onofre, 33. Donato Barrera Onofre, 34. María Esther Arreola Rosales, 35. María Cirila Onofre Garnica, 36. Cipriano Arreola Rosales, 43. Manuel Arreola Rosales, 37. Gonzalo Noguez, 38 J. Guadalupe Barrera, 39. Raúl Barrera Galindo, 40. Sabino Barrera Dámaso, 41. José Aguilar Rosales, 42. Emiliano Barrera Montoya, 43. Eusebio Pozos Martínez, 44. Marcelino Barrera Palomar, 45. Ignacio Valencia Ledezma, 46. Apolonio Valencia Castro, y 47. Jacobo Barrera Pichardo.

Por consiguiente, los citados campesinos deberán considerarse con capacidad en materia agraria, en la acción de ampliación de ejido que corresponde al juicio agrario 340/93, de que se trata.

SEPTIMO. En cuanto a los predios señalados como de probable afectación, para la acción de ampliación de ejido de que se trata, conviene traer a colación que del estudio y valoración de los trabajos técnicos informativos y complementarios desahogados durante la substanciación del procedimiento, así como de las demás constancias relativas y las pruebas que obran en autos, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, correlacionados con los artículos 167 y 189 de la Ley Agraria, para determinar su valor probatorio alcances, se desprende substancialmente lo siguiente:

Consta en autos el informe rendido por el comisionado ingeniero Ricardo Robles Torres, el once de agosto de mil novecientos sesenta y tres, del que se conoce que en su origen investigó un total ciento cincuenta y dos predios de propiedad particular, que se localizados dentro del radio de siete kilómetros del poblado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, de los que argumentó, se encuentran amparados con certificados de inafectabilidad agrícola, los que informó, se encontraron en posesión y usufructo de sus respectivos propietarios; por lo anterior, emitió su opinión en el sentido de que estos se encontraban en el supuesto previsto en los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ya que en la especie se trata de pequeñas propiedades inafectables.

Tales trabajos sirvieron de base a la Comisión Agraria Mixta, para la emisión de su dictamen de fecha once de mayo de mil novecientos sesenta y tres, en el que propuso negar la acción intentada, por falta de fincas afectables; en el mismo sentido se pronunció el Gobernador del Estado de Guanajuato, en su mandamiento emitido el veintinueve de junio de mil novecientos sesenta y cuatro, confirmando de esta manera el dictamen del citado cuerpo colegiado. Por su parte el Delegado Agrario en el Estado, formuló su estudio y opinión en el mismo tenor.

Posteriormente, en segunda instancia se ordenaron trabajos técnicos informativos complementarios tendientes a verificar la existencia de fincas afectables para la acción agraria que nos ocupa relativa a la ampliación de ejido; al respecto, por oficio número 4931 de treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y ocho, se ordenó al técnico agrario Jesús Julián Centeno Zalazar, la investigación de los predios señalados como de posible afectación, para verificar la posible existencia de un fraccionamiento simulado en cuanto a los predios denominados "El Hospital", "Potrero del Bordo", "El Caserío", "El Varal", "El Sauz" y "El Potrerillo", quien rindió su informe el veintiuno de octubre del año en cita, consignado que algunos de los predios investigados se encontraron en posesión de diversos aparceros desde hace varios años, siendo el caso del predio "El Varal", propiedad de la sucesión Miguel Gómez de Parada, que consta de una superficie de 324-70-00 (trescientas veinticuatro hectáreas, setenta áreas), siendo su calidad de terrenos cerriles y 95-88-00 (noventa y cinco hectáreas, ochenta y ocho áreas) de temporal, de la cual los aparceros detentan la posesión de una fracción de tales terrenos.

El mismo comisionado en su informe señaló que existe una situación tensa respecto de los terrenos investigados, argumentando que los solicitantes de tierras se encuentran en posesión de una superficie aproximada de 272-00-00 (doscientas setenta y dos hectáreas), proveniente de diversas fracciones de los predios denominados "Potrero del Sauz", "El Potrerillo" y "El Hospital", cuya posesión deriva del acta de posesión y deslinde de fecha dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho, suscrita por el Presidente de la Comisión Agraria Mixta, en aquél entonces.

Siguiendo este orden de ideas, con fecha seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, la Dirección General de Tenencia de la Tierra, ordenó trabajos técnicos informativos complementarios a los ingenieros Gerardo Ramos España, Jorge Mesa Rivadeneyra, así como el licenciado Jesús Rodríguez Bustillos, en los predios antes señalados, tendientes a comprobar si efectivamente los campesinos solicitantes de tierras a través de contratos de aparcería, se encontraban en posesión de diversas fracciones de terreno provenientes de terrenos señalados.

Los comisionados rindieron su informe el veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y nueve, en el que consignan que efectuaron la inspección ocular y recorrido de los predios denominados "Potrero del Bordo", "El Hospital", "El Potrerillo", "El Sauz" y "El Varal", expresando que estos se encontraron en posesión de sesenta y cinco campesinos que detentan diversas superficies que van de 1-00-0 (una hectárea) la menor y 8-00-00 (ocho hectáreas) la mayor, conformando una superficie de 252-65-57 (doscientas cincuenta y dos hectáreas, sesenta y cinco áreas, cincuenta y siete centiáreas), de acuerdo a su levantamiento topográfico efectuado el trece de agosto de mil novecientos setenta y nueve, por el comisionado ingeniero Roberto Rubio Ayón.

Por acuerdo de cuatro de agosto de mil novecientos ochenta, el Cuerpo Consultivo Agrario solicitó a la Dirección General de Tenencia de la Tierra, que por conducto de la Subdirección de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria, con fundamento en los artículos 418 y 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria, iniciara el procedimiento tendiente a dejar sin efectos jurídicos los acuerdos de inafectabilidad, que protegen a los predios investigados, así como la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola que los protegen, siendo los siguientes:

Números 97593, 91507, 97594 y 107731, respectivamente, expedidos a favor de Javiera Gómez de Parada, José Ramírez Ortiz, Miguel Gómez de Parada y Magdalena Orvañanos de Quijano, según acuerdos presidenciales de veintitrés de abril, trece de febrero y siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre, veintinueve de octubre y trece de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, y catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, que amparan la fracción del lote 3, fracción 2, fracción del lote 1 y fracción 3, respectivamente, provenientes de la

“Exhacienda de Puroagua”, ubicadas en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con superficies de 150-96-66 (ciento cincuenta hectáreas, noventa y seis áreas, sesenta y seis centiáreas), 157-36-00 (ciento cincuenta y siete hectáreas, treinta y seis áreas), 324-70-00 (trescientas veinticuatro hectáreas, setenta áreas) y 92-63-33 (noventa y dos hectáreas, sesenta y tres áreas, treinta y tres centiáreas) de terrenos de agostadero y temporal, actual propiedad de Javiera Gómez de Parada; Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández; Guadalupe Perea Linares y Magdalena Orvañanos de Quijano.

Lo anterior, por haberse considerado que los predios señalados, se dejaron de explotar por más de dos años consecutivos por parte de sus propietarios, sin causa justificada, de acuerdo con los diversos trabajos técnicos informativos realizados, terrenos que se dijo, se encontraban ocupados por diversos aparceros contratados por sus propietarios, hecho que no quedó acreditado, puesto que de su inspección ocular, estos se encontraron en posesión de diversos campesinos solicitantes de tierras.

Por el motivo anterior, la Dirección General de Tenencia de la Tierra, por conducto de la Dirección de Inafectabilidad Agrícola Ganadera y Agropecuaria, instauró el procedimiento de nulidad de los acuerdos de inafectabilidad que protegen a los predios señalados, así como la cancelación de los certificados respectivos; ordenándose la notificación correspondiente a los propietarios, mediante los oficios y edictos que corren agregados a fojas 40 a la 78 y 168 a la 171 del legajo número XIV del expediente de que se trata.

Consta en autos que al procedimiento referido, comparecieron los diversos propietarios Luis y Magdalena Orvañanos, Lorenza Braniff y Rosa del Carmen de León Mendoza, respectivamente, mediante escrito de diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y uno, ofreciendo pruebas y formulando sus alegatos respectivos, tendientes a desvirtuar la causal de afectación que se le atribuyó a sus predios rústicos.

El procedimiento relativo culminó con el dictamen emitido el treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y uno, por la Dirección General de Tenencia de la Tierra, a través de la Subdirección de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria, en el que se propuso la nulidad de los acuerdos de Inafectabilidad agrícola, así como la cancelación de los certificados de Inafectabilidad derivados de aquellos, siendo los siguientes:

Número 97594, expedido mediante acuerdo presidencial de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre del mismo año, que ampara la fracción del lote 1, de la exhacienda de “Puroagua”, con superficie de 324-70-00 (trescientas veinticuatro hectáreas, setenta áreas), expedido a favor de Miguel Gómez de Parada, propiedad actual de J. Guadalupe Perea Linares.

Número 97593, expedido a favor de Javiera Gómez de Parada, mediante Acuerdo Presidencial de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre del mismo año, que ampara la fracción del lote III de la “Exhacienda de Puroagua” con superficie de 150-96-66 (ciento cincuenta hectáreas, noventa y seis áreas, sesenta y seis centiáreas).

La nulidad y cancelación parcial de los acuerdos y certificados de inafectabilidad agrícola números 107731 y 91507 expedidos a favor de Magdalena Orvañanos de Quijano y José Ramírez Ortiz, respectivamente, conforme a los Acuerdos Presidenciales de siete de mayo y trece de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres y veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, que amparan las fracciones III y II de la “Exhacienda de Puroagua”, el primero en la parte correspondiente a Magdalena Orvañanos de Quijano cuya superficie es de 88-47-30 (ochenta y ocho hectáreas, cuarenta y siete áreas, treinta centiáreas) y el segundo en la parte correspondiente a Jorge Hernández Muñoz, Roberto Rivera Padilla, Teodoro García Hernández, Rosa del Carmen de León M. de Orvañanos y Lorenza Braniff de Gómez Parada así como Salvador Hernández Muñoz.

Se hace hincapié que en cuanto al procedimiento de nulidad y cancelación antes referido, consta en autos que al mismo comparecieron los diversos propietarios, ofreciendo diversas pruebas a las que se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, como son escrituras públicas de propiedad con las que acreditan ser propietarios de su lotes de terreno, el tiempo en que los adquirieron y el interés jurídico; contratos de aparcería celebrados en distintas fechas del año de mil novecientos setenta y siete en Jerécuaro, Guanajuato, entre los propietarios y diversos aparceros; sin embargo, del análisis de los nombres de tales personas, que se dijo son aparceros, confrontados con los nombres de los campesinos solicitantes de tierras que se encontraron en posesión de las diversas fracciones de terreno que se estudian, se advierte claramente que no se trata de las mismas personas.

También ofrecieron fotocopias simples de manifestaciones anuales, relativas al pago del impuesto al ingreso global de las empresas, correspondientes al giro agrícola, con las que acreditan tal hecho; fotocopias de oficios de veinticuatro de enero y diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y nueve, el primero signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato y el segundo, signado por el Agente del Ministerio Público de Acámbaro, Guanajuato, relacionadas con la causa penal número 199/978, de la que se conoce que se dictó sentencia absolutoria en contra de diversos campesinos solicitantes de tierras, por no haberse comprobado el delito de despojo, denunciado por los diversos propietarios de predios provenientes de la exhacienda de "Puroagua", misma que fue confirmada en segunda instancia, en el toca número 244/980, mediante resolución de dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guanajuato, en la que se absuelve a Gaspar Martínez Rodríguez, Roberto Martínez Rodríguez, Román Barrera Damaso, Demetrio Olvera Padilla, Raúl Barrera Galindo y Alberto Barrera Chávez, de la acusación que les hizo, ya que no se demostró el delito de despojo en perjuicio de Lorenza Braniff de Gómez de Parada, Ignacio Orvañanos y Gómez de Parada, Magdalena Orvañanos de Quijano y Rosa del Carmen de León Orvañanos.

Al respecto, no pasa desapercibido que los campesinos sujetos a la causa penal señalada de nombres Román Barrera Damaso y Raúl Barrera Galindo, aparecen en el último censo levantado el diez de junio de dos mil nueve, tendiente a comprobar su capacidad en materia agraria, cuyos nombres se relacionan con los números 33 y 46 respectivamente.

Los propietarios también ofrecieron dentro del procedimiento de nulidad y cancelación, las documentales relativas a las certificaciones expedidas por el Presidente Municipal de Puroagua, en las que hace constar la explotación ininterrumpida de los predios por parte de sus propietarios, prueba esta que desde luego carece de eficacia probatoria suficiente, para acreditar la explotación ininterrumpida en materia agraria, toda vez que se trata de una certificación expedida por autoridad que les es ajena a sus funciones; lo anterior tiene como sustento la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el apéndice de mil novecientos ochenta y cinco, tercera parte, página 288, del rubro y texto siguiente:

"POSESION, PRUEBA DE LA. LA CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL CARECE DE VALOR. La certificación de un Presidente Municipal en que hace constar que una persona se encuentra en posesión de determinado predio, no es prueba idónea para demostrar la citada posesión, por ser esto una cuestión de todo ajena a sus funciones".

Luego entonces, por lo que se refiere a las manifestaciones vertidas por los propietarios en el procedimiento de nulidad y cancelación, en cuyos alegatos se duelen de que la causa que les impidió la explotación personal de sus predios, fue debido a los despojos de que fueron víctimas a partir del año de mil novecientos setenta y ocho, por parte de sus aparceros, argumentando que éstos se posesionaron ilegalmente de sus predios impidiéndoles dicha explotación, quedaron desvirtuados al resolverse la causa penal número 199/978, antes señalada, así como los trabajos técnicos informativos complementarios llevado a cabo el trece de agosto de mil novecientos setenta y nueve y veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta, al haberse demostrado que tales terrenos se encuentran trabajados por campesinos solicitantes de tierras, de los que no se demostró tener la calidad de aparceros contratados por los propietarios de los predios; por lo anterior se adujo que tal causa de traduce en una in explotación por parte de tales propietarios.

Tales antecedentes sirvieron de apoyo a este Tribunal Superior Agrario, al dictar su sentencia el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la que se declaró procedente la acción agraria intentada relativa a la ampliación de ejido, concediendo en la vía de ampliación de ejido una superficie total de 661-62-96 (seiscientos sesenta y una hectáreas, sesenta y dos áreas, noventa y seis centiáreas, que se tomaron de la forma siguiente:

132-64-87 (ciento treinta y dos hectáreas, sesenta y cuatro áreas, ochenta y siete centiáreas) correspondientes a la fracción del lote número 3 de la 'Ex-hacienda de Puroagua', propiedad de Javiera Gómez de Parada.

155-37-36 (ciento cincuenta y cinco hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y seis centiáreas) correspondientes a la fracción 2 de la 'Ex-hacienda de Puroagua', propiedad de Lorenza Braniff Lascrain de Gómez de Parada, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández.

321-74-50 (trescientas veintiuna hectáreas, setenta y cuatro áreas, cincuenta centiáreas) correspondientes a la fracción del lote número 1 de la 'Ex-hacienda de Puroagua', propiedad de Guadalupe Perea Linares: y

51-86-23 (cincuenta y una hectáreas, ochenta y seis áreas, veintitrés centiáreas) correspondientes a la fracción del lote número III de la 'Ex-hacienda de Puroagua', propiedad de Magdalena Orvañanos de Quijano, ubicadas en el Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, respectivamente.

Habiéndose afectado las precitadas fracciones de terreno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria interpretado en sentido contrario, por haberse considerado que los propietarios no desvirtuaron la causal de afectación atribuida a sus predios, como lo es la in explotación de sus predios por más de dos años consecutivos, puesto que no acreditaron la causa de fuerza mayor que les haya impedido transitoriamente su explotación, haya sido en forma parcial o total.

En correlación con lo anterior, cabe señalar que previo a la afectación de los predios referidos se dejaron parcialmente sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad expedidos el veintitrés de abril, trece de febrero, veintitrés de abril y siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre, veintinueve de octubre y trece de noviembre del mismo año, y catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, de los cuales derivan los certificados de inafectabilidad agrícola números 97593, 91507, 97594 y 107731; y que como consecuencia de lo anterior, también fueron cancelados parcialmente.

En este orden de ideas, a la postre, la sentencia referida, se dejó insubsistente con motivo de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo D.A. 1945/99, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, promovida por Magdalena Orvañanos de Quijano y otros, en su carácter de propietarios de los predios afectados en dicha resolución, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, para el efecto de que este Tribunal Superior, dejara insubsistente la sentencia reclamada, y dictara las ordenes necesarias para poner a la vista de los quejosos las diligencias censales de los solicitantes de tierras, elaboradas el seis de julio de mil novecientos sesenta y uno y el veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente, y para que se repusiera el acta de inspección ocular de los terrenos afectados, que dieron origen a las actas dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho, nueve y doce de junio de mil novecientos ochenta, hecho lo cual, dicte la resolución que en derecho corresponda.

En estricto cumplimiento de la ejecutoria de merito, mediante acuerdo para mejor proveer de dieciocho de mayo de dos mil, el Magistrado instructor ordenó poner a la vista de los propietarios amparistas, las diligencias censales de las fechas que se indican; también ordenó girar despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, para que en auxilio de la labores de este órgano jurisdiccional, comisionara la brigada de ejecuciones adscrita al citado Tribunal a fin de que se avocara a la realización de los trabajos técnicos informativos a que se refiere el artículo 286, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los predios propiedad de los quejosos, provenientes de las diversas fracciones de terreno, provenientes de los lotes I, II y III de la "Exhacienda de Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato; precisándose que tales trabajos previamente a su desahogo, debían ser notificados a los propietarios señalados, así como al Comité Particular Ejecutivo del poblado solicitante de tierras, para que comparecieran a deducir sus derechos, a fin de no dejarlos inauditos en la substanciación del juicio agrario de que se trata.

En ese tenor, una vez desahogados los trabajos técnicos aludidos, tendientes a la localización de los terrenos propuestos como afectables, se remitieron a este Organismo Jurisdiccional, los que se tuvieron por recibidos por auto de trece de octubre de dos mil, acordándose que tal documentación sería analizada para determinar si se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en el referido proveído.

Respecto a los trabajos que se indican, a estos se anexaron las notificaciones dirigidas a los propietarios de los predios sujetos a investigación, de ocho y nueve de junio, y de cinco de septiembre de dos mil, en la primera y tercera consta la notificación a Magdalena Orvañanos de Quijano y otros, y en la segunda la notificación dirigida a Miguel Caballero Jiménez; el acta relativa a la inspección ocular de siete de Septiembre del mismo año, relativa a los predios inspeccionados, así como el plano informativo levantado, construido en papel milimétrico, en el que se identifican y describen las superficies de que constan las fracciones I, II y III de la "Exhacienda de Puroagua", que defienden los quejosos, en el que se contienen las carteras de campo, cuadro de construcción, etcétera; en cuanto al estudio y valoración de tales medios de prueba, que se efectúa conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en correlación con el artículo 189 de la Ley Agraria, su contenido genera valor convictivo para tener por acreditados los hechos siguientes:

Por cuanto toca a la inspección ocular de las fracciones de terreno que se indican, consta en autos el acta circunstanciada elaborada el siete de septiembre de dos mil, por los comisionados para su desahogo, que integran la Brigada de Ejecución de Resoluciones, adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en la Ciudad y Estado de Guanajuato, constituida por el licenciado Carlos Ruiz Becerra, en su calidad de actuario, y el ingeniero Miguel Angel A. Regalado Acuña, en su carácter de perito topógrafo, siendo importante transcribir textualmente en la parte que interesa su contenido, para una mayor ilustración, en la forma siguiente:

"1.- INICIAMOS EL RECORRIDO DE LA 'FRACCION LOTE III DE LA EXHACIENDA DE PUROAGUA', PROPIEDAD DE JAVIERA GOMEZ DE PARADA, CON SUPERFICIE DE 132-64-87 HAS.; ESTE PREDIO SE ENCUENTRA PARCIALMENTE EN POSESION DEL GRUPO SOLICITANTE, TENIENDO UNA SUPERFICIE EN POSESION DE

129-79-00 HAS., YA QUE DENTRO DE ESTA FRACCION SE ENCUENTRA GERARDO BELTRAN CON UNA PROPIEDAD DE 2-85-87 HAS., DENTRO DE ESTA SUPERFICIE SE ENCUENTRA UNA CONSTRUCCION; LA SUPERFICIE QUE ESTA EN POSESION EL GRUPO SOLICITANTE ESTA SEMBRADA DE MAIZ BLANCO, DIVIDIDO INTERNAMENTE POR CALLEJONES, DELIMITADO: EN SU COLINDANCIA NORTE, CON ARROYO LA ESTANCIA; EN SU COLINDANCIA SUR, CON DIVERSOS PROPIETARIOS; EN SU COLINDANCIA ORIENTE, CON ZONA URBANA DE PUROAGUA; EN SU COLINDANCIA PONIENTE, CON FRACCION LOTE 3, SUPERFICIE DE TEMPORAL EN SU TOTALIDAD, SIENDO EL GRUPO DE SOLICITANTES QUIEN EXPLOTA EL PREDIO.

2.- INICIAMOS EL RECORRIDO DE LA 'FRACCION II DE LA EXHACIENDA DE PUROAGUA', PROPIEDAD DE LORENZA Braniff LASCURAIN DE GOMEZ DE PARADA Y OTROS, CON SUPERFICIE DE 155-37-36 HAS.; DENTRO DE ESTE PREDIO SE ENCUENTRAN CATORCE PROPIETARIOS:

PRISCILIANO BARRERA CON 1-90-43 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

ANTONIO BARRERA CON 3-75-14 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

MARCELINO CARRILLO CON 0-49-17 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

JOSE JIMENEZ CON 2-46-84 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

GREGORIO JIMENEZ CON 1-47-09 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

PLACIDO CASTRO CON 7-14-54 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

MARCELINO CARRILLO CON 1-47-89 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

ABEL GARNICA CON 2-99-00 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

PLACIDO CASTRO CON 1-98-22 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

GREGORIO JIMENEZ CON 2-83-77 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

JESUS CASTRO CON 2-68-72 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

ROBERTO RIVERA CON 4-93-19 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

SALVADOR HERNANDEZ CON 23-79-20 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

ANTONIO CARREON CON 2-93-00 HAS., SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO.

EN TOTAL DE SUMA, LA SUPERFICIE QUE TIENEN LOS PROPIETARIOS EN POSESION ES DE 60-86-20 HAS., TODA LA SUPERFICIE ES DE TEMPORAL, TODOS LOS TERRENOS DE LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN BIEN DELIMITADOS CON CALLEJONES Y CAMINOS VECINALES, OCUPANDO UNA SUPERFICIE DE 94-51-16 HAS., LOS SOLICITANTES, SIENDO ESTA SUPERFICIE LA RESTANTE DE LA FRACCION QUE NOS OCUPA, SE DELIMITA ESTA FRACCION II DE LA SIGUIENTE MANERA:

NORTE.- ARROYO EL GUAYABO

SUR.- ARROYO LA ESTANCIA

ORIENTE.- CON ZONA URBANA DE PUROAGUA

PONIENTE.- CON PEQUEÑAS PROPIEDADES DE PUROAGUA

3.- INICIAMOS EL RECORRIDO DE LA 'FRACCION LOTE I DE LA EXHACIENDA DE PUROAGUA', PROPIEDAD DE J. GUADALUPE PEREA, CON SUPERFICIE DE 321-74-50 HAS.; DE ESTA SUPERFICIE EL C. NOEL MARTINEZ HERNANDEZ TIENE EN POSESION UNA EXTENSION DE TERRENO DE 93-67-29 HAS., DELIMITADA CON CERCA DE POSTES DE MADERA DE LA REGION Y ALAMBRE DE PUAS DE CUATRO HILOS, TERRENOS DE TEMPORAL QUE SE ENCONTRARON SIN SEMBRAR, ENCONTRANDOSE DENTRO DE ESTE PREDIO DOS BODEGAS, CORRALES PARA GANADO MAYOR, SE DELIMITA ESTA PROPIEDAD DE LA SIGUIENTE MANERA, AL NORTE CON ARROYO EL VARAL; AL SUR CON ARROYO EL GUAYABO; AL ORIENTE CON CAMINO DE TERRACERIA; AL PONIENTE CON EL BORDO EL VARAL; EN UNA EXTENSION DE 129-93-94 HAS., DE ESTA FRACCION SON TERRENOS DE AGOSTADERO, EN LA CUAL TANTO LOS PROPIETARIOS, SOLICITANTES Y PERSONAS DEL POBLADO DE PUROAGUA PASTAN SU GANADO; LA SUPERFICIE QUE RESTA DE ESTA FRACCION 98-13-27 HAS., SE ENCUENTRA EN POSESION DEL GRUPO SOLICITANTE, TENIENDO 129-79-00 HAS., LA SUPERFICIE EN POSESION EL GRUPO SOLICITANTE ESTA SEMBRADA DE MAIZ BLANCO, DIVIDIDO INTERNAMENTE POR CALLEJONES, DELIMITADO: EN SU COLINDANCIA NORTE, TERRENOS DEL EJIDO SANTA ISABEL; EN SU COLINDANCIA SUR, CON ARROYO SECO; EN SU COLINDANCIA ORIENTE, CON TERRENOS DEL MISMO PREDIO; EN SU COLINDANCIA PONIENTE, CON TERRENOS DEL EJIDO SANTA ISABEL; SUPERFICIE DE TEMPORAL Y AGOSTADERO CERRIL, SIENDO EL GRUPO DE SOLICITANTES QUIEN EXPLOTA EL PREDIO, DENTRO DE ESTA SUPERFICIE SE ENCUENTRA UN BORDO DENOMINADO EL VARAL EL CUAL LO TIENEN EN POSESION Y HACER USO DEL AGUA QUE SE RETIENE EN EL MISMO.

4.- INICIAMOS EL RECORRIDO DE LA 'FRACCION III DE LA EXHACIENDA DE PUROAGUA', PROPIEDAD DE MAGDALENA ORVAÑANOS DE QUIJANO, CON SUPERFICIE DE 51-56-23 HAS.; ESTE PREDIO SE ENCUENTRA TOTALMENTE EN POSESION DEL GRUPO SOLICITANTE; LA SUPERFICIE QUE ESTA EN POSESION EL GRUPO SOLICITANTE ESTA SEMBRADA DE MAIZ BLANCO, DIVIDIDO INTERNAMENTE POR CALLEJONES, DELIMITADO; EN SU COLINDANCIA NORTE, CON TERRENOS DEL EJIDO PUROAGUITA; EN SU COLINDANCIA SUR, CON DIVERSOS PROPIETARIOS DE PUROAGUITA; EN SU COLINDANCIA ORIENTE, CON TERRENOS EN POSESION DEL MISMO GRUPO SOLICITANTE; EN SU COLINDANCIA PONIENTE, CON TERRENOS DEL EJIDO PUROAGUITA, SUPERFICIE DE TEMPORAL EN SU TOTALIDAD, SIENDO EL GRUPO DE SOLICITANTES QUIEN EXPLOTA EL PREDIO. SE ACLARA QUE LOS SOLICITANTES DETENTAN LA POSESION DE LOS TERRENOS MENCIONADOS EN LAS FRACCIONES, DESDE EL AÑO DE 1980; SE ACLARA QUE LAS PERSONAS QUE SE OSTENTARON COMO PROPIETARIOS DURANTE LOS TRABAJOS NINGUNO PRESENTO DOCUMENTACION QUE LOS ACREDITARA COMO TALES, AUN DE REQUERIRSELES, MANIFIESTANDO QUE LA PRESENTARIAN EN SU MOMENTO, DURANTE EL PROCESO, SE ANEXA PLANO INFORMATIVO ESCALA 1:1000, CON CARTERAS DE CAMPO CUADRO DE CONSTRUCCION CALCULO DE LA ORIENTACION ASTRONOMICA; CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO DAMOS POR CUMPLIMENTADA LA COMISION CONFERIDA."

Firmaron para constancia el licenciado Carlos Ruíz Becerra, en su carácter de actuario ejecutor, y el ingeniero Miguel Angel Regalado Acuña, como perito en materia de topografía.

En relación a lo anterior, aun cuando ya quedó precisado en párrafos precedentes, que los propietarios de los predios aludidos quedaron debidamente notificados sobre las diligencias y trabajos ordenados, para el efecto de que sí así lo estimaran conveniente concurrieran a su desahogo; sin embargo, también quedó probado que ellos no comparecieron a su desahogo, ya que únicamente consta en autos el escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil, suscrito por Magdalena Orvañanos de Quijano, por su propio derecho; Jaime Arrangoiz Orvañanos, en representación de Guadalupe Orvañanos de Arrangoiz; María del Socorro Gómez de Parada Braniff de Espíndola, como heredera de Lorenza Braniff de Gómez de Parada, y como apoderada general de Lorenza Gómez de Parada Braniff de Prevoisin, Miguel Gómez de Parada Braniff; Rosa del Carmen de León Mendoza de Orvañanos, Jorge Hernández Muñoz, Roberto Rivera Padilla, causahabiente de los bienes de la extinta Lorenza Braniff de Gómez de Parada, mediante el cual formulan sus alegatos correspondientes, y anuncian las pruebas de su intención; teniéndose por admitidos sus alegatos, mediante proveído de veintitrés del mismo mes y año: en cuanto a las pruebas documentales que refirieron, se resalta, se acordó que no había lugar acordar su admisión y posterior desahogo, ya que no fueron exhibidas por los oferentes en el escrito presentado.

En cuanto a los alegatos formulados, manifestaron en relación con el acuerdo para mejor proveer que emitió el Magistrado instructor con fecha dieciocho de mayo de dos mil, que éste les fue notificado en tiempo y forma, mediante el cual el Tribunal Superior pretende dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio de amparo número D.A. 1945/99, que les concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el juicio agrario número 340/93.

Argumentan que en relación a la histórica tramitación agraria que comprende desde la solicitud de ampliación de ejido, trabajos censales, trabajos técnicos informativos, dictámenes, mandamientos y opiniones, que desde luego no se les dio la oportunidad procesal de cuestionar y desvirtuar con pruebas lo asentado por diversos comisionados que participaron en las diversas etapas, ya que para desvirtuar cualquier intento de afectar sus predios correspondientes a las fracciones I, II y III de la "Exhacienda de Puroagua", hasta el trece de junio de mil novecientos treinta y ocho, fecha en que Manuel Jáquez Mandujo y Ricardo Robles Torres, que fueran comisionados por las autoridades agrarias, asentaron en sus informes respectivos, que los predios se estaban explotando por aparceros, como se puede apreciar en el texto de dicho informe que obra en la página 11 de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado; que en el informe rendido el seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, por el comisionado Cirenio Torres, se asentó que los campesinos solicitantes y aparceros estaban en posesión y explotaban 272-00-00 (doscientas setenta y dos hectáreas) más 24-64-57 (veinticuatro hectáreas, sesenta y cuatro áreas, cincuenta y siete centiáreas), por lo que en esas fechas sus predios se encontraban en explotación, por lo que no incurrían en violación a lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por lo que en la especie dejarían razonablemente probado que si bien es cierto no explotaban la totalidad de sus inmuebles, que contienen los precitados trabajos técnicos, se advierte que se encontraban trabajados por aparceros y campesinos solicitantes, lo que a todas luces demuestra la causa de fuerza mayor que les impedía trabajar la totalidad de los mismos, sin dejar de reconocer ni una parte de los terrenos la trabajaban los aparceros y otra los campesinos que se mencionan; de ahí que se acredite la causa de fuerza mayor que les impedía trabajar la totalidad de sus terrenos; por lo que los trabajos técnicos que se practicaron con posterioridad a las fechas mencionadas, e incluso los que se practicaron recientemente, sin duda, sus predios se encontraron en las mismas condiciones, razón por la cual no han logrado hasta la fecha explotar sus terrenos en su totalidad.

También refieren que hasta ese momento, existen aparceros y solicitantes de tierras que fueron introducidos a sus terrenos den virtud de un mandamiento gubernamental emitido en el año de mil novecientos treinta y ocho. Los propietarios resumen todo lo anterior, concluyendo que no han incurrido en ninguna causal de afectación previstas por la Ley Federal de Reforma Agraria, ni en el artículo 27 Constitucional, agregando que la superficie de sus predios estaban ocupadas por campesinos solicitantes de tierras y por cuarenta y seis aparceros, respecto de los cuales anexaban cuarenta y seis contratos de aparcería, que celebraron con duración de cinco años, señalando sus nombres.

Respecto de los citados alegatos, se concluye que los mismos no son suficientes para desvirtuar la causal de afectación que se les impuso a sus predios, pues como ya quedó precisado en párrafos precedentes, los propietarios no aportaron ningún medio de prueba tendiente a desvirtuar la falta de explotación de sus predios; además, como ya se dijo, tampoco concurren al desahogo de la inspección ocular, y estar en aptitud de objetar dicha probanza.

Ahora bien, del análisis y valoración de dicha inspección ocular, se advierte que su resultado fue contrario a los intereses de los propietarios referidos, puesto que la brigada de ejecución adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en la Ciudad de Guanajuato, de la misma entidad federativa, en el acta circunstanciada levantada el siete de septiembre de dos mil, la que de acuerdo con su contenido, se desprende que los comisionados fueron categóricos en expresar quienes detentaban la posesión de los terrenos investigados, las condiciones en que se observaron al momento de ser inspeccionados, el uso a que se destinan y quienes los explotan, inclusive, se menciona a un número de catorce propietarios quienes detentan en propiedad diversas fracciones de terreno, quienes se aprecia son distintos a los propietarios quejosos en el juicio de amparo número D.A. 1945/99, a quienes se les concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, tal es el caso de los diversos lotes provenientes de la "Fracción II, de la "Exhacienda de Puroagua", propiedad de Lorenza Braniff de Lascurain de Gómez de Parada, y fracción del Lote 1", propiedad de Guadalupe Perea Linares, razón por la cual y por ser ajenos al núcleo solicitante de tierras, dichas superficies de terrenos deberán excluirse de la presente afectación.

De tal suerte que ante la ausencia de las pruebas anunciadas por los citados propietarios en su escrito de dieciocho de octubre de dos mil, en el proveído de veintitrés del mismo mes y año, se acordó que no había lugar a su admisión, en virtud de que no fueron presentadas por los oferentes en su escrito de cuenta; de ahí que los propietarios no hayan logrado desvirtuar la falta de explotación de sus predios por causa de fuerza mayor; por consiguiente, con apoyo en estos últimos trabajos técnicos informativos que se precisan, este Organismo Jurisdiccional emitió sentencia definitiva en el juicio agrario que nos ocupa, el seis de marzo de dos mil uno, declarando afectables diversas fracciones de los terrenos investigados, para fincar en éstos la ampliación de ejido del poblado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato.

En este punto, es importante destacar, que los propietarios de los predios afectados, promovieron demanda de amparo en contra la referida sentencia, de la que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número D.A.-1881/2001, que se resolvió mediante ejecutoria de trece de noviembre de dos mil dos, en la que en su primer punto resolutive, sobreseyó el juicio en cuanto a Miguel Caballero Jiménez, como causahabiente de Guadalupe Perea Linares, María del Socorro Gómez de Parada Braniff de Espíndola, como heredera de Lorenza Braniff de Gómez de Parada y como apoderada general de Lorenza Gómez de Parada Braniff de Prevoisin y Miguel Gómez de Parada Braniff.

En el segundo punto resolutive de la ejecutoria señalada, el Tribunal federal resolvió en el sentido de que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Magdalena Orvañanos de Quijano, por su propio derecho, Jaime Arrangoiz Orvañanos, en representación de Guadalupe Orvañanos de Arrangoiz; Rosa del Carmen de León Mendoza de Orvañanos, Jorge Hernández Muñoz y Roberto Rivera Padilla, causahabientes de los bienes de la extinta Lorenza Braniff de Gómez de Parada.

En la parte considerativa de la ejecutoria de mérito, se funda y motiva la negativa de la protección constitucional al determinarse lo siguiente:

"... como puede verse de la transcripción anterior, y contrario a lo aducido por los quejosos, sí quedó probado en autos que los predios que defienden se encontraban inexplorados, además de que contrario a lo aseverado el tribunal responsable sí funda y motiva la causa de afectación, sin que se haya demostrado durante la secuela del procedimiento, que por causa de fuerza mayor se les impidió la explotación de sus predios, con las pruebas que aportaron para acreditar que fueron despojados por sus aparceros resultaron inconducentes para tal fin, pues no se acreditó fehacientemente el delito de despojo por parte de los hoy terceros perjudicados.

En virtud de todo lo antes expuesto y toda vez que los quejosos no desvirtuaron la legalidad de la sentencia reclamada, debe decirse que el Cuarto y último concepto de violación, en el que alegan: que les causa agravio la sentencia impugnada, ya que no se debieron dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales por los cuales les expedieron sus certificados agrícola, en virtud de que nunca habían dejado de

usufructuar por más de dos años consecutivos los terrenos que defienden y si eso se ha llevado a cabo es por causa de fuerza mayor, ya que los campesinos levantaron la posesión de las mismas ilícitamente; deviene ineficaces sus manifestaciones, pues las mismas son la reiteración de sus conceptos de violación analizados y que fueron desestimados.

En ese orden de ideas, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados, negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señaladas como responsables Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en Guanajuato, Guanajuato, actuario ejecutor y perito topógrafo, adscritos al citado tribunal...”

No debe perderse de vista, que la sentencia emitida por este Tribunal Superior Agrario el seis de marzo de dos mil uno, que si bien, también fue materia de impugnación por parte de un grupo de campesinos solicitantes de tierras, de la que se duelen, por no haber sido incluidos como campesinos beneficiados en la acción de ampliación de ejido que se declaró procedente en dicho fallo, aun cuando, afirman, acreditaron su capacidad agraria en el censo levantado durante la substanciación del procedimiento agrario; de este juicio de amparo registrado con el número D.A. 174/2003, conoció el mismo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señalado en el párrafo, resolviéndose mediante ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil tres, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a Camerino Martínez Osorio y otros, para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada, a fin de que se verificara la capacidad agraria de los quejosos; para que se valorara el informe rendido por el comisionado agrario Roberto Hernández Luna, en el caso de existir, relacionada con dicha capacidad agraria.

Se hace hincapié de que tales aspectos, referentes al tema de la diligencia censal, teniendo a verificar si los campesinos solicitantes de tierras, acreditaban los requisitos de capacidad agraria, conforme a lo dispuesto por los artículos 197, Fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, fueron motivo de profuso estudio y valoración en el considerando sexto de la presente sentencia.

Por otra parte, en relación con los juicios de amparo que promovieron Miguel Caballero Jiménez y Plácido Castro Maya, quienes promovieron los juicios de amparo números 622/2004 y 478/2005, de los cuales conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, los que se resolvieron el ocho de febrero de dos mil cinco y el nueve de abril de dos mil ocho, respectivamente, en los que se concedió la protección constitucional a los citados quejosos, para el efecto de que no fueran privados de sus tierras sin haber sido previamente oídos y vencidos en el juicio agrario 340/1993, respecto de los predios que defienden, otorgándoles la garantía de audiencia, se ordenara la verificación censal de los solicitantes de tierras, dándoles intervención a los quejosos para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, incluso para que ofrecieran pruebas y alegatos de su intención, para que fueran tomados en consideración tanto en el proyecto de sentencia, como en la sentencia misma que dictara en su oportunidad este Tribunal Superior.

En cuanto al tema de la capacidad agraria de los solicitantes de tierras, se reitera que en párrafos que anteceden, la diligencia censal de los peticionarios, fue motivo de estudio y valoración, así como del pronunciamiento respectivo, en el considerando sexto de la presente sentencia; en la inteligencia de que para el desahogo de la diligencia respectiva, se les dio intervención a los quejosos, constando en autos la notificación personal dirigida a éstos.

Por cuanto toca a las pruebas ofrecidas por los quejosos señalados, éstos ofrecieron la prueba de inspección ocular y/o judicial de los predios que defienden como de su propiedad, tendiente a demostrar que los mismos se encuentran en posesión de sus propietarios y en explotación por parte de éstos.

En cuanto al análisis y valoración del acta circunstanciada relativa al desahogo de esta probanza, se desprende lo siguiente:

Que la inspección ocular del predio propiedad de Miguel Caballero Jiménez, se llevó a cabo el veintinueve de mayo de dos mil nueve, desprendiéndose de su contenido que los comisionados para su desahogo, son el licenciado José Alfredo Yáñez Sánchez, en su calidad de actuario, así como el ingeniero César Hernández Aranda, en su carácter de perito topógrafo, que integran la Brigada de Ejecución de Resoluciones, adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 11; que éstos se constituyeron en el predio motivo de inspección, identificado como lote 3 de la fracción I de la exhacienda de Puroagua, Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, estando presentes los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado solicitante, así como el propietario Miguel Caballero Jiménez, quienes fueron identificados a plenitud, procediendo a su recorrido e inspección ocular, del que expresaron textualmente lo siguiente:

“Acto Seguido se procede al desahogo de la prueba de inspección ocular y/o judicial para lo cual deberá levantar el acta circunstanciada respectiva en la que se haga constar las condiciones en la que se encuentran actualmente los lotes del terreno por investigar, debiendo señalar en su caso el uso a que se destinan tales

inmuebles, el tipo de explotación ya sea agrícola o ganadera o ambas, precisando en todo caso, el tipo de cultivo existentes, tipo de vegetación, si se destinan a la ganadería, el número de cabezas de ganado, el tipo de construcciones y demás obras existentes dentro de los predios, y si estos se encuentran delimitados, señalando sus superficies, medidas y colindancias para lo cual el ingeniero integrante de la brigada de ejecución de resoluciones deberá elaborar el levantamiento topográfico de tales terrenos y plasmarlo en el plano informativo correspondiente.

El suscrito actuario da fe que el lote 3 de la fracción I de la exhacienda de Puroagua, se encuentran en las siguientes condiciones: un 95% del terreno, se encuentra demostrado, emparejado y nivelado sin rastros de surcos, ni de sembradíos como puede ser frijol, maíz, sorgo, etc., su uso es de tipo agrícola (sólo por su lado oriente, se observa una pequeña cerca construida de postes de madera y cerca de piedra, no se observa ningún tipo de ganado, se observa una motoconformada tratando de nivelar terrenos.

Su tipo de explotación es agrícola, (se observa un 5% del terreno con monte como es nopal, huizache, mezquite, y maleza de la región), no se observa ningún tipo de ganado, se anexa croquis de localización, se menciona que es agrícola por que por el lado oriente se observan dos hectáreas aproximadamente de terreno barbechado y el resto del terreno se encuentra desmontado, emparejado y nivelado, dentro de este predio se encuentra un pozo sin funcionar; un cuarto de 4 x 3 metros, construido de tabicón, sin puerta (cuarto de máquinas), postes de luz, con transformador desconectado; por el lado Sur poniente, se observa un vaso de una presa sin agua; se encuentra delimitado por su lado oriente con 36 postes de fierro y de concreto, sin alambre de púas. Por su lado Norte se encuentra circulado con cerca de piedra de aproximadamente un metro de altura y de árboles de la región de diversa altura como lo es nopal, huizache, mezquite y palo bobo. Del lado Poniente, se encuentra circulado con la cortina de la presa, y por el lado sur no está destinado; respecto a la superficie, medidas y colindancias, se anexa plano topográfico con estos datos, la presa tiene un 5% de agua.

Manifiestan los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, que los trabajos realizados en este predio son recientes, y los postes son recientes los pusieron hace poco.

Manifiesta el C. Miguel Caballero que presentará 10 fotografías.”

Del contenido de la inspección ocular realizada en el predio propiedad de Plácido Castro Maya, de acuerdo con el contenido del acta circunstanciada levantada el veintinueve de mayo de dos mil nueve, se desprende textualmente lo siguiente:

“...Acto seguido se procede al desahogo de la prueba de inspección judicial y/o ocular para lo cual deberá levantarse el acta circunstanciada respectiva en la que se haga constar las condiciones en las que se encuentran actualmente los lotes del terreno a investigar, debiendo señalar en su caso el uso a que se destinan, tales inmuebles, el tipo de explotación ya sea agrícola o ganadera o ambas, precisando en todo caso, el tipo de cultivo existentes, tipo de vegetación, si se destinan a la ganadería, el número de cabezas de ganado, el tipo de construcciones y demás obras existentes dentro del predio, si este se encuentra delimitado, señalando su superficie, medidas y colindancias para lo cual el ingeniero integrante de la brigada de ejecución de resoluciones deberá elaborar el levantamiento topográfico de tales terrenos y plasmarlo en el plano informativo correspondiente.

El suscrito actuario da fe que el predio Potrero del Sauz, proviene de la fracción II de la exhacienda de Puroagua, se encuentra en las siguientes condiciones: superficie completamente desmontada con rastros de surco, sin ningún tipo de trabajo agrícola (barbechado) y sin siembra.

Por los rastros de los surcos se destina a la agricultura y además se observa pastando dentro del predio, 14 vacas y dos caballos, se observan las siguientes construcciones: 1. una casa-habitación de aproximadamente 20 x 15 metros (habitada) de tabique, se dice adobe y techo de teja; 2. una casa de aproximadamente 30 x 20 construido de tabique y loza en construcción, 3. una bodega construida de adobe y techo de teja de aproximadamente 15 x 20 metros y un corral de aproximadamente 20 x 15 metros construido de alambre de púas y poste de madera, y además por el lado poniente se observa aproximadamente una hectárea y media, sembrada de maíz (5 centímetros de altura), se encuentra circulada en su totalidad con postes de madera y concreto, alambre de púas de 5 hilos de, lado Sur y por sus lados norte y poniente con cerca de piedra de aproximadamente 2 metros y postes de madera y 3 hilos de alambre de púas.

Respecto de las colindancias, medidas y superficie se anexa plano topográfico con los datos anteriores.

Manifiesta el C. Plácido Castro Maya, que el terreno es de agricultura y después de cosechado se usa para pastar ganado.”

No habiendo más asuntos que tratar, los comisionados cerraron las actas respectivas firmándolas para constancia, junto con los integrantes del Comité Particular Ejecutivo solicitante, así como los propietarios Miguel Caballero Jiménez y Plácido Castro Maya.

Respecto al levantamiento topográfico de los predios investigados, que son propiedad de Miguel Caballero Jiménez se conforma por una superficie de 25-11-40 (veinticinco hectáreas, once áreas, cuarenta centiáreas), que proviene del lote 3 de la fracción I de la exhacienda de "Puroagua"; en cuanto al lote de terreno propiedad de Plácido Castro Maya, denominado "Potrero del Sauz", arrojó una superficie analítica de 5-54-04 (cinco hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, cuatro centiáreas).

Los citados propietarios, a fin de acreditar la propiedad sobre sus respectivos predios ofrecieron las documentales que se indican:

Copia Certificada de la escritura pública número tres mil ciento veinte, en la que consta el contrato de compraventa celebrado el trece de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, otorgada ante el Notario Público Número, con residencia en la Ciudad de Acámbaro, Guanajuato, consta que José Guadalupe Perea Linares vende a Miguel Caballero Jiménez, por conducto de sus padres, el bien inmueble identificado como "Fracción del lote 1, de la Exhacienda de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, que consta de una superficie de 21-48-73 (veintiuna hectáreas, cuarenta y ocho áreas, setenta y tres centiáreas. Amparado por el Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 97594, expedido en base al Acuerdo de Inafectabilidad, de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, a favor de Miguel Gómez de Parada, propiedad actual de Guadalupe Perea Linares.

Contrato de compraventa celebrado el veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y siete, celebrado por un lado como vendedora Lorenza Braniff de Gómez de Parada, por conducto de su apoderado Luis Orvañanos Gómez de Parada, y por el otro, como comprador Plácido Castro Maya, siendo objeto del contrato un lote de terreno proveniente de la Fracción 2, de la Exhacienda de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, denominado "Potrero del Sauz, con superficie de 6-02-50 (seis hectáreas, dos áreas, cincuenta centiáreas); amparado con Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 91507, expedido a favor de José Ramírez Ortiz, base al Acuerdo de Inafectabilidad Agrícola, de trece de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de octubre del mismo año, propiedad actual de Lorenza Braniff de Gómez de Parada, Roberto Ribera Padilla, Jorge Hernández Muños, Salvador Hernández Muñoz, Roza del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández.

En este orden de ideas, del análisis y valoración de tales constancias, en término de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia agraria, se conoce que los terrenos que fueron investigados, provienen de la fracción II y fracción del lote 1, de la "Exhacienda de Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, los que de acuerdo a su inspección ocular, se encontraron desmontados y nivelados para próximos cultivos, aun cuando se localizaron algunas pequeñas fracciones de terreno que se encontraron sembradas de maíz, y en otras se observaron diversas cabezas de ganado pastando dentro del terreno; también se observaron diversas construcciones que corresponden a los dueños de esos ranchos. Ahora bien tomando en consideración la superficie de que se componen, la calidad de las tierras, el uso a que se destinan, producen convicción para establecer que estas fracciones de terrenos resultan inafectables para la presente acción agraria, las que en el presente caso, deberán excluirse o segregarse de los predios de que provienen que se estiman afectables para la presente acción agraria.

OCTAVO. En las relatadas circunstancias, una vez analizadas y valoradas las pruebas allegadas al sumario, valoradas conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 133, 197, 202, 203 y 212 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, en correlación con los artículos 167 y 189 de la Ley Agraria, mismas que producen valor probatorio pleno a este órgano Jurisdiccional, para arribar a la conclusión de que en la especie se actualiza la causal de afectación de los predios propiedad de Magdalena Orvañanos de Quijano, Guadalupe Orvañanos de Arrangoiz; María del Socorro Gómez de Parada Braniff de Espindola, como heredera de Lorenza Braniff de Gómez de Parada; Lorenza Gómez de Parada Braniff de Prevoisin y de Miguel Gómez de Parada Braniff; Rosa del Carmen de León Mendoza de Orvañanos; Jorge Hernández Muñoz; Roberto Rivera Padilla, causahabientes de los bienes de los bienes de la extinta Lorenza Braniff de Gómez de Parada y Guadalupe Perea Linares, respectivamente, prevista por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, interpretado en sentido contrario, en correlación con el artículo 418, fracción II del mismo ordenamiento legal; esto es, quedó suficientemente probado en autos la in explotación de los predios por parte de sus propietarios, ya que tampoco acreditaron la causa de fuerza mayor que les haya impedido explotarlos parcial o totalmente.

En este punto, conviene traer a colación a manera de antecedente, que los propietarios señalados, promovieron el juicio de amparo número 1181/2001, del que, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, conoció el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, con el número D.A.-1181/2001, que se resolvió mediante ejecutoria de trece de noviembre de dos mil dos, en el que se les negó el amparo y protección de la justicia de la Unión a los quejosos, precisamente por haberse considerado en esa ejecutoria, que los predios que defienden se encontraban in explotados, y que este Tribunal Superior sí fundó y motivó la causa de afectación, sin haber demostrado durante la secuela del procedimiento, la causa de fuerza mayor que les impidió la explotación de sus predios, con las pruebas que aportaron para acreditar que fueron despojados por sus aparceros, por haber sido inconducentes.

En este orden de ideas, en el asunto que nos ocupa, conviene señalar que si bien lo resuelto en la sentencia emitida por este Tribunal Superior el seis de marzo de dos mil uno, no puede considerarse como cosa juzgada en este juicio, en virtud de que se dejó insubsistente con motivo de la interposición del diverso juicio de amparo número 174/2003, promovido por un grupo de campesinos solicitantes de tierras, a los que les concedió la protección constitucional para que se analizara su capacidad en materia agraria, sin que tal ejecutoria se haya ocupado de efectuar algún pronunciamiento en torno a los trabajos técnicos informativos de localización de los predios señalados como afectables.

Por lo anterior, se estima que en el juicio agrario que nos ocupa, se actualiza la causal de afectación de las distintas fracciones de terreno, que provienen de la "Exhacienda de Puroagua", así como la causa que dio origen al procedimiento de nulidad y cancelación de los acuerdos y certificados de Inafectabilidad agrícola que los protegen, siendo los siguientes:

Fracción del lote 3, de la "Exhacienda de Puroagua", propiedad de Javiera Gómez de Parada, con una superficie analítica de 132-64-87 (ciento treinta y dos hectáreas, sesenta y cuatro áreas, ochenta y siete centiáreas) de temporal con diez por ciento de agostadero, amparada con el certificado de inafectabilidad agrícola número 97593, expedido por Acuerdo Presidencial de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre del mismo año.

Lote de la fracción 2, de la "Exhacienda de Puroagua", propiedad de Lorenza Braniff Lascurain de Gómez de Parada, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza de Orvañanos y Teodoro García Hernández, con superficie analítica de 155-37-36 (ciento cincuenta y cinco hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y seis centiáreas), de temporal con diez por ciento de agostadero, con certificado de inafectabilidad agrícola número 91507, expedido a nombre de José Ramírez Ortiz, según Acuerdo Presidencial de trece de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre del mismo año.

Fracción del lote 1, propiedad de Guadalupe Perea Linares, con superficie de 321-74-50 (trescientas veintiuno hectáreas, setenta y cuatro áreas, cincuenta áreas) de temporal con diez por ciento de agostadero, con certificado de inafectabilidad agrícola número 97594, expedido en favor de Miguel Gómez de Parada, según Acuerdo Presidencial de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre del mismo año; y

Fracción del lote 3, propiedad de la sucesión de Magdalena Orvañanos de Quijano, con superficie analítica de 51-86-23 (cincuenta y una hectáreas, ochenta y seis áreas, veintitrés centiáreas) de temporal, con diez por ciento de agostadero, con certificado de inafectabilidad agrícola número 107731, expedido por Acuerdo Presidencial de siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres.

En esa tesitura, ha quedado debidamente probado en autos, que las referidas fracciones de terreno resultan afectables para la acción de ampliación de ejido del poblado de que se trata con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, interpretado en sentido contrario, en relación con el artículo 418, fracción II del mismo ordenamiento legal; por consiguiente, también procede dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de Inafectabilidad Agrícola, así como la cancelación de los certificados de Inafectabilidad que derivan de aquéllos, a saber:

1. Acuerdo Presidencial de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, que generó el Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 97593, expedido a favor de Javiera Gómez de Parada, que ampara la fracción del lote 3 de la "Exhacienda de Puroagua", propiedad actual de la sucesión de Javiera Gómez de Parada.

2. Acuerdo Presidencial de trece de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, que generó el certificado de inafectabilidad número 91507, expedido a favor de José Ramírez Ortiz, que ampara la fracción 2 de la "Exhacienda de Puroagua", actual propiedad de Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández.

3. Acuerdo Presidencial de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, que generó el Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 97594, en favor de Miguel Gómez de Parada, que ampara la fracción del Lote 1 de la "Exhacienda de Puroagua", propiedad actual de Guadalupe Perea Linares; y

4. Acuerdo Presidencial de siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, que generó el Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 107731, a favor de Magdalena Orvañanos de Quijano, que ampara la fracción 3 de la "Exhacienda de Puroagua".

En la inteligencia de que deben dejarse parcialmente insubsistentes los acuerdos de Inafectabilidad, así como de la cancelación parcial de los certificados de Inafectabilidad que los protege, como a continuación se indica:

1. Acuerdo Presidencial que protege a la fracción del lote 3, propiedad de Javiera Gómez de Parada, y se cancela también parcialmente el certificado de inafectabilidad número 97593, respecto de una superficie total de 129-79-00 (ciento veintinueve hectáreas, setenta y nueve áreas) que resulta afectable por permanecer inexplorada por parte de su propietaria.

Debiendo respetarse como inafectable la superficie restante del predio, es decir, 2-85-87 (dos hectáreas, ochenta y cinco áreas, ochenta y siete centiáreas), que se encuentra ocupada por una construcción de propiedad particular.

2. Acuerdo Presidencial de trece de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, en cuyo cumplimiento se expidió el certificado de inafectabilidad número 91507, en favor de José Ramírez Ortiz, que ampara un lote de la fracción 2 de la "Exhacienda de Puroagua", respecto de una superficie de 94-51-16 (noventa y cuatro hectáreas, cincuenta y una áreas, dieciséis centiáreas), propiedad actual de Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández.

En la inteligencia que deberá respetarse como inafectable la superficie restante del inmueble señalado, que es de 60-86-20 (sesenta hectáreas, ochenta y seis áreas, veinte centiáreas), por haberse observado en explotación por parte de sus propietarios actuales, que se destinan al cultivo de maíz, siendo sus nombres los siguientes:

1. Prisciliano Barrera, con una superficie de 1-90-43 (una hectárea, noventa áreas, cuarenta y tres centiáreas).

2. Antonio Barrera, con una superficie de 3-75-14 (tres hectáreas, setenta y cinco áreas, catorce centiáreas).

3. Marcelino Carrillo, con una superficie de 0-49-17 (cuarenta y nueve áreas, diecisiete centiáreas).

4. José Jiménez, con una superficie de 2-46-84 (dos hectáreas, cuarenta y seis áreas, ochenta y cuatro centiáreas).

5. Gregorio Jiménez, con una superficie de 1-47-09 (una hectárea, cuarenta y siete áreas, nueve centiáreas).

6. Plácido Castro Maya, con una superficie de 7-14-54 (siete hectáreas, catorce áreas, cincuenta y cuatro centiáreas).

7. Marcelino Carrillo con una superficie de 1-47-89 (una hectárea, cuarenta y siete áreas, ochenta y nueve centiáreas).

8. Abel Garnica, con una superficie de 2-99-00 (dos hectáreas, noventa y nueve áreas).

9. Plácido Castro Maya, con una superficie de 1-98-22 (una hectárea, noventa y ocho áreas, veintidós centiáreas).

10. Gregorio Jiménez, con una superficie de 2-83-77 (dos hectáreas, ochenta y tres áreas, setenta y siete centiáreas).

11. Jesús Castro, con una superficie de 2-68-72 (dos hectáreas, sesenta y ocho áreas, setenta y dos centiáreas).

12. Roberto Rivera Padilla, con una superficie de 4-93-19 (cuatro hectáreas, noventa y tres áreas, diecinueve centiáreas).

13. Salvador Hernández, con una superficie de 23-79-20 (veintitrés hectáreas, setenta y nueve áreas, veinte centiáreas).

14. Antonio Carreón, con una superficie de 2-93-00 (dos hectáreas, noventa y tres áreas).

3. Acuerdo Presidencial de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, en cuyo cumplimiento se expidió el certificado de inafectabilidad agrícola número 97594, en favor de Miguel Gómez de Parada, que ampara la fracción del Lote 1 de la "Exhacienda de Puroagua", respecto de una superficie de 202-95-81 (doscientas dos hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta y una centiáreas), propiedad actual de Guadalupe Perea Linares.

En la inteligencia de que debe respetarse como inafectable la superficie restante del predio en mención, que es del orden de 118-78-69 (ciento dieciocho hectáreas, setenta y ocho áreas, sesenta y nueve centiáreas), por haberse encontrado en explotación por parte de sus respectivos propietarios, a saber: 93-67-29 (noventa y tres hectáreas, sesenta y siete áreas, veintinueve centiáreas), de Noel Martínez Hernández, que se encontró debidamente delimitada con cercas de poste de madera de la región y cerca de alambre de púas de cuatro hilos, también se observaron dos bodegas, corrales de manejo para ganado, y 25-11-40 (veinticinco hectáreas, once áreas, cuarenta centiáreas), propiedad de Miguel Caballero Jiménez, que se encontraron desmontadas, niveladas y preparada para próximo cultivos.

4. Acuerdo Presidencial de Inafectabilidad, de siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, que generó el Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 107731, expedido en favor de Magdalena Orvañanos de Quijano, que ampara la fracción del lote 3 de la "Exhacienda de Puroagua", respecto de la totalidad de la superficie que protegen, siendo de 51-86-23 (cincuenta y una hectáreas, ochenta y seis áreas, veintitrés centiáreas), por haberse encontrado inexplorado en su totalidad, por parte de sus propietarios.

NOVENO. En razón de lo expuesto, se estima procedente la solicitud de ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato; por consiguiente, se concede al poblado de que se trata, una superficie total de 478-82-20 (cuatrocientas setenta y ocho hectáreas, ochenta y dos áreas, veinte centiáreas), que se tomarán de la forma siguiente:

Del lote 3, propiedad de Javiera Gómez de Parada, una superficie de 129-79-00 (ciento veintinueve hectáreas, setenta y nueve áreas); del lote de la fracción 2, una superficie de 94-51-16 (noventa y cuatro hectáreas, cincuenta y una áreas, dieciséis centiáreas), propiedad actual de Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández; de la fracción del lote 1, una superficie de 202-95-81 (doscientas dos hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta y una centiáreas), propiedad de Guadalupe Perea Linares; así como la totalidad de la fracción del lote 3, propiedad de la sucesión Magdalena Orvañanos de Quijano, una superficie de 51-86-23 (cincuenta y una hectáreas, ochenta y seis áreas, veintitrés centiáreas); todas estas fracciones provenientes de la exhacienda de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, que resultan afectables con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria interpretado en sentido contrario, en correlación con el artículo 418, fracción II de la Ley Federal de Reforma Agraria. La anterior superficie deberá localizarse de conformidad con el plano que al efecto se elabore y pasará en propiedad del poblado beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, para constituir los derechos agrarios correspondientes de los 47 (cuarenta y siete) campesinos beneficiados, relacionados en el Considerando Sexto de la presente sentencia; en cuanto a la determinación del destino de estas tierras y su organización económica y social, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

DECIMO. Por lo anteriormente expuesto, se revoca el mandamiento negativo emitido por el Gobernador del Estado de Guanajuato, de fecha veintinueve de junio de mil novecientos sesenta y cuatro.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO. Ha lugar a dejar parcialmente sin efectos jurídicos los Acuerdos Presidenciales de Inafectabilidad Agrícola emitidos el veintitrés de abril, trece de febrero y veintitrés de abril, todos del año de mil novecientos cincuenta y dos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre, veintinueve de octubre y trece de noviembre del mismo año, en base a los cuales se expidieron los Certificados de Inafectabilidad Agrícola números 97593, 91507 y 97594, a favor de Javiera Gómez de Parada, José Ramírez Ortiz y Miguel Gómez de Parada, respectivamente, propiedad actual de Javiera Gómez de Parada; Lorenza Braniff de Gómez de Parada, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández, respectivamente, únicamente en cuanto a las superficies de 129-79-00 (ciento veintinueve hectáreas, setenta y nueve áreas) fracción del lote 3; 94-51-16 (noventa y cuatro hectáreas, cincuenta y una áreas, dieciséis centiáreas) de la

fracción 2 y una superficie de 202-95-81 (doscientas dos hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta y una centiáreas), que corresponden a la fracción del lote 1, provenientes de la exhacienda de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato. Así mismo, ha lugar a dejar sin efectos jurídicos, el Acuerdo Presidencial de Inafectabilidad Agrícola emitido el siete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de mil novecientos cincuenta y tres, con base en el cual se expidió el Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 107731, a nombre de Magdalena Orvañanos de Quijano, que ampara la fracción del lote 3 de la exhacienda de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con superficie de 51-86-23 (cincuenta y una hectáreas, ochenta y seis áreas, veintitrés centiáreas).

SEGUNDO. Es procedente la solicitud de ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato.

TERCERO. Es de dotarse por concepto de ampliación de ejido al poblado referido en el punto anterior, con una superficie total de 478-82-20 (cuatrocientas setenta y ocho hectáreas, ochenta y dos áreas, veinte centiáreas), de temporal y agostadero, que se tomarán de la forma siguiente: del lote 3, propiedad de Javiera Gómez de Parada, una superficie de 129-79-00 (ciento veintinueve hectáreas, setenta y nueve áreas); del lote de la fracción 2, una superficie de 94-51-16 (noventa y cuatro hectáreas, cincuenta y una áreas, dieciséis centiáreas), propiedad actual de Lorenza Braniff, Roberto Rivera Padilla, Jorge Hernández Muñoz, Salvador Hernández Muñoz, Rosa del Carmen de León Mendoza y Teodoro García Hernández; de la fracción del lote 1, una superficie de 202-95-81 (doscientas dos hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta y una centiáreas), propiedad de Guadalupe Perea Linares; así como la fracción del lote 3, propiedad de la sucesión Magdalena Orvañanos de Quijano, una superficie de 51-86-23 (cincuenta y una hectáreas, ochenta y seis áreas, veintitrés centiáreas); todas estas fracciones provenientes de la exhacienda de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato; las que resultan afectables con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria interpretado en sentido contrario, en correlación con el artículo 418, fracción II del mismo ordenamiento legal. La anterior superficie deberá localizarse de conformidad con el plano que al efecto se elabore, y pasará en propiedad del poblado beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres para constituir los derechos agrarios correspondientes de los 47 (cuarenta y siete) campesinos beneficiados, relacionados en el Considerando Sexto de la presente sentencia; en cuanto a la determinación del destino de estas tierras y su organización económica y social, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

CUARTO. Se declaran inafectables para la presente acción agraria las fracciones de terreno provenientes de la fracción 2 y fracción del lote 1, provenientes de la exhacienda de "Puroagua", Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, propiedad de Plácido Castro Maya y Miguel Caballero Jiménez, con superficie analítica de 5-54-04 (cinco hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, cuatro centiáreas) y 25-11-40 (veinticinco hectáreas, once áreas, cuarenta centiáreas), respectivamente, por encontrarse dentro del supuesto que prevé el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

QUINTO. Se revoca el mandamiento negativo del Gobernador del Estado de Guanajuato, emitido el veintinueve de junio de mil novecientos sesenta y cuatro.

SEXTO. Publíquense: esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, así como en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los títulos y certificados de derechos agrarios correspondientes, conforme a las normas aplicables.

SEPTIMO. Notifíquese a los interesados; comuníquese Gobernador del Estado de Guanajuato, a la Procuraduría Agraria, y con copia certificada de esta sentencia, comuníquese al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo número D.A. 174/2003, de veintitrés de septiembre de dos mil tres, así como al Quinto Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, sobre el cumplimiento que se da a las resoluciones emitidas en los juicios de amparo números 622/2004 y 478/2006. Ejecútense y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto de dos mil diez.- El Magistrado Presidente, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno, Rodolfo Veloz Bañuelos, Luis Angel López Escutia y Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Carlos Tarrab Quesnel**.- Rúbrica.